

PROGRAMA DE GOBIERNO

Andalucía
2012-2016

Andalucía,
**CON
MÁS
FUERZA**

Rebélate!



ÍNDICE

PROPUESTAS PARA UNA DEMOCRACIA AVANZADA Y PARA UN PLENO DESARROLLO ESTATUTARIO	5
▪ PROPUESTAS PARA UNA DEMOCRACIA PLENA Y PARTICIPATIVA.....	5
• DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.....	5
• PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN	6
• POR UNA ANDALUCÍA FEMINISTA	6
▪ PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y LA REGENERACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ANDALUCÍA.....	7
• PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.....	7
• PROPUESTAS PARA LA REGENERACIÓN Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANDALUZAS	7
▶ Lucha contra la corrupción pública. Código ético de los representantes políticos y de los gestores públicos.	8
▶ Reforma de la Ley Electoral.	8
▪ PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA..	8
• ORDENACIÓN Y MEJORA DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ.....	8
• POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO.....	9
▪ DESARROLLO POLÍTICO Y LEGISLATIVO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA.....	10
• DEFENSA DE LA AUTONOMÍA ANDALUZA FRENTE A LAS PRETENSIONES RECENRALIZADORAS	10
• DESARROLLO LEGISLATIVO EN LA IX LEGISLATURA (2012-2016).....	10
▪ ANDALUCÍA COMO SOCIEDAD REPUBLICANA. HACIA UNA ESPAÑA FEDERAL Y REPUBLICANA.....	11
• RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA	11
• LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA COMO SOCIEDAD DE VALORES REPUBLICANOS	12
• ANDALUCÍA HACIA LA ESPAÑA FEDERAL Y REPUBLICANA.....	12
• ANDALUCÍA COMO REGIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	13
PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA CREAR EMPLEO Y CAMBIAR NUESTRO MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO	15
▪ LA POLÍTICA ECONÓMICA DE IULV-CA	15
▪ UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO PARA TRANSFORMAR ANDALUCÍA	18
• CINCO PILARES BÁSICOS	18
• INSTRUMENTOS	18
▶ El desarrollo del Título VI del Estatuto de Autonomía.....	18
▶ Planificación de la actividad económica e intervención de los gobiernos en ella.....	18
▶ Participación de las administraciones y de los agentes económicos y sociales	19

▶ Financiación suficiente y adecuada: Sistema financiero andaluz público, social y ético	19
▶ I+D+i como prioridad estratégica	19
■ SECTORES ESTRATÉGICOS EN EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO	20
● AGRICULTURA Y GANADERÍA	20
▶ La agricultura como sector estratégico	21
▶ Impulsar a nivel europeo una reforma profunda de la política agraria común	22
▶ Mejora de la vertebración del sector agroalimentario andaluz	23
▶ Atender a los sectores en crisis	23
▶ Optimización de los recursos hídricos	24
▶ Planes de actuación prioritarios: un nuevo concepto de Reforma Agraria que garantice la soberanía alimentaria	25
● PESCA Y ACUICULTURA SOSTENIBLE	25
● TURISMO SOSTENIBLE	27
● INDUSTRIAS AVANZADAS Y ENERGÍAS RENOVABLES	29
▶ Industrias avanzadas y reindustrialización	29
▶ Energías renovables (ver apartado Medio Ambiente)	30
● RECONVERSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN E INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	31
● INDUSTRIA BIOMÉDICA Y FARMACÉUTICA	31
● SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	31
■ OTROS SECTORES ECONÓMICOS	31
● MINERÍA	31
● ARTESANÍA	31
■ AGENTES ECONÓMICOS	32
▶ La Economía Social	32
▶ Instrumentos básicos de desarrollo del sector	33
▶ Propuestas en materia empresarial y empleo	33
▶ Propuestas en materia de formación y divulgación	34
▶ Propuestas en materia de desarrollo social	35
● EL TRABAJO AUTÓNOMO	35
■ UNAS ESTRUCTURAS COMERCIALES JUSTAS	36
● COMERCIO EXTERIOR	36
● COMERCIO INTERIOR	36
● VENTA AMBULANTE	37
■ PROPUESTAS PARA LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PARA IMPULSAR UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO	38
● PROPUESTAS PARA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	38
● POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	38
● REIVINDICACIONES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO	39
● PROPUESTAS PARA EL IMPULSO DE UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO	39
■ PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS	41
● AUMENTO DE INGRESOS	41
● PLAN CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LA ECONOMÍA SUMERGIDA	42
● REORDENACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	43
■ POLÍTICAS EN MATERIA ESPECÍFICA DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS	44
UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES BÁSICOS	47
■ POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, LAICA, DEMOCRÁTICA Y DE CALIDAD	47
● ESTRUCTURAL	48
● ALUMNADO	49
● PROFESORADO	50

• UNA EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA BASADA EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA EQUIDAD.....	51
■ POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD.....	52
■ INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL TRABAJO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD	54
■ SANIDAD UNIVERSAL, PÚBLICA Y GRATUITA.....	55
■ UN SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL.....	58
• LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL.....	58
• INSTRUMENTOS PARA LA COHESIÓN SOCIAL: RENTA BÁSICA Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	58
• SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.....	59
• ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	61
• TERCER SECTOR Y VOLUNTARIADO.....	62
■ PROPUESTAS PARA QUE LA VIVIENDA SEA UN DERECHO	63
■ ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON ACCESO GRATUITO, ÁGIL Y DE CALIDAD	64
■ PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	65
■ PROPUESTAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	66
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	69
■ PROPUESTAS PRIORITARIAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	69
• LA POLÍTICA ENERGÉTICA.....	70
• EL AGUA EN ANDALUCÍA	71
• GESTIÓN DEL GUADALQUIVIR	74
• POLÍTICA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.....	74
• LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS	76
• CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.....	78
• FISCALIDAD ECOLÓGICA	78
• TRANSGÉNICOS	79
• NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES	79
• PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	80
■ PROPUESTAS PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.....	80
■ PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN URBANA. ALQUILER SOCIAL DE LA VIVIENDA	83
• PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y VIVIENDA.....	84
• LA POLÍTICA DE TRANSPORTES	86
• FERROCARRIL.....	88
PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD, LA EQUIDAD Y LA DIVERSIDAD: EL PLENO DESARROLLO DE LOS DERECHOS DE LOS COLECTIVOS SOCIALES	91
■ PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES.....	91
• POR UNA IGUALDAD REAL DE LAS MUJERES EN NUESTRA SOCIEDAD	91
• ANÁLISIS DE LA REALIDAD	91
• DERECHOS POLÍTICOS, DEMOCRACIA PARITARIA Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	92
• EMPLEO, DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LAS MUJERES.....	92
• ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL	93
• DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.....	93
• PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	94
■ PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD DE DERECHOS LGTBI	95
• LA DIVERSIDAD DE LA REALIDAD TRANSEXUAL	96
• EDUCANDO EN LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL	97

• SENSIBILIZANDO DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	97
• NUESTRA SALUD TAMBIÉN IMPORTA	98
• IGUALDAD EN EL TRABAJO	99
• VISIBILIDAD LESBICA	99
• DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO SIN EDAD NI LÍMITES.....	99
■ PROPUESTAS SOBRE INFANCIA	100
• EL PACTO ANDALUZ POR LA INFANCIA COMO REFERENTE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.....	100
• ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL II PLAN INTEGRAL DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA	100
• PLAN ANDALUZ CONTRA LA POBREZA INFANTIL Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL	101
■ PROPUESTAS SOBRE JUVENTUD.....	102
• RAZONES PARA LA REBELDÍA DE LA JUVENTUD	102
• EMPLEO.....	103
• VIVIENDA	103
• DEMOCRACIA	104
• EDUCACIÓN	104
• OCIO ALTERNATIVO.....	105
• CULTURA	105
■ PROPUESTAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES	106
■ PROPUESTAS SOBRE COMUNIDAD GITANA	108
■ PROPUESTAS SOBRE PERSONAS MIGRANTES.....	109
■ PROPUESTAS SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.....	110
• PROPUESTAS GENERALES.....	110
▶ En materia de educación.....	110
▶ En materia de formación y empleo.....	111
▶ En materia de cultura.....	112
▶ Para el fomento del deporte.....	112
▶ En materia de accesibilidad.....	112
▶ En materia de nuevas tecnologías.....	113
▶ En materia de autonomía personal.....	113
▶ En materia sanitaria.....	114
▶ Otras propuestas.....	114
• PROPUESTAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	114
• PROPUESTAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	115
• PROPUESTAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.....	115
• PROPUESTAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	116
▶ Empleo.....	116
▶ Salud.....	116
▶ Educación.....	116
▶ Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.....	116
▶ Plena ciudadanía.....	117
■ PROPUESTAS SOBRE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL	117
■ ATENCIÓN A LAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES	118
CULTURA Y COMUNICACIÓN LIBRES	123
■ CULTURA EN LIBERTAD Y DIVERSIDAD	123
■ POR UNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y DEMOCRÁTICOS	125
■ POR UN NUEVO MODELO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y POR LA LIBRE DISTRIBUCIÓN DE LA CULTURA	126
■ UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DEMOCRÁTICA, SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA	127

PROPUESTAS PARA UNA DEMOCRACIA AVANZADA Y PARA UN PLENO DESARROLLO ESTATUTARIO

PROPUESTAS PARA UNA DEMOCRACIA PLENA Y PARTICIPATIVA

La situación provocada por la crisis económica y la injusta salida de la crisis ha puesto en evidencia que nuestras democracias están gobernadas por los mercados, por los poderes financieros y por las organizaciones e instituciones internacionales que les sirven –no elegidas por nadie– y no por la soberanía de los pueblos, expresada en sus instituciones parlamentarias y sus gobiernos. Ello está provocando una tremenda indignación social, una gran desconfianza política y un gran desapego significativo y más que justificado hacia una democracia representativa secuestrada por el bipartidismo. La movilización de la ciudadanía crítica es la expresión sentida de ese desapego, de una rebeldía frente a los mercados, los banqueros y los gobiernos, al grito de ¡basta ya!.

Es necesario, pues, construir una democracia real, avanzada y participativa, pero para ello se necesita una sociedad civil fuerte y vertebrada, en la que las organizaciones y colectivos sociales, desde diferentes experiencias y propuestas, contribuyan con un necesario protagonismo a la democratización y transformación de la sociedad. Entendemos que, al margen de la lógica autonomía y responsabilidad de los diversos agentes sociales, las fuerzas políticas deben apostar sin ambages por el **reconocimiento y el fortalecimiento de la participación social**. Frente al clientelismo y a la burocracia partidista, consideramos necesario pasar de la actual democracia representativa a la participativa, en la que cada ciudadana y ciudadano sean elementos activos y directos en la toma de decisiones.

Por otra parte, desde IULV-CA defendemos el **Estado Social Participativo** que supere a un Estado asistencial en el que el Bienestar Social no se ha completado nunca y los escasos servicios públicos se están cuestionando a favor de superar el déficit público. En dicho modelo, la democracia debe caracterizarse por el mantenimiento de la centralidad de lo público, como elemento capaz de promover el interés colectivo, la igualdad y la solidaridad, donde las decisiones sean tomadas desde la gestión compartida y consensuada con la ciudadanía de forma directa.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

La democracia participativa que propugnamos sitúa a la ciudadanía en el centro de la política y posibilita su participación, en cualquier ámbito territorial de Gobierno, en la planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los servicios públicos.

La participación social precisa una voluntad decidida por parte de los agentes públicos y políticos. La participación requiere una apuesta firme y decidida en potenciar la organización de la sociedad civil y fortalecer su organización y asociacionismo.

Para potenciar la intervención en los asuntos públicos hay que crear mecanismos que refuercen la capacidad y las formas de participación a todos los niveles de la esfera pública. Para ello hay que adecuar la estructura y el funcionamiento de las administraciones públicas al proyecto participativo y modificar la actual legislación en los aspectos que limiten la posibilidad de información, transparencia y participación de la ciudadanía.

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN

Otro aspecto central de la democracia participativa es la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos.

Se trata de crear una nueva forma de gestión pública que permita a la ciudadanía participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos. Proponemos generar un proceso de democratización de los servicios públicos, cuyo núcleo principal lo constituye la participación directa de la ciudadanía a la hora de definir las necesidades y servicios, codecidir las prioridades públicas, evaluar la puesta en práctica de las decisiones políticas y ejercer un control democrático de su gestión.

Elemento fundamental de la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos, es la participación en la elaboración de los presupuestos, es decir, decidir conjuntamente el destino del dinero público. De ahí que los presupuestos participativos sean nuestra propuesta fundamental y elemento definitorio de la democracia participativa.

Los Presupuestos Participativos alteran la democracia fortaleciéndola, ya que convierten a la ciudadanía en protagonista activa en los asuntos de interés general y común. Igualmente fortalecen la democracia porque los presupuestos participativos exigen transparencia, perspectiva de género, eficiencia y eficacia en la gestión. Y modifican el concepto de Administración Pública y la democratiza ya que la participación ciudadana conlleva la colaboración y cooperación de las y los representantes políticos, el personal técnico y empleadas y empleados públicos en la toma de decisiones.

POR UNA ANDALUCÍA FEMINISTA

Para conseguir que una democracia sea real y avanzada, hay que superar todo tipo de discriminaciones que existen por razón de sexo y analizar críticamente y, con perspectiva de género, el modelo de democracia actual.

El modelo de sociedad que desde IULV-CA propugnamos pasa obligatoriamente por el reconocimiento de las mujeres como sujetos de pleno derecho y copartícipes imprescindibles en la construcción de una democracia justa, equitativa y plena en derechos y libertades individuales y colectivas.

La democracia es feminista cuando se fundamenta en el objetivo principal e irrenunciable de conseguir una sociedad igualitaria en lo formal y en lo real y acabar con las estructuras patriarcales que somete a la mitad de la humanidad, las mujeres, a situaciones de discriminación, violencia, desigualdad y explotación.

Nuestro programa persigue contribuir decididamente en erradicar todos los aspectos de discriminación y luchar, a toda costa, por la superación de todos los mecanismos de dominación incluidos los sexistas, ya que sólo cuando la igualdad entre mujeres y hombres forma parte de la estructura social y de su cultura, es cuando podemos hablar de democracia.

No existe democracia cuando los roles sexistas son los que rigen todos los aspectos de la vida. No existe democracia cuando las mujeres somos sustento en los cuidados, de la educación de hijas e hijos, de los trabajos domésticos y cuando, cada vez más, seguimos siendo violentadas física, psicológica y económicamente.

En Andalucía demandamos una estructura institucional que garantice la instauración de políticas activas destinadas a erradicar definitivamente el patriarcado y todas las formas y manifestaciones de sexismo. Por ello defendemos a ultranza una Consejería que forme parte piramidal en las decisiones, que garantice la incorporación de partidas presupuestarias en todos aquellos programas que tengan incidencia en la vida de las mujeres y que coordine y afiance la perspectiva de género en la toma de decisiones.

Nuestra propuesta por un verdadero presupuesto con perspectiva de género y con programas que transversalmente la plasmen, es hoy más que nunca una reivindicación irrenunciable, porque en momentos de crisis son mucho más necesarias las inversiones públicas destinadas a reforzar la igualdad.

Requerimos, igualmente, un pacto de Gobierno Andaluz para aunar todas las voluntades en contra de la violencia de género y una Ley integral que recoja todas sus manifestaciones y se fundamente en la prevención de las mismas.

Nuestra defensa de una Andalucía democrática y justa, pasa, inequívocamente también, por la defensa de la inversión en el empleo de calidad, en igualdad de condiciones, de salarios y de posibilidades de promoción y de compartir el ocio, el descanso, la formación y los cuidados de forma igualitaria.

PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y LA REGENERACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ANDALUCÍA

PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

IULV-CA cree necesaria una reorganización de la estructura territorial de Andalucía, que tendría como objetivos fundamentales los siguientes:

- Eliminación de las Diputaciones Provinciales, al considerar que son instituciones locales de segundo grado.
- La comarcalización de Andalucía, mediante la Ley de Comarcas, como agrupación política y administrativa de municipios
- El fortalecimiento de las instituciones municipales, favoreciendo la gestión común de sus competencias. En este sentido, IULV-CA rechaza la posible desaparición de municipios menores de un determinado número de habitantes, planteando como alternativa la gestión mancomunada de determinados servicios públicos básicos.

PROPUESTAS PARA LA REGENERACIÓN Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANDALUZAS

No podemos obviar, ni dejar de señalar el desprestigio al que han llegado las Instituciones Públicas y los Partidos Políticos, y ello nos conduce a una seria y severa reflexión. El tráfico de influencias, las corruptelas, el nepotismo, el abuso de las mayorías absolutas, la opacidad en los mecanismos de distribución del poder, el acceso a la información privilegiada, los casos de transfuguismo, el creciente número de políticos imputados y ese estatus de clase política ligada a “nuevos ricos” ha despertado en la mayoría de la ciudadanía un elevado nivel de desconfianza e indiferencia, cuando no desprecio.

Recuperar la credibilidad de la acción política y de las instituciones democráticas pasa inexorablemente por asumir la ética civil y los valores democráticos en todos los ámbitos, luchar contra la corrupción y hacer política de otra forma, con participación y control de la ciudadanía. Sólo así podrá superarse la separación cada vez mayor entre las instituciones democráticas y la sociedad, los partidos políticos y la ciudadanía.

Lucha contra la corrupción pública. Código ético de los representantes políticos y de los gestores públicos.

- Adoptar las recomendaciones del Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, dependiente del Consejo de Europa, hecho público el pasado 28 de mayo de 2009.
- Instar al Gobierno del Estado a incrementar las sanciones penales aplicables a los delitos vinculados con la corrupción. Proponer al Estado la modificación del código penal para incrementar las penas derivadas de delitos cometidos en casos de corrupción, cohecho, prevaricación y todos aquellos que tengan que ver con la malversación de los caudales públicos.
- Adoptar las medidas legislativas pertinentes para aumentar la transparencia de la financiación de los partidos políticos, para ello, además, han de establecerse los mecanismos políticos administrativos y financieros necesarios que aborden directamente la justificación del gasto mediante la correspondiente auditoria.
- Elaborar un **Código Ético** de los representantes políticos y/o de los gestores políticos de las administraciones y del sector público de Andalucía.
- Crear el **Observatorio de Ética Política** en el ámbito del Parlamento de Andalucía mediante el cual se efectúe un seguimiento de los cargos públicos electos y no electos.
- Impulsar la reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía para que se constituyan en su seno Comisiones de Investigación sin posibilidad de veto.

Reforma de la Ley Electoral.

- Introducir una limitación temporal de doce años (tres mandatos) como máximo, que dinamice la vida política de la Comunidad Autónoma.
- Resaltar la dimensión de las elecciones autonómicas, impidiendo que las mismas puedan coincidir con ninguna otra convocatoria electoral.
- Adecuar la composición del Parlamento a la población real de Andalucía.
- Establecer un factor de corrección a la distribución de escaños que implica la llamada Ley D'Hont, traduciendo más fielmente la voluntad de los electores.
- Establecer la circunscripción única para Andalucía.
- Aumentar las incompatibilidades de los altos cargos de la Junta de Andalucía, en el sentido de que después de cesar en el cargo, no pueda dedicarse, en el ámbito privado, en el mismo sector al que se ha dedicado como cargo público, durante al menos 4 años.
- Establecer medidas contra el transfuguismo que permitan a los grupos políticos recuperar las actas de quienes siendo ya cargos electos dejen de pertenecer al grupo por el que se presentaron y fueron elegidos, o que hayan apoyado acuerdos de gobernabilidad o mociones de censura en contra del criterio del mismo.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ORDENACIÓN Y MEJORA DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

- Para IULV-CA, los principios que deben inspirar la ordenación del sector público son la calidad, igualdad y universalidad en la prestación de los servicios públicos a los que el sector se debe.

- Proponemos la plasmación en el sector público andaluz del principio de subsidiariedad, de forma que cuando la Administración tenga recursos y personal suficiente, no pueda derivar competencias a las agencias.

El Consejo de Gobierno será competente para adoptar la decisión de creación de Agencias, a propuesta de la Consejería competente en Administración Pública. Tanto la creación como la modificación y refundición de agencias, deberán ser mediante ley, así como la aprobación de los estatutos. Los estatutos serán negociados con los agentes sociales.

- Proponemos un único modelo de Agencia Pública: la Agencia Pública Administrativa. Actualmente son 3 los tipos de agencias (administrativas, de régimen especial y públicas empresariales). Proponemos un tipo de agencia de carácter administrativo, con potestades desempeñadas por funcionarios. Esto es compatible con el respeto al derecho público, con la integración de todos y con el contrato de gestión, para garantizar la eficacia y eficiencia del sector público en una gestión por objetivos. Asimismo proponemos un modelo colegiado de órganos de gobierno y ejecución en las agencias, con dos máximos órganos de gobierno: la Presidencia y el Consejo Rector (colegiado), dotado de competencias amplias y ejecutivas. Además estará la Dirección, supeditada al Consejo Rector a través del Presidente.
- Proponemos la regulación mediante Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de Andalucía, que desarrolle el EBEP para la Función Pública andaluza.
- Proponemos una sola Relación de Puestos de Trabajo, con puestos permanentes (o estructurales) y no permanentes. Igualmente proponemos la centralización de la planificación de las Ofertas de Empleo Público en el Gobierno andaluz, pero la convocatoria en las Consejerías.

Nos comprometemos en la creación de bolsas de trabajo con aspirantes no seleccionados, y con la obligación de acudir a ellas para interinajes y contratos de laborales temporales.

- Proponemos que el personal directivo de las Agencias sea seleccionado mediante convocatoria pública en BOJA; con un tribunal de prueba selectiva compuesto por personal de agencia; de forma que la Dirección presente una terna con 3 mejores candidatos al Consejo Rector, que será quien nombre.
- Proponemos las siguientes medidas de control democrático de las Agencias:
 - ▶ Integrar en el presupuesto de la Junta de Andalucía los presupuestos de las agencias públicas, y dar noticia al Parlamento de los presupuestos, así como de la contribución de la Administración a los mismos.
 - ▶ Obligación de remitir a la Cámara de Cuentas sus cuentas anualmente.
 - ▶ Obligación anual de rendición cuentas mediante informe o memoria a la consejería competente; ésta, al Consejo de Gobierno para revisar incluso la necesidad o no de la agencia en cuestión, los métodos, resultados y cumplimiento de la Carta de Servicios, etc., y del Consejo de Gobierno al Parlamento.
- Todo lo anterior debe plasmarse en una nueva Ley de Ordenación del Sector Público de Andalucía.

POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO

- Aprobar una Ley de transparencia y acceso a la información pública de las instituciones andaluzas.
- Implantar en las administraciones andaluzas Planes de evaluación participativa de las políticas públicas, que mejoren la calidad de la democracia y de la gestión, implicando a la

ciudadanía en su diseño, ejecución, revisión, evaluación continua y rediseño posterior, a través de todos los actores sociales y económicos del territorio afectado en cada caso.

- Regulación de salarios máximos y otras retribuciones en la Administración.
- Modificar las normas que establecen privilegios para quienes ostenten cargos públicos representativos o de gestión, estableciendo topes salariales, sea cual sea el ámbito territorial de representación (autonómico, provincial o municipal).

DESARROLLO POLÍTICO Y LEGISLATIVO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

DEFENSA DE LA AUTONOMÍA ANDALUZA FRENTE A LAS PRETENSIONES RECENTRALIZADORAS

Al calor de la crisis económica y del déficit de las administraciones públicas, especialmente de las autonómicas, se comienza a plantear por parte de sectores vinculados a la derecha social, económica y política la inviabilidad del modelo autonómico consagrado en la Constitución de 1978. Dichos sectores argumentan su ofensiva recentralizadora en lo siguiente:

- la duplicidad de competencias y la insuficiencia de recursos para gestionarlas, planteando incluso la devolución de competencias del Gobierno del Estado, para justificar la reducción del gasto público.
- la supuesta necesidad de garantizar los mismos servicios en todas las Comunidades Autónomas, para justificar la homogeneización a la baja de los servicios públicos y prestaciones sociales prestados por las Autonomías.
- el exceso de volumen de personal al servicio del sector público de las Autonomías, para justificar los recortes en las plantillas de dichas administraciones.
- la supervisión y aprobación de los techos de gasto establecidos en los Presupuestos de las Comunidades Autónomas, para limitar su capacidad de autonomía política.

Frente a esta ofensiva recentralizadora de la derecha, IULV-CA reafirma su defensa del poder andaluz conquistado por la ciudadanía andaluza mediante el referéndum del 28 de Febrero de 1980, por el que accedimos a nuestra autonomía por la vía del artículo 151, en pie de igualdad con otras nacionalidades históricas.

En consecuencia, IULV-CA se compromete con los andaluces y las andaluzas a defender el contenido del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por el Parlamento de Andalucía y por las Cortes Generales en 2007, como expresión que es de la soberanía y el autogobierno del pueblo andaluz.

DESARROLLO LEGISLATIVO EN LA IX LEGISLATURA (2012-2016)

El nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado por unanimidad y con gran consenso social, es un instrumento jurídico-político de gran potencialidad para abrir paso a políticas de progreso y de transformación social y económica de nuestra Comunidad Autónoma. IULV-CA se compromete a desarrollarlo para seguir avanzado en cohesión social y generación de riqueza, y que ésta se reparta de un modo más equitativo, que permita mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad andaluza.

Para ello, IULV-CA impulsará la aprobación en el Parlamento de Andalucía, previa participación de los agentes económicos, sociales, sindicales y colectivos ciudadanos, de las siguientes leyes:

- Ley de Comarcas de Andalucía
- Ley de Participación Institucional de Andalucía

- Reforma de la Ley Electoral andaluza
- Nueva Ley de Ordenación del Sector Público de Andalucía
- Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de Andalucía
- Ley de Transparencia y acceso a la información pública
- Ley de Memoria Democrática para Andalucía
- Ley de Cadena Agroalimentaria
- Ley Integral de Agricultura y Soberanía Alimentaria
- Ley de Participación de los trabajadores y sus representantes en la gestión de las empresas
- Ley de Fiscalidad Ecológica
- Ley de Acompañamiento para el desarrollo de la LEA
- Reforma de la Ley Andaluza de Universidades
- Nueva Ley de Protección Animal
- Ley de Ordenación de la Investigación, Desarrollo, Aplicación e Implantación Territorial de las Energías Renovables en Andalucía
- Nueva Ley Autonómica de Espacios Naturales Protegidos
- Ley de creación del Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía
- Nueva Ley del derecho a la Vivienda de Andalucía
- Revisión de la Ley de Ordenación del Territorio
- Ley “Carta de Derechos de la Ciudadanía”
- Ley de Inclusión Social y de Renta Básica
- Ley de creación del Sistema Público de Servicios Sociales
- Desarrollo y ampliación de la Ley de Igualdad andaluza para una eficacia real.
- Desarrollo y modificación de la Ley de Violencia andaluza

ANDALUCÍA COMO SOCIEDAD REPUBLICANA. HACIA UNA ESPAÑA FEDERAL Y REPUBLICANA.

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA

La memoria de las personas que dieron sus vidas por la democracia y la libertad en Andalucía es una cuestión irrenunciable para nosotros/as, y más aún el cumplimiento de un marco legal internacional que vela por los derechos de las víctimas y que en nuestra tierra se ha cerrado en falso con la Ley 52/2007, junto con la negativa de la Junta de Andalucía de dar un paso adelante en la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista y de los primeros momentos del postfranquismo.

Las propuestas de IULV-CA se centran en:

- Aplicación de la normativa internacional al respecto de desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas
- Presentación de una Ley de Memoria Democrática para Andalucía en la línea de la presentada en el Parlamento Andaluz por IULV-CA en marzo de 2011
- Impulsar desde las Instituciones democráticas de Andalucía la modificación del marco legal estatal en las líneas marcadas por el Derecho Internacional.
- Derogación del protocolo de exhumaciones de la Junta de Andalucía a favor de la aplicación de los protocolos internacionales (Protocolo de Estambul)
- Eliminación de los residuos de la dictadura (simbologías, privilegios, nombramientos honoríficos...). Entre otras cuestiones es fundamental la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas a través de las cuales se llevó a cabo la represión.
- Atención especial en el currículo educativo y en la política cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente especialmente en lo concerniente a la lucha democrática.
- Intervención de la Junta de Andalucía en la localización de las personas desaparecidas
- Puesta en conocimiento de las autoridades judiciales de las desapariciones producidas e intervención de oficio de la Fiscalía, para en primer lugar defender los derechos de las víctimas y en segundo para el enjuiciamiento de las personas responsables que pudieran continuar vivas.
- Dignificación adecuada de las víctimas de la guerra, dictadura y transición. En ello hacer una mención especial a tres andaluces: Blas Infante, García Caparrós y Verdejo.

LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA COMO SOCIEDAD DE VALORES REPUBLICANOS

IULV-CA se define como fuerza federal y republicana y desde esa definición luchamos por el cambio de modelo de Estado, que ha de ser integral. Para ello, es necesario impulsar la construcción de una sociedad con valores republicanos, que dé origen a un nuevo modelo económico, político y social, que habrá de culminar en la sustitución de la actual monarquía constitucional por una república federal.

La sociedad republicana debe asentarse en

- La justicia social y económica como eje central
- Los Derechos Humanos como punto de partida de la construcción de la III República
- Democratización de la economía
- Democracia participativa
- Laicidad

ANDALUCÍA HACIA LA ESPAÑA FEDERAL Y REPUBLICANA

IULV-CA defiende la República federal como modelo de Estado para España. Ello implica la necesidad de ir generando las condiciones políticas y sociales que permitan avanzar hacia el modelo de Estado Republicano. Para ello, desde IULV-CA se impulsará el movimiento cívico republicano y la Red de Municipios por la III República.

En el marco de la III República Española de estructura federal, Andalucía tendría la consideración de federación vinculada por el pacto federal. En cualquier caso, dicho pacto federal debe basarse en relaciones igualitarias y solidarias entre las distintas federaciones integrantes del Estado.

Para avanzar en un horizonte federal será necesario poner en valor la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma, establecida en el Artículo 184 de nuestro Estatuto de Autonomía, y la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado, establecida en el artículo 220.

ANDALUCÍA COMO REGIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Andalucía es una región integrante de la Unión Europea. Por ello, el Gobierno de Andalucía debe poner en valor, con firmeza, lo establecido en el Artículo 231 de nuestro Estatuto, relativo a la participación de nuestra Comunidad Autónoma en la formación de la posición del Estado ante la Unión Europea, y en el artículo 232, relativo a la participación en las decisiones de la UE.

PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA CREAR EMPLEO Y CAMBIAR NUESTRO MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO

LA POLÍTICA ECONÓMICA DE IULV-CA

La crisis económica parece no tener fin y la situación económica en Andalucía se deteriora cada día más.

Esta situación actual de Andalucía es la consecuencia, por una parte, de la crisis de las políticas neoliberales, especialmente en el ámbito financiero, aplicadas o permitidas por los gobiernos occidentales en el contexto de la desregulación financiera y del proceso de acumulación de capital a escala global.

De otra, las políticas neoliberales aplicadas en los años del desarrollismo económico, han acentuado los desequilibrios económicos de nuestra Comunidad: déficit estructural de nuestra balanza comercial, terciarización de nuestra economía, descenso continuado de la formación bruta de capital, dependencia asfixiante de las cadenas comerciales transnacionales de nuestro tejido productivo y sobre todo, cuando la crisis ha mostrado su peor cara, más de un millón de parados, el 20% de la población andaluza en pobreza extrema y una sociedad hipotecada.

En una Andalucía que se encuentra en el área económica del capitalismo desarrollado y que se ha convertido en una región económica muy dependiente de los centros económicos de Europa y EE.UU., con actividades económicas de baja productividad, baja capacidad de generación de rentas y de valor añadido, la crisis económica se manifiesta con mayor dureza. Las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos del PSOE y el PP, sin analizar ni corregir las causas de la crisis, tienden a perpetuar este modelo económico capitalista que nos traído hasta aquí.

¿Cómo salir de la crisis? Existen, simplificando mucho, dos políticas para salir de la crisis:

La primera opción es la impuesta por el gran capital y las grandes multinacionales a través de los gobiernos conservadores de Europa y EE.UU. basada en la estabilidad financiera con el fin de restablecer las condiciones idóneas para el mercado, programas de ajuste durísimo para los trabajadores –trabajadoras y las clases medias, sin que esta política garantice a medio plazo el desarrollo progresista de nuestro pueblo y ni tan siquiera la salida de la crisis en la que estamos inmerso. En este marco las políticas sociales están teniendo un drástico recorte, cuando estas son más necesarias que nunca.

La política monetaria Europea no favorece el desarrollo de las regiones dependientes, como es el caso de Andalucía, ya que permite la invasión de productos extranjeros en detrimento de la industria y la agricultura local. Las grandes cadenas comerciales internacionales contribuyen a

que se imponga este modelo. Llevamos en España diez años con Balanza Comercial deficitaria: 2 billones de euros acumulados. Con la crisis económica y la deuda financiera acumulada se agudiza la crisis del sistema financiero

La política financiera (reconducir el déficit) sin la política fiscal y monetaria que favorezca el desarrollo de los procesos productivos locales y restrinjan, de alguna manera, las importaciones, hace prácticamente imposible la creación de empleo y el aumento de la demanda interna.

Por tanto, abundar en dichas política perjudicará doblemente a Andalucía: por la afección general y por su condición dependiente. Necesitamos cambiar esta dinámica y poner en acción otra política para que Andalucía salga del pozo económico y social en el que se encuentra.

La segunda opción en esta coyuntura es la que planteamos desde la izquierda transformadora: una política económica más planificada en la que el Estado induce estrategias para el desarrollo económico y social con políticas activas para el desarrollo económico y la protección social.

Una política económica para transformar Andalucía desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras y de una fuerza de izquierdas, debe hacer frente a **los dos problemas fundamentales que tiene Andalucía:**

- **recuperar un tejido productivo, que hoy por hoy se deprime, en el marco de un nuevo modelo de desarrollo económico y social, y**
- **crear empleo y hacer frente al drama social que sufren millones de andaluces, el aumento de la pobreza y la exclusión social.**

Para alcanzar estos dos objetivos, desde IULV-CA proponemos dos grandes acuerdos:

Para recuperar un tejido productivo en el marco de un nuevo modelo de desarrollo económico y social, es necesario y urgente **impulsar un Pacto por el Crecimiento Económico, el Empleo y el cambio de Modelo de Desarrollo** con los agentes económicos y sociales interesados en el mismo, dotado de 10 mil millones de euros de inversión pública en toda la legislatura, a los que habría que sumar otros diez mil millones de la iniciativa privada: hay que intervenir en la economía con apuestas estratégicas, para el corto y medio plazo, que respondan en primer lugar a la crisis de demanda en la que estamos inmersos; lograr la transformación del modelo productivo, crear una base industrial sólida que invierta en I+D+i, una política energética alternativa y un sistema educativo más vinculado al sistema productivo y mejorar la formación profesional.

Con la inversión directa orientada al relanzamiento de la actividad económica en el ámbito territorial con nuevas estructuras productivas, eliminando las causas que impiden su propio desarrollo, sustituyendo importaciones por tejido productivo propio y activando las potencialidades se sale de la crisis. Esta política, para que sea eficiente ha de darse en el marco de una Planificación Integral de la economía con formulas activas de participación y cogestión de los agentes económicos y sociales

Esta política de inversiones ha de orientarse por tanto, a desactivar los factores exógenos que impiden el desarrollo de la economía andaluza, como impulsar los sectores estratégicos de nuestra economía, estimular el desarrollo y el comercio local. No se trata solo, de dinamizar la demanda interna, sino desarrollar la industria, la agricultura, el turismo... superando las causas que impiden su desarrollo. Esta política, además del Plan citado, se apoyaría en las líneas de actuación que exponemos a continuación.

Se necesita poner en marcha **un nuevo modelo de desarrollo a partir del desarrollo de programas de actuación que permitan superar las deficiencias estructurales que se producen en los sectores económicos estratégicos de Andalucía: el sector agroalimentario, el sector energético y el turismo, así como reconducir el sector de la construcción**

Es preciso también acometer la ordenación del territorio y el desarrollo de la comarcalización para articular una política medioambiental equilibrada, un desarrollo agrario e industrial

conforme a las necesidades productivas, un desarrollo energético más eficiente y una optimización de los planes de desarrollo económico.

El nuevo modelo productivo pasa también por el desarrollo empresarial y la mejor preparación de los empresarios andaluces, así como parar el envejecimiento empresarial en el sector agrario, clave para su desarrollo. Especial atención al desarrollo cooperativo, economía social, agricultura familiar y a la concentración de la oferta para estimular la capitalización y dinamización del tejido productivo andaluz.

Es también urgente y necesaria la puesta en marcha de programas específicos para el desarrollo del I+D+i vinculado a los sectores económicos y a la sanidad pública

Desde la filosofía de la plena convicción de la utilidad y eficacia de lo público, es imprescindible acometer la normalización de un sistema financiero al servicio de esta política, ya que los grandes bancos españoles y las Cajas actuales están en proceso de bancarización, no están interesados. En **consecuencia no existe Banca Pública, ni Banca Social y es un objetivo irrenunciable a medio plazo.**

En Andalucía hay **una fuerte corriente social que pide este tipo de Institución Financiera que posibilite la existencia de créditos suficientes para la economía.** Desde una nueva **Legislación sobre Cajas de Ahorros, el concierto con los sectores económicos, la implicación de los usuarios y el apoyo de la Junta de Andalucía, se puede articular una nueva banca social.** Una vez más, para poder sacar adelante esta política, que es necesaria poner en marcha, se requiere la participación activa de lo privado con lo público, en este marco es necesario la reforma del ICO para que el crédito a las empresas sea un servicio público no un negocio.

Para mejorar las cuentas públicas hay que emprender con decisión la Reforma de la Administración y una nueva política fiscal, que permita mayor austeridad en el gasto, mejor eficiencia de los servicios y mayor equidad en la política de ingresos. Plan de Eficiencia y Transparencia administrativa de Andalucía, en el marco de la concertación Especial atención a la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, dotándolos de autoridad y medios económicos suficientes.

Todo ello, reforzando y desarrollando la participación de los agentes económicos y sociales en la aplicación y vertebración de la política económica de la Junta de Andalucía en el marco de una concepción planificada de la economía en la que se **integran** todas las variables. Los Pactos suscritos, la concertación social y los organismos de representación y estímulo de la economía, que han de ponerse en marcha, **además de ser órganos consultivos y de propuesta deben articular formas de cogestión para su desarrollo.**

El segundo objetivo de nuestra política económica es crear empleo y hacer frente al drama social que sufren millones de andaluces, el aumento de la pobreza y la exclusión social.

En Andalucía, ante todo, con un millón doscientos cuarenta y ocho mil quinientos parados en Andalucía, una tasa de paro del 31,23%, de los que el 40% no tiene ninguna prestación y más de 370.000 familias que se encuentran el umbral de la pobreza, sin ningún tipo de recursos, es evidente que es **urgente un gran Pacto por el Empleo y Contra la Pobreza, entre todas las fuerzas progresistas.** Su objetivo es que toda la ciudadanía andaluza tenga unos ingresos mínimos, unas prestaciones sociales y un acceso garantizado a los servicios públicos básicos, que le permitan tener unas condiciones de vida dignas.

El pacto social significa articular desde abajo un tejido social de defensa contra la pobreza y el desempleo, con los sindicatos, las asociaciones de parados, Cáritas, Cruz Roja...con el fin de cubrir las necesidades mínimas de todas las familias andaluzas, y **con la partición económica y administrativa de la Junta de Andalucía y de las Corporaciones Locales.** El objetivo principal es que todas las familias andaluzas, ante el drama de la crisis, tengan cubierto los niveles mínimos de subsistencia, entre ellos la vivienda, y además contribuir a la búsqueda de empleo, creación de nichos de empleo y formación profesional. **Este Pacto se concretaría en dos planes:**

- Plan de choque con medidas urgentes para reactivar la economía y la generación de empleo.
- Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, en el que la aportación económica de la Junta de Andalucía para el 2012 sería de 600 millones de euros.

La inversión de la Junta de Andalucía para desarrollar el conjunto de estas políticas económicas debería estar cercana a los 15.000 millones de euros en el conjunto de la IX Legislatura.

UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO PARA TRANSFORMAR ANDALUCÍA

CINCO PILARES BÁSICOS

El modelo de desarrollo propuesto por IULV-CA se basa en cinco pilares fundamentales:

- Sostenibilidad
- Equidad Social y Territorial
- Igualdad de género
- Atención a la diversidad
- Democracia económica

INSTRUMENTOS

El desarrollo del Título VI del Estatuto de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía -plagado de referencias sociales en buena parte gracias a IULV-CA- recoge como objetivos el pleno empleo estable y de calidad, la sostenibilidad, la promoción de la inversión pública o un desarrollo industrial y tecnológico solidario (artículo 10). Entre los derechos básicos de la ciudadanía se citan la renta básica o un sistema público de derechos sociales (artículo 23), o el más amplio del derecho al trabajo y a la formación profesional (artículo 26). Como principios rectores de las políticas públicas se fijan el empleo de calidad, el fomento del sector agroalimentario o el impulso de las energías renovables (artículo 37), especialmente el Título VI, marcado de referencias sociales: iniciativa pública y planificación económica (artículo 157), fortalecimiento de un sector financiero andaluz (artículo 162), modernización económica (artículo 163), desarrollo de políticas de inserción laboral y creación de empleo estable y de calidad (artículo 169), participación de los trabajadores en la empresa (artículo 170), adopción de medidas sociales en la contratación pública (artículo 174), uso de los tributos como instrumento de cohesión y bienestar social (artículo 179), etc.

Nuestro objetivo prioritario, por tanto, ha de ser promover, impulsar y trasladar a la sociedad propuestas económicas y de generación de empleo conforme a lo refrendado por el pueblo andaluz frente a las políticas neoliberales, de recortes y de ajustes a los que los mercados están sometiendo a la mayoría social de Andalucía.

En definitiva, nuestras propuestas persiguen garantizar y anteponer la soberanía del pueblo andaluz a la soberanía de los mercados.

Planificación de la actividad económica e intervención de los gobiernos en ella

La planificación de la actividad económica y la intervención de los gobiernos en ella son instrumentos que vienen planteados en la Constitución Española de 1978 y en nuestro propio Estatuto de Autonomía. En el artículo 156 se establece que “toda la riqueza de la Comunidad Autónoma, en sus distintas formas y manifestaciones, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general” y en el artículo 157 se cita “(...), la planificación y el fomento

de la actividad económica” como fundamentos de la actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito económico.

Asimismo, en el artículo 165 se plantea la posibilidad de la participación de Andalucía en la elaboración de las decisiones estatales que afecten a la planificación general de la actividad económica, especialmente en aquéllas que afecten a sectores estratégicos de interés para Andalucía, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 131.2 de la Constitución.

Participación de las administraciones y de los agentes económicos y sociales

Un instrumento fundamental para construir un nuevo modelo de desarrollo económico es la participación de las administraciones y de los agentes económicos y sociales en su definición, planificación y gestión.

El modelo de diálogo y de concertación social ha demostrado su utilidad para contribuir al desarrollo de Andalucía y precisamente por su valor ha sido recogido en nuestro Estatuto de Autonomía. Manteniendo los órganos consultivos y de participación ya existentes y reconocidos en el mismo, es necesario, no obstante, ampliar la participación a otros agentes económicos y sociales. Por ello, IULV-CA se compromete con la aprobación en esta legislatura de una **Ley de Participación Institucional**, además de otras normas que amplíen la participación real y efectiva de la sociedad civil organizada en Andalucía. Dicha Ley debe establecer los **criterios y las formas de participación** de los entes sociales y económicos representativos en Andalucía en las diversas instituciones en las que se requiera su participación.

Financiación suficiente y adecuada: Sistema financiero andaluz público, social y ético

- Impulsar la creación de una **Banca pública, social y ética**, gestionada por la administración pública, los sindicatos y la economía social, creada con el ahorro de trabajadores, autónomos, cooperativas, sociedades laborales y PYMES que quieran capitalizar el pequeño ahorro con fines de inversión socialmente rentables y un código de conducta de banca ética.
- Instar al Gobierno del Estado a la **participación pública en el control y gestión de entidades financieras** que hayan obtenido ayudas o avales del Gobierno.
- **Incrementar dotación del BEF** (Banco Europeo de Finanzas) a la financiación de empresas y sectores estratégicos de Andalucía.
- Creación de un **Fondo de Apoyo a los Ayuntamientos para la Recuperación del carácter público** de propiedad y gestión de sus servicios públicos anteriormente privatizados.

I+D+i como prioridad estratégica

- Supresión del diferencial científico y del fomento de la I+D+i para garantizar el desarrollo en condiciones de rentabilidad;
- Poner como objetivo el incremento de la inversión pública y la privada en I+D+i, avanzando una cuarta parte del diferencial actual en cada presupuesto de los cuatro próximos, y estableciendo cláusulas de contratación y subvención que favorezcan a las empresas que inviertan en I+D+i.
- Promover programas de I+D destinados a encontrar nuevos usos para los residuos procedentes de la demolición y la construcción. Se debería trabajar de manera que los esfuerzos fueran destinados al establecimiento de infraestructuras suficientes para que progresivamente se fueran tratando la mayor cantidad de residuos posible, reduciendo la extensión de las escombreras controladas y no controladas existentes en Andalucía y evitando la aparición de otras nuevas.

- Primar los proyectos que impliquen mejoras sociales y medioambientales: políticas de igualdad y participación, economías alternativas, salud pública, enfermedades raras y no rentables para las grandes empresas, cambio climático, sistemas productivos más sostenibles, biorremediación, energías alternativas, etc.

SECTORES ESTRATÉGICOS EN EL NUEVO MODELO DE DESARROLLO.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

En la actualidad Andalucía se encuentra en una fase de destrucción masiva de fuerzas productivas, con la consiguiente descapitalización de su economía. La lucha contra el déficit público, el endeudamiento del sistema financiero, el elevado paro y la bajada de los salarios contribuyen a que la crisis económica sea más profunda y más difícil su recuperación. A pesar de ello el sistema agroalimentario andaluz es capaz de mejorar su capacidad productiva, adaptándola a los nuevos tiempos, a la vez que contribuye a la **función social de la tierra**. Al mismo tiempo se está viendo olvidado constantemente en las grandes decisiones político-económicas con el fin de favorecer a otros sectores que han demostrado obedecer más a escenarios coyunturales que a sectores tradicionalmente asentados. Por eso urge la necesidad de cambiar de política económica en Andalucía y poner la política macroeconómica al servicio de los sectores productivos de Andalucía y en especial al sector agroalimentario.

El uso constante de la agricultura como moneda de cambio tiene consecuencias terribles a pie de explotación. Los agricultores se ven incapaces de influir en las decisiones relacionadas con la conformación de políticas que les afectan de manera directa, lo que supone un lastre demasiado pesado con el que no puede ni debe cargar más el sector primario. La incapacidad de influencia en la que se encuentran los productores agrarios a la hora de negociar sus precios con las grandes cadenas distribuidoras, tiene como consecuencia unos márgenes comerciales abusivos que acaban llevando a la ruina a los productores y mermando, aun más si cabe, la capacidad adquisitiva de los consumidores.

Para todo ello es clave el desarrollo de un **modelo social de agricultura** dentro del marco de la **soberanía alimentaria**. Modelo que a duras penas ha sobrevivido al continuo acoso por parte de los grandes capitales que controlan y acaparan el mercado agrario a través de la especulación. Para un correcto desarrollo de la agricultura y la ganadería, procedería aplicar una comarcalización adecuada por parte de la Junta de Andalucía con el fin de priorizar y focalizar esfuerzos de una manera mucho más eficaz. El desarrollo de las agriculturas locales, orientadas a canales cortos de comercialización como alternativa viable a una parte de la producción agraria debe ser una prioridad. El espíritu inversor e innovador del regadío en Andalucía debe verse apoyado por parte de las instituciones. Del mismo modo se deben impulsar la agricultura y ganadería ecológicas a través de técnicas que permitan la optimización de los recursos naturales, excluyendo el uso de productos químicos de síntesis.

La agricultura y la ganadería del siglo XXI deben tener un carácter multifuncional, que atienda a las variadas necesidades de la sociedad. Necesidades que van desde la obtención de alimentos sanos y de calidad a unos precios razonables -la principal-, hasta la preservación del medio ambiente, pasando por la fijación de la población al territorio que permite mantener un medio rural vivo.

La agricultura y la ganadería de este siglo, no será nada sin la agroindustria que se nutre de ella. La potenciación de la industria asociada a la agricultura andaluza debe ser un factor capital en el diseño y desarrollo del sector agrario en Andalucía. Este paso, de potenciación de la agroindustria, debe ser fomentado a través de un incremento del artesanado y la pequeña industria, que permita a los productores el desarrollo de sus productos y la diferenciación a través de un impulso a la producción de calidad. Un sector agroindustrial fuertemente vinculado con el modelo de agricultura andaluza, tendrá como consecuencia un sector agrario fuerte capaz de ser una importante fuente de empleo para la región.

Desde Andalucía y en el ámbito de la Unión Europea proponemos que se cambie radicalmente la Política Agraria Común, porque ésta no es capaz de cumplir uno de los principales objetivos para los que fue creada, “estabilizar las rentas de los agricultores”. La Política Agraria Común debe ser capaz de procurar unas rentas dignas a los agricultores y ganaderos, al tiempo que protege el medio ambiente sin que esto suponga una carga sólo soportada por los agricultores, además debe ser capaz de regular el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, evitando las injerencias externas con fines especulativos.

La ordenación de los mercados agrarios debe ser la prioridad a la hora de gestionar el sector agrario, puesto que la mayor parte de la renta de los agricultores y ganaderos andaluces viene a través de la venta de su producto en el mercado. La actual Política Agraria Común, olvida deliberadamente el ordenamiento de los mercados agroalimentarios teniendo como consecuencias palpables el paulatino descenso de las rentas de los agricultores.

En la actualidad es posible actuar en el proceso de reforma que continuará a lo largo de 2012 y la PAC resultante debe fomentar un modelo social de agricultura a la vez que consolide un mercado justo y sostenible.

Debe efectuarse una gestión forestal ecológica, basada en la protección del suelo y la biodiversidad para prevenir la degradación de las cubiertas vegetales y la desertificación progresiva. El Plan Forestal andaluz debe ser impulsado corrigiendo sus deficiencias en el ámbito de la gestión, al tiempo que se hace una ordenación de los recursos forestales de nuestra comunidad. Esta planificación forestal andaluza no debe tratar de convertir los espacios forestales en terreno prohibido para la actividad primaria, sino que debe programarse en conjunto con todos los planes destinados a la actividad agrícola y ganadera de nuestra región. Al igual que los bosques de sierra resultan fundamentales para mantener la fertilidad de los valles, la planificación del uso de los espacios forestales no se puede pensar de manera aislada al resto de las actividades. Por lo que deben fomentarse formas mixtas de gestión, como el pastoreo controlado para la prevención de incendios, la explotación de recursos micológicos, la regulación, potenciación y diferenciación de la producción corchera; valoración de los servicios ambientales prestados en las áreas protegidas, etc. De igual manera se deben iniciar los contactos entre los distintos agentes económicos y sociales para elaborar el Plan Forestal en el marco 2015 – 2025.

Por todo ello proponemos:

La agricultura como sector estratégico.

El medio rural andaluz aglutina actualmente a más del 55% de la población total de Andalucía, es decir, más que en el total de Castilla La Mancha y Castilla-León juntas. Este hecho es consecuencia de la función social de la tierra, que ha permitido a Andalucía tener pueblos con vida y esperanzas de futuro. Por otra parte, el “complejo agroalimentario” (*agricultura más industria asociada a la misma*) va adquiriendo cada vez más peso en el volumen de empleo total en Andalucía, algo especialmente significativo en un contexto generalizado de destrucción de empleo. Además la balanza comercial agroalimentaria andaluza es la única que aporta un saldo positivo a la balanza comercial de la región. Estos hechos dejan patente el carácter estratégico del sector agrario en Andalucía y la importancia de su desarrollo en el futuro.

El sector agroalimentario andaluz ha realizado un extraordinario esfuerzo de modernización que nos ha colocado a la cabeza entre las comunidades de nuestro país y del entorno europeo. Así, con el 18% de la SAU del país, Andalucía genera el 25% de la Producción Final Agraria estatal y casi el 3% de la PFA de la UE.

La cada vez mayor dependencia de terceros en cuanto a energía y tecnología se refiere debe hacernos recapacitar de cara a asegurarnos la alimentación futura dentro de un marco de soberanía alimentaria. Por ello, proponemos que la agricultura y la ganadería sea uno de los sectores prioritarios para el gobierno de Andalucía.

Impulsar a nivel europeo una reforma profunda de la política agraria común.

La evolución de la PAC nos sitúa en el camino de su renacionalización, fenómeno que desde el punto de vista de un estado descentralizado como el español, en el que las competencias en materia de agricultura corresponden en exclusiva a las comunidades autónomas, implica la necesidad de diseñar políticas propias para el sector, en el marco de la ordenación general de la economía.

Las continuas reformas de la PAC desde el año 2000 han ido profundizando en una idea totalmente errónea respecto a la agricultura: desligar los apoyos de la actividad productiva. Este hecho no hace sino desincentivar la producción agrícola y ganadera, con las consecuentes repercusiones que ello acarrea: pérdida de competitividad, envejecimiento de la población agraria, falta de innovación, etc.

La creciente dependencia de nuestra agricultura, y en especial de nuestra ganadería, de las importaciones está fomentada precisamente por el paradigma en el que se desarrolla la nueva PAC. La entrega sin sumisión del comercio agrario a los grandes monopolios que especulan con el futuro de miles de familias no hace sino agravar la crisis estructural que sufre el sector. Este hecho se produce al desvincular la PAC de la soberanía alimentaria, objetivo que ha de ser prioritario.

- Medidas de mercado. Ante la ausencia de medidas de ordenamiento de los mercados agrarios, la UE debe cambiar radicalmente su política que nos encamina a la desregulación total de los mercados. Las medidas de gestión de los mercados agrarios (ordenación y gestión pública, control de la producción, mantenimiento de cuotas lácteas, derechos de plantación de viñedo y cuotas de azúcar, almacenamiento, etc.), deben ser capaces de frenar la volatilidad de los precios asegurando siempre que estos superen los costes de producción. Es fundamental la aplicación del principio de preferencia comunitaria y el replanteamiento del actual marco de negociación de la OMC y los acuerdos de libre comercio con terceros países, que no hacen sino provocar la deslocalización de producciones europeas en terceros países con capital comunitario.
- Ayudas directas. El apoyo a los agricultores y ganaderos debe estar siempre vinculado al mantenimiento de la actividad y nunca al simple hecho de poseer la tierra. A través del mantenimiento de la actividad se contribuye a la viabilidad de las explotaciones y a la generación de empleo, siempre a través del agricultor profesional. La finalidad de las ayudas directas debe ser estabilizar las rentas de los agricultores, que dirigen siempre sus esfuerzos para que la actividad sea viable por sí misma.
- Importaciones de terceros países. Las exigencias y controles de los productos de países terceros en materia ambiental, social, laboral, de calidad y seguridad alimentaria deben ser, como mínimo, iguales a las exigidas a los agricultores europeos, de manera que al menos nuestros productos compitan en igualdad de condiciones con los de fuera de la Unión. Por el grave riesgo que conlleva para el sector hortofrutícola andaluz, rechazamos los acuerdos con Marruecos y Mercosur.
- Concepto de “agricultor activo”, con el fin de que los apoyos vayan vinculados al mantenimiento de la actividad en el medio rural, debe tener una definición del concepto estrechamente vinculada a la propia actividad agraria y al nivel de empleo generado, cosa que parece obviar la nueva PAC.
- Marco financiero 2014-2020. Rechazo frontal al recorte del 15% propuesto por la Comisión para la nueva PAC en el marco desde 2014 hasta 2020. Con este presupuesto, el peso de la PAC en el marco global descenderá hasta el 25%, suponiendo esto menos del 0,45% del PIB europeo. Para el caso de Andalucía, el primer pilar de la PAC es capital, porque es dinero financiado 100% por la UE sin necesidad de ser cofinanciado por Andalucía. Además, este dinero es íntegro para los agricultores y ganaderos andaluces, sin depender del

designio coyuntural por parte de la administración, frente a lo que puede llegar a pasar con el segundo pilar.

- Desarrollo Rural. Andalucía debe desplegar una política de desarrollo rural propia que, sin obviar las orientaciones estratégicas de la Unión Europea, adecúe la intervención pública en el medio rural a las exigencias y demandas de nuestra comunidad, estableciendo acciones que permitan: mejorar la competitividad de las explotaciones, la generación de un mayor valor añadido y su repercusión en el productor, así como avanzar en la sostenibilidad de la actividad agraria.

Mejora de la vertebración del sector agroalimentario andaluz.

Los continuos procesos de desregulación de los mercados agrarios han tenido como consecuencia una serie de efectos perversos en las relaciones comerciales a lo largo de la cadena de valor, perjudicando siempre al eslabón más débil, los productores. La falta de claridad en el proceso de formación de precios y el abuso de poder por parte de la gran distribución en la cadena alimentaria están a la orden del día.

Con el objeto de lograr un reequilibrio, mejorar la eficiencia de la cadena de valor alimentaria, es necesario actuar en los siguientes aspectos:

- Ley de Cadena Agroalimentaria. Se hace imperativa la existencia de una ley que ordene el funcionamiento de la cadena de valor agroalimentaria. Esta ley regula las prácticas abusivas, al mismo tiempo que establecerá los márgenes máximos que pueden existir a lo largo de la misma.
- Fomentar el asociacionismo, potenciando el aumento de dimensión de las cooperativas. La concentración de la oferta a través de planes sectoriales específicos de integración cooperativa, especialmente en el ámbito de la comercialización, debe ser un objetivo prioritario, con el fin de alcanzar una mayor dimensión empresarial, adecuada al marco agroalimentario actual.
- Organizaciones Interprofesionales. Frente al progresivo dismantelamiento de los mecanismos públicos de gestión de los mercados, es necesario dotar a las organizaciones interprofesionales de una seguridad jurídica en los acuerdos sectoriales que se alcancen en su seno.
- Contratos agrarios. Se hace necesario tener contratos agrarios en los que puedan incluirse precios referenciados a índices sectoriales determinados, entre ellos los costes de producción, con el fin de incrementar la transparencia a lo largo de la cadena de valor.
- Canales cortos de comercialización. Se hace imprescindible la articulación y fomento de este tipo alternativo de canal comercial, con el fin de dar salida a una parte de la producción que difícilmente la encontrará a través de los cauces tradicionales. A través de este tipo de canales, se comercializa toda clase de productos tradicionales con un alto valor añadido que contribuyen a la conservación del medio ambiente a través de la reducción de las necesidades de transporte. El desarrollo de canales cortos de comercialización pasa por la puesta en práctica de acciones concretas, de manera que colegios, hospitales y todo tipo de establecimientos públicos con comedores tengan facilidad para acceder a la compra de producción ecológica local para sus menús. Acciones como, autorizar y potenciar la distribución directa a empresas de restauración y fomentar la “localización” de lo consumido, fomentar estilos de restauración “*Slow food*” en el sector de la restauración, promocionar las cooperativas de consumo local y ecológico como vía de relacionar producción y consumo sin intermediarios.

Atender a los sectores en crisis.

- Olivar. Un sector que acapara el 33% de la SAU regional y del que dependen más de 300 municipios que generan cerca de 14 millones de jornales no puede ser rehén del gran desequilibrio existente en el poder negociador entre la oferta y la gran distribución, que usa

el aceite de oliva como producto “reclamo”. Esto contrasta con el correcto funcionamiento que tiene este mercado en cuanto a producción y necesidades de consumo. Por ello pedimos mecanismos de gestión con actualización automática de precios de activación, defensa de la calidad, mejora del etiquetado e información al consumidor, además de una lucha contra el fraude.

- Ganadería. Elaboración de un plan estratégico para garantizar la viabilidad del sector a medio-largo plazo: abastecimiento de piensos a precios estables, potenciación de los mercados locales, mantenimiento de los mecanismos de regulación comunitarios (cuotas, aranceles, etc.) De igual manera, exigimos una adaptación del marco comunitario a la ganadería andaluza, ya que éste se encuentra diseñado para unos estándares del norte de Europa que difícilmente se ajustan a los de nuestra región.
- Frutas y Hortalizas. Los más de 350.000 empleos generados por el sector hortofrutícola andaluz deberían ser ya de por sí una razón de peso para priorizar esfuerzos en el sector, pero además éste aporta el 50% de todas las exportaciones alimentarias andaluzas. Para un sector eminentemente orientado al mercado, el principal problema es la competencia desleal provocada por frutas y hortalizas procedentes de terceros países. Por tanto, pedimos que la preferencia comunitaria se priorice como principio básico de la PAC, y se planteen las mismas exigencias económicas, sociales, laborales y ambientales a los productos que lleguen de fuera de las fronteras de la Unión.
- Cereales. Dentro de las dificultades a las que se enfrenta el sector, es la fluctuación de precios provocada por la especulación en los mercados financieros, avivada por la desarticulación de mecanismos de regulación, la que lo tiene en jaque. Por todo esto, pedimos mecanismos de regulación de los mercados (stocks estratégicos) que permitan regular la oferta y suavicen la volatilidad de los precios. Además, exigimos que salgan los cereales de los mercados especulativos internacionales.

Optimización de los recursos hídricos.

En el sector agrario, la disponibilidad de agua para riego en regiones como la andaluza -en la que alternan períodos de lluvias con períodos secos- es necesaria para garantizar la estabilidad de las producciones y, en consecuencia, la competitividad y rentabilidad de las explotaciones. Por esto, es necesario asegurar una dotación suficiente por su regularidad y adecuada por su calidad. Además, se deben considerar estos objetivos en un marco de sostenibilidad del agua de riego (*sostenibilidad económica, medioambiental y social*).

Para ello hay que garantizar:

- Una gestión pública de los recursos hídricos que contemple las medidas necesarias para asegurar, en épocas de sequía, un reparto adecuado que atienda a criterios sociales y de interés general. En concreto, los Bancos Públicos de Agua deben asegurar una correcta reasignación de recursos, evitándose en cualquier caso las transacciones de derechos de uso del agua entre privados.
- Unas políticas hidráulicas orientadas a la redistribución del recurso y a la exclusión de la especulación. Estas políticas estructurales deben mejorar la eficiencia de las redes de distribución y avanzar en la política de modernización de regadíos de forma permanente, evitando que estos objetivos tengan carácter coyuntural. Además, el aprovechamiento de fuentes de recursos alternativos y la potenciación de la reutilización de aguas y/o desaladoras, deben ser temas prioritarios.
- Un marco normativo para promover la democratización de las Comunidades de Regantes, garantizando que en las tomas de decisiones participarán todos los implicados y que primarán los criterios económicos y sociales. Del mismo modo, se deberían poner en marcha iniciativas dirigidas a asegurar la regularización de los aprovechamientos de masas de aguas subterráneas.

Planes de actuación prioritarios: un nuevo concepto de Reforma Agraria que garantice la soberanía alimentaria.

Redacción de una **“Ley Integral de Agricultura y Soberanía Alimentaria”** en Andalucía que recoja todos los aspectos relacionados con la producción agrícola y ganadera, al mismo tiempo que regule todo el proceso de los productos alimentarios hasta llegar a los lineales de los supermercados. Esta Ley viene a: delimitar márgenes comerciales a lo largo de la cadena agroalimentaria, regular el uso de las marcas “blancas” o “del distribuidor”, establecer qué prácticas son consideradas como “abusivas”, regular el acceso a la tierra y otros aspectos capitales para el sector.

Elaboración de un **“Plan de Ordenación Agrícola y Ganadera”** que permita una gestión adecuada de los distintos territorios con aptitudes agrícolas o ganaderas, todo ello con el fin de evitar el uso de este tipo de terrenos para fines especulativos y contribuir a la autosuficiencia alimentaria de Andalucía

Creación de un **“Banco Público de Tierras”** el cual pueda gestionar el acceso a superficie agraria que no esté en uso, siempre destinándola a la producción de alimentos en cantidad y calidad. Esta medida, junto a la mejora del funcionamiento de la Reserva Nacional de derechos de la PAC, debe servir para facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres al sector, luchando contra el envejecimiento del sector.

Fomento de la agricultura y ganadería de **producción ecológica** con un objetivo multifuncional: la protección del potencial multiplicativo de las plantas, garantizando el derecho de los agricultores a tener sus propias semillas, aplicando programas de desarrollo de la agricultura y prohibiendo el uso de organismos modificados genéticamente (OMG) en la producción de alimentos, defendiendo y valorando la denominación de origen, incluso en los mercados no europeos.

Para un desarrollo adecuado de la agricultura en Andalucía, se debe definir desde la administración autonómica una **comarcalización agraria** en función del cultivo/s dominante/s, al mismo tiempo que se especifiquen las zonas de interés general para una actuación preferente con los consiguientes planes de mejora. Estas comarcas deben estar bien definidas en cuanto a: perímetro, características agronómicas, déficit estructural, etc. que determinen el nivel de aprovechamiento medio y óptimo de las explotaciones agrarias. Este conjunto de medidas determinan, junto con la participación de las organizaciones profesionales agrarias, las actuaciones públicas y privadas, encuadradas en un nuevo concepto de la *reforma agraria*.

Fomentar el desarrollo de **agricultura urbana** en nuestra comunidad. El fomento de la “explotación agrícola de espacios urbanos” podría generar empleo en las ciudades, a la vez que aporta espacios verdes y reduce los consumos durante el transporte de la producción. A través de la cesión del uso del terreno urbano abandonado y legislando la comercialización de ese tipo de producción, se podría desarrollar una nueva fuente de empleo en las ciudades y pueblos andaluces.

Por último, es necesaria la creación de un instrumento de financiación propio que de respuesta a la necesidad de liquidez e innovación constante que demanda el sector. Un instrumento que en ningún caso se encuentre sometido al interés especulativo de los bancos. Para ello creemos imprescindible la articulación de un **“Banco de Crédito Agrícola” en Andalucía**.

PESCA Y ACUICULTURA SOSTENIBLE

En el campo pesquero es necesario proteger los recursos y, al mismo tiempo, lograr que la pesca artesanal tenga porvenir. La presencia de las formas artesanales de pesca asegura una parte importante del desarrollo sostenible de las zonas litorales.

El papel desempeñado, en las últimas décadas, por el Gobierno español y andaluz en la firma de los diferentes acuerdos de pesca en Marruecos, la negociación sistemática a incluir en el documento, tal y como solicitaban algunos países, la cláusula por la que España se niega a reconocer los derechos de Marruecos sobre el Sáhara vinculando éste al acuerdo de pesca y las

escasas iniciativas a favor del sector en Andalucía han dado como resultado para el sector pesquero andaluz:

- Déficits importantes en la regulación de las actividades pesqueras y marisqueras
- Carencias en infraestructuras, puertos, lonjas y comercialización
- Falta de apoyo a la acuicultura como forma de sustituir la pesca tradicional en puestos de trabajo, consumo y especies importadas

Atendiendo a lo expresado en el art.47.4 “Corresponde a Andalucía como competencia compartida la planificación del sector pesquero” consideramos prioritario desarrollar las siguientes acciones encaminadas a:

- Regulación por ley de las actividades pesqueras y marisqueras. Mayores medidas coercitivas, control y sanciones de la pesca deportiva ilegal así como control de los caladeros con un mayor control de la fiscalía
- Plan de seguridad para la flota pesquera andaluza que contemple el establecimiento de plazos para la reconversión de embarcaciones y en el que aumenten las coberturas en los seguros de responsabilidad social, así como coordinar esfuerzos con la inspección de trabajo y la seguridad social.
- La utilización de la acuicultura para la mejora de los bancos naturales en colaboración con organismos para el desarrollo de I+D+i
 - ▶ Apoyo a la comercialización de los productos de la acuicultura ecológica, que iguale o mejore las propuestas de la Directiva Comunitaria.
 - ▶ Aplicación estricta de controles de calidad en la acuicultura, especialmente en lo referido a la cadena alimentaria.
 - ▶ Elaboración de planes especiales de financiación a áreas de pesca flota concretas
 - ▶ Normalización del etiquetado de conservas y productos frescos. Denominación de Origen

Desde Izquierda Unida rechazamos la pretensión de tratar de la misma forma a la gran pesca industrial, principal responsable del agotamiento de los recursos, que a la pesca artesanal que está especialmente interesada en el éxito de las políticas de preservación. Por ello, defendemos que la pesca artesanal salga de la consideración de sector sometido a la libre concurrencia y que, en consecuencia, pueda recibir ayudas para asegurar su viabilidad y partiendo de esta premisa realizaremos las siguientes propuestas

- Dotación de una red de equipamientos e infraestructuras de lonjas, puertos y las zonas marisqueras.
- Regeneración de las áreas litorales degradadas mediante la acuicultura
- Apoyo a la comercialización de los productos de la acuicultura. Aplicación estricta de controles de calidad en la acuicultura, especialmente en lo referido a la cadena alimentaria.
- Fomento de medidas de vigilancia y control de caladeros.
- Creación de una red de infraestructuras orientada a evitar vertidos contaminantes en el litoral.
- Respeto escrupuloso de las paradas biológicas con subvenciones compensatorias al sector.
- Medidas para la defensa y conservación de los fondos marinos.

- Reconversión de las embarcaciones que carezcan de condiciones adecuadas para ampliar la normativa de protección de recursos.
- Fomento de los arrecifes naturales y de su conversión en parques naturales.
- Apoyo a las almadrabas para adecuarlas al mantenimiento de los atunes y reorientarlas hacia las industrias locales. Establecimiento de medidas desde la Unión Europea para la protección del atún rojo.
- Instalación de campos de arrecifes artificiales, protección de zonas de crías y engorde, y delimitación de las zonas de reserva marina
- Fomento en las marismas de explotaciones acuícolas.
- Dotación de equipamientos básicos a las zonas marisqueras, garantizando la salubridad del producto y la mejora de la calidad.
- Puesta en marcha de nuevos sistemas de cultivo y especies (lenguado, urta, pargo, sargo, mero).
- Realización de campañas de capacitación y formación profesional del sector
- Potenciación del Centro de Investigación de PEMARES
- Firma de acuerdos con las Universidades de Cádiz sobre investigación y formación.
- Estudio de viabilidad de cultivos especialmente “ZONA RIO” (ostras planas, almejas, “zona marismas” cría de peces).
- Utilización de la acuicultura para la mejora de los bancos naturales.
- Fomento de las pequeñas y medianas empresas, y las cooperativas

TURISMO SOSTENIBLE

El sector turístico ha de ser tratado como política de crecimiento económico si tenemos en cuenta que el sector servicios es con diferencia hegemónico en la estructura productiva de Andalucía, donde trabajan los colectivos más vulnerables y con mayor temporalidad. Es por ello que consideremos necesario reorientar las estrategias de la Junta de Andalucía en materia de turismo, con el objetivo de conciliar creación y distribución de riqueza, generación de empleos cualificados y estables y respeto al medio ambiente.

El desarrollo turístico se ha convertido en las últimas décadas en el estandarte esgrimido por el Gobierno andaluz para alardear de progreso económico, frente a la clara recesión que experimentan sectores productivos como el agropecuario o el industrial. De hecho, en 2011 la actividad turística alcanzó el 12 % de PIB de nuestra Comunidad. Sin embargo, las cifras macroeconómicas no pueden ocultar un balance social y medioambiental preocupante y desigual, dado que la orientación actual de las políticas turísticas auspiciadas desde la administración autonómica es incapaz de resolver asuntos como:

- La saturación de los recursos naturales en el litoral con una interesada confusión entre turismo y urbanismo salvaje, sin conciliar creación, medioambiente y distribución de riqueza.
- Excesiva dependencia financiera del sector público y desinterés del capital privado en el turismo sostenible
- Baja cualificación y excesiva temporalidad, estacionalidad y precariedad del trabajador turístico.
- La fragmentación de iniciativas empresariales e institucionales.

- El despilfarro de recursos públicos en estrategias de mercadotecnia de dudosa rentabilidad o la interesada confusión entre turismo y urbanismo salvaje.
- Persiste una concepción en exceso mercantilista de las políticas turísticas, que en la mayoría de las ocasiones se desvinculan de visiones más generales e integrales de planificación del territorio y de los servicios públicos.
- Excesiva dependencia financiera del sector público, en tanto que el sector privado apenas participa de la creación y sostenimiento de infraestructuras, equipamientos y líneas de actuación.
- Por otra parte, el sector privado, profundamente fragmentado, adolece de cultura de cooperación y asociacionismo, careciendo las más de las veces de cohesión y visiones estratégicas por encima de particularismos y percepciones sesgadas. escasos ejemplos de procesos participados que no sólo den voz al sector privado y a las administraciones implicadas, sino también a los agentes sociales (sindicatos, colectivos ecologistas, asociaciones culturales y vecinales, de defensa de consumidor, etc.)
- Los Ayuntamientos tienen una escasa participación en el diseño de las estrategias turísticas autonómicas, reservándoseles el mero papel de receptores de subvenciones encorsetadas.
- Hegemonía de la cultura 'Guggenheim' y FITUR: clara apuesta por los eventos y equipamientos de gran relevancia mediática y considerables presupuestos, pero con escasa incidencia en la cotidianeidad de la programación turística.
- El turismo de interior, rural y de baja intensidad, más sostenible y de menor impacto en cuanto a infraestructuras, así como el cultural y patrimonial, siguen sin recibir un respaldo decidido en comparación con el turismo litoral de sol y playa que, por sobreexplotación, ha desembocado en algunos ámbitos en masificación, pérdida de calidad y singularidad, saturación de infraestructuras y servicios públicos o degradación del entorno natural.
- Las políticas públicas de planificación turística siguen sin tener un carácter transversal, de forma que se dan contradicciones y desajustes evidentes entre Turismo y Medio Ambiente

Y todo ello en un contexto internacional de diversificación de la demanda y la oferta en el que puján con fuerza otros destinos turísticos. De ahí que desde IULV-CA consideremos necesario reorientar las estrategias de la Junta de Andalucía en materia de turismo, con el objetivo de:

- Conciliar creación y distribución de riqueza, generación de empleos cualificados y estables y respeto al medio ambiente.
- Impulsar a la participación de sindicatos, colectivos ecologistas, asociaciones empresariales y de vecinos en la realización de Planes Turísticos
- Promover los instrumentos de planificación desde lo público para influir de forma efectiva en los mercados turísticos.
- Crear un observatorio andaluz de políticas turísticas, ampliamente participado por administraciones e instituciones públicas, agentes sociales y empresariales.

Ante esta realidad, constatada, en el sector turístico andaluz, desde IULV-CA apostamos por una política turística alternativa y cuyas líneas estratégicas han de sustentarse en:

- Apuesta decidida por una oferta turística reglada con especial atención al alojamiento hotelero, camping y casas rurales
- Impulso de la desestacionalización del mercado turístico mediante la implantación de programas que favorezcan sectores como: ocio, cultura, deportivo, salud, terapéutico y rural con el fin de compensar la hegemonía del turismo vacacional estival

- Plan General de Turismo sostenible de ámbito regional, apostar por los planes subregionales de desarrollo turístico con el fin de favorecer dinámicas comarcales y que fomenten la cooperación municipal.
- Racionalización de los interlocutores institucionales a la hora de determinar subvenciones e inversiones desde la Consejería de Turismo.
- Fomento de la cooperación, asociacionismo y cohesión del empresariado turístico andaluz, sobre todo de la pequeña y mediana empresa (que ofrece productos de calidad y muestra mayores dosis de responsabilidad con su entorno local, aunque carece de medios potentes de promoción y comercialización) a través del impulso de experiencias como los clubes de producto y de calidad.
- Desarrollo de Planes de Calidad del producto y la gestión turística, que deben ir ineludiblemente unidos a la mejora de la cualificación laboral, a la capacidad innovadora de las empresas y al seguimiento de protocolos de responsabilidad social y medioambiental (Responsabilidad Social Corporativa).
- Configurar un turismo integrado en la riqueza cultural, natural y económica de la zona. La oferta turística ha de ser el resultado de los recursos locales: paisaje urbano, gastronomía, patrimonio cultural y natural, acontecimientos festivos, etc.
- Fomentar un crecimiento urbano y rural contenido y concéntrico con la creación de espacios libres y equipamientos públicos prestigiados como baluarte de un turismo de calidad.
- Propiciar un turismo abierto al territorio, de forma que los espacios naturales próximos y las localidades vecinas formen parte/ineludible de la oferta turística,
- Desarrollar un turismo dimensionado tanto en el tiempo como en el espacio. La dimensión temporal implica proseguir con la adopción de medidas que nos permitan alcanzar la estacionalidad cero. La dimensión espacial implica, por un lado, evitar la concentración de corrientes turísticas en períodos de tiempo muy reducidos y, por otro, tener capacidad de acogida sin vulnerar la capacidad de carga.
- Fomentar un turismo participativo, duradero y viable, en el que se requiere la participación e implicación activa de los diferentes agentes que intervienen en el sector, basado en los efectos a medio y largo plazo del modelo turístico adoptado y no en el crecimiento extensivo a corto plazo.

INDUSTRIAS AVANZADAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

Industrias avanzadas y reindustrialización.

Incrementar las inversiones en I+D+i, sobre todo en los sectores en los que Andalucía tiene potencial (energías renovables, industria agroalimentaria, etc.), implementando políticas que aseguren que el fruto de esas inversiones se quede en su mayor parte en Andalucía y revierta prioritariamente en el desarrollo del tejido industrial andaluz, aunque también se exporte, es uno de nuestros mayores objetivos para fortalecer y reactivar el sector industrial andaluz

Desde principios de los años ochenta se han venido aplicando, paulatinamente, políticas encaminadas a la desmantelación del sector industrial, en el Estado Español y con especial incidencia en Andalucía, donde la desindustrialización y la deslocalización de industrias estratégicas o de cabecera han respondido a la dinámica del mercado y del capital, incentivando la economía sumergida, el dumping social y la generación de miles de desempleados y desempleadas en nuestro territorio u cuya repercusión se refleja en:

- Escasa implantación sector industrial en Andalucía, debido al incesante desmantelamiento del tejido industrial a lo largo de las tres últimas décadas
- Numerosas deslocalizaciones

- Falta de apoyo de la administración pública para I+D+i en sectores industriales emergentes
- Incremento del desempleo

La política de reindustrialización prestará una especial atención al componente territorial, siendo un elemento central en la estrategia de equilibrio entre zonas más dinámicas y menos, incluyendo en éstas las zonas industriales en declive y para ello trabajaremos para una:

- Mayor participación de la comunidad autónoma en la industria pública, atendiendo sobre todo a sectores estratégicos
- Medidas de ámbito legal/administrativo para evitar cierres y deslocalizaciones.

Ello significa poner en la práctica una verdadera política industrial, hasta la fecha inexistente, cuyos ejes sean:

- Fortalecer una industria de calidad por medio de la innovación vinculada a un Desarrollo tecnológico que aplique los resultados de la Investigación científica, aprovechando los recursos invertidos en la investigación pública, y que se retroalimente con el tejido productivo del territorio, orientándose hacia un desarrollo social y ambientalmente sostenible
- Desarrollo y gestión desde lo público de suelo industrial, especialmente en las zonas más afectadas por la crisis. En particular, puesta en valor para su reindustrialización de los antiguos terrenos de Delphi y Visteon en la Bahía de Cádiz.
- Cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía con los trabajadores afectados por deslocalizaciones. En particular, con los trabajadores de Delphi en los acuerdos firmados el 4 de Julio de 2007.
- Impulsar el uso de fondos públicos para la creación de tejido industrial en zonas con necesidades de desarrollo.
- Mejorar el nivel de cualificación de los/as trabajadores/as mediante la potenciación de la formación tanto reglada como continua.
- Desarrollo de la I+D en el ámbito civil, criticando el desvío de ésta al ámbito militar
- Desarrollar la industria ligada al sector agrario (semillas, fitosanitarios, plásticos, etc.) y a al agroalimentario (3ª, 4ª y 5ª gama)
- Desarrollo de la industria aeronáutica y naval

Energías renovables (ver apartado Medio Ambiente).

- Desarrollo de las Energías renovables con dos objetivos fundamentales:
 - ▶ Disminuir la dependencia energética de Andalucía.
 - ▶ Desarrollar un sector económico fuerte y competitivo relacionado con la generación de energías renovables
- Plan de Soberanía energética y freno al cambio climático para garantizar la autosuficiencia energética a partir de recursos endógenos y especialmente a partir de fuentes de energías renovables (solar, térmica y fotovoltaica, eólica, biomasa) en el horizonte del año 2020, como medida de reducción de los niveles de emisión de CO2 y como medida estratégica fundamental para afrontar, especialmente en el sector agrario y del transporte de mercancías, una eventual situación de bloqueo del mercado del crudo provocado por un conflicto internacional.

RECONVERSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN E INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA

- Recondicionar la actividad del sector de la construcción hacia estos tres ámbitos de actuación:
 - ▶ Inversión en la mejora del parque de viviendas
 - ▶ Subvención del coste de rehabilitación ecológica de viviendas: adaptación a las recomendaciones de la Inspección Técnica, cambio de canalizaciones, ahorro de agua, energía y residuos, instalación energías renovables e innovación en materiales sostenibles
 - ▶ Reactivación de infraestructuras sociales en educación, sanidad, medio ambiente o servicios sociales.
- Compromiso con la inversión necesaria en Infraestructuras de transporte y comunicaciones, que además de estímulo para el crecimiento económico y la generación de empleo, son un elemento imprescindible para seguir avanzando en la vertebración territorial, contribuyendo a crear las condiciones necesarias para atraer futuros proyectos industriales; por lo que hay que exigir la reanudación de los proyectos prioritarios para Andalucía.

INDUSTRIA BIOMÉDICA Y FARMACÉUTICA

- Fomento de la investigación biosanitaria con criterios de interés general y financiación pública suficiente de la misma, evitando la influencia determinante de la industria farmacéutica privada sobre qué y cómo se investiga.

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

(ver apartado de en el Eje de los servicios públicos)

OTROS SECTORES ECONÓMICOS

MINERÍA.

Al igual que en la industria, la Junta de Andalucía ha carecido hasta la fecha de política minera para nuestra Comunidad, de ahí que desde IULV-CA defenderemos:

- El apoyo a la reactivación de la minería metálica, aunque condicionando la luz verde a los proyectos a criterios de viabilidad social y económica, garantías de sostenibilidad ambiental de los proyectos, garantía de que se empleará principalmente a los habitantes de las zonas mineras y de que en éstas se aplicarán medidas a favor de la diversificación económica (para evitar que se reproduzcan monocultivos mineros como ya sucediera en otros tiempos), etc.
- Realizar un Plan Estratégico para la Faja Pirítica que permita un aprovechamiento integral y nada contaminante de la pirita y de los minerales asociados. En este Plan se contemplará el desarrollo de una tecnología propia para el aprovechamiento de los complejos polimetálicos y medidas para proteger a las explotaciones de las oscilaciones de los precios en los mercados mundiales.
- Establecer incentivos que busquen reducir el minifundio en minería no metálica, con el fin de ordenar la explotación de los recursos, hacer posible el mayor grado de transformación e industrialización en origen y la restauración ambiental.

ARTESANÍA.

La situación del Sector de la Artesanía pasa por momentos muy difíciles. La artesanía, llena de grandes e históricos valores, es parte importante de la cultura de nuestro pueblo, ya que dentro de este sector están oficios tan significativos como la carpintería, la joyería, la cerámica, la alfarería, la orfebrería, etc.

La artesanía tiene que evolucionar, renovarse y modernizarse. Las nuevas tecnologías tienen que llegar a los talleres. El colectivo de la artesanía debe ser un referente importante en Andalucía, ya que se trata además de un sector muy vinculado al turismo.

Para el fortalecimiento y modernización del sector proponemos:

- Planes de formación específica en nuevas tecnologías y redes sociales.
- Diseño de escaparates virtuales y fomento de las tiendas on-line, de forma que quien quiera pueda vender sus productos a través de internet.
- Ayudas o subvenciones que posibiliten la modernización de los talleres y puestos de trabajo.
- Fomento del estudio de ciertas profesiones, históricamente heredadas de padres a hijos y que corren el riesgo de perderse con el tiempo.
- Fomento, por parte de las administraciones andaluzas, de forma más decidida, de las Ferias de Artesanía, que fomentan las ventas y mejoran la imagen que tienen los ciudadanos de los artesanos.
- Apuesta firme por facilitar la exportación de productos y la venta de los mismos en el exterior, bien a través de convenios de cooperación exterior o bien a través de otros mecanismos. En este mismo sentido, se deben tomar medidas para evitar las importaciones a bajo precio que hacen una competencia desleal a nuestro colectivo.
- Promoción y financiación de cursos y/o talleres en colegios e institutos que acerquen el conocimiento de la artesanía a los futuros trabajadores de nuestra tierra, obteniéndose así una mejor valoración de estas profesiones por parte de las nuevas generaciones, y apostando por proporcionar una mayor cobertura social que ayude al mantenimiento de nuestros talleres.

AGENTES ECONÓMICOS

LA ECONOMÍA SOCIAL.

La diferencia fundamental entre las empresas capitalistas tradicionales y las de Economía Social es que éstas se gestionan de acuerdo con un espíritu democrático, lo que traslada una connotación de colectividad, de solidaridad, de implicación y de creatividad. Son estos **valores que hacen aún más importante a esta forma de hacer empresa que es la Economía Social**, en estos momentos de crisis económica, financiera y, también, de carencia de acceso al trabajo.

Las crisis en un mundo globalizado e interactuado afecta a todos los sectores económicos. También, es innegable que las empresas de Economía Social tienen hartado demostrado su **capacidad de generar riqueza y empleo en épocas de bonanza** pero, **asimismo**, son las que mejor se adaptan por sus peculiaridades, a **épocas de recesión**. La creación de empresas sustentada en una base de capital humano, formación, creatividad e innovación, apegada al desarrollo local con fines últimos de carácter social y regido por principios democráticos se constituye en instrumentos económicos y sociales de gran calado para generar riqueza y cohesión social.

El trabajo asociado potencia las oportunidades de empleo de los grupos o personas que se enfrentan, en cuanto a recursos humanos, a situaciones coyunturales o posiciones estructurales de debilidad ante el mercado de trabajo. **La instalación de empresas y de negocios promovidos por los propios trabajadores es uno de los instrumentos de creación de empleo** que pueden concebirse como estrategia de desarrollo tanto personal como territorial, sin olvidar la perspectiva empresarial o de competitividad económica que tiene que regir la lógica de creación y de funcionamiento del trabajo asociado en las economías privadas.

El Artículo 157.4, del Estatuto de Autonomía, **impone un modelo económico que promueva la capacidad emprendedora** y de las iniciativas empresariales, incentivando **especialmente la**

actividad de la economía social y de los emprendedores, supeditando el objetivo de la actividad económica al interés general.

La formación de un tejido empresarial en Economía Social cada vez mayor, más consolidado y en permanente adaptación a las condiciones de la competencia y con una mayor capacidad para generar empleo, es un **factor esencial en el desarrollo económico, local y social de Andalucía**.

Instrumentos básicos de desarrollo del sector.

- Impulsar la apuesta en marcha del **III Pacto Andaluz por la Economía Social y ampliar el diálogo y la concertación social**
 - ▶ La creación de empresas económicamente viables y socialmente responsables y, en consecuencia, la creación de empleo decente, estable y de calidad, es el objetivo prioritario del recientemente firmado **III Pacto Andaluz por la Economía Social (PAES)**. Impulsar su puesta en marcha y efectivo cumplimiento debe contar el apoyo necesario de todas las fuerzas políticas andaluzas.
 - ▶ Por otra parte, la actual situación demanda un diálogo y una concertación social que induzca a una mayor corresponsabilidad de todos los sectores sociales y económicos en una misma línea de trabajo y actuación que permita atajar los problemas de la sociedad andaluza. La economía social debe tener una **participación activa en todos los procesos de interlocución social** que se desarrollen. Para ello, es preciso el **reconocimiento de la Economía Social** como agente corresponsable en el desarrollo económico y social de nuestra Comunidad, dándole **cabida en todas aquellas instituciones y foros de diálogo social** creados, que se creen o propicien.
- Creación del **Consejo Andaluz de Economía Social** como estructura que garantice la promoción y desarrollo de las empresas y organizaciones de la Economía Social.
- Creación del **Instituto Andaluz de la Economía Social** como Institución que, entre otros cometidos, fomente la implantación y vertebración en todo el territorio andaluz de las organizaciones representativas de la Economía Social.
- Un **Presupuesto directamente vinculado a la Economía Social**, en el que se incluyan partidas específicas para Impulsar el emprendimiento asociativo e individual y el afianzamiento de un modelo productivo real y sostenible. Los antecedentes demuestran que cada euro invertido en Economía Social revierte con creces sobre la sociedad andaluza.

Propuestas en materia empresarial y empleo:

- Fomentar la **creación y consolidación de empresas de economía social** ligadas a proyectos estratégicos en sectores emergentes y generadores de empleo; entre los que se podrían destacar los de carácter cultural, energético, social, medioambiental, turismo sostenible, dependencia, prestaciones sociales y, rehabilitación y adaptación de viviendas, entre otros.
- Aplicar **cláusulas sociales** favorecedoras y discriminatorias positivamente hacia las empresas de Economía Social en los pliegos de condiciones de los contratos administrativos, respetando y fomentando la libre competencia y las buenas prácticas laborales y empresariales.
- Generación de **sistemas de ayuda que favorezcan la concentración, la cooperación y la intercooperación empresarial** en la Economía Social.
- **Constituir un fondo regional específico para favorecer el espíritu emprendedor**, el autoempleo y la actividad empresarial en el ámbito de la Economía Social.
- Articular **líneas de financiación** que faciliten la disposición de fondos para poder participar en el capital social de las empresas de Economía Social, a través de la concesión de

préstamos con especiales condiciones por el concepto de apoyo al emprendedor que se incorpora al capital social empresarial.

- Crear nuevos y difundir los **instrumentos financieros, públicos y privados existentes**, para la financiación de proyectos empresariales de economía social.
- Promocionar **convenios de colaboración con las agencias públicas y entidades financieras** para el desarrollo de nuevas líneas de financiación para empresas de economía social.
- Propiciar la **reducción de las tasas e impuestos** con carácter general a todas las empresas de Economía Social y de la totalidad de éstas, en los proyectos promovidos mayoritariamente por mujeres y jóvenes emprendedores, así como por colectivos con especiales dificultades de inserción laboral.
- Establecer **“ayudas reintegrables” a proyectos de autoempleo** de aquellos **colectivos más desfavorecidos** en el mercado laboral e incentivos al inicio de la actividad para gastos de constitución, realización y diseño de proyectos, entre otros.
- Apoyar la creación de empleo asociado en empresas de economía social, **especialmente jóvenes y mujeres**.
- Promover la creación de **talleres de empleo y/o escuelas taller y/o escuelas de empresas**, en cada uno de los sectores que se detecten necesidades, y consecuentemente posibilidades de crear actividad y empleo.
- Promover la **dotación de suelo industrial**, mediante el aprovechamiento de terrenos e instalaciones, a través de fórmulas legales de cesión de uso a empresas de Economía Social, para instalar proyectos empresariales, así como, la creación de Polígonos Industriales, ganaderos y de servicios para la ubicación de empresas.
- Promover el **desarrollo de experiencias mixtas** de colaboración empresarial con la Economía Social a través de consorcios o figuras similares para la prestación de servicios y/o producción de elementos estratégicos de desarrollo en medioambiente, cultura, ocio, turismo, sociosanitario, energías renovables, agricultura y nuevas tecnologías, entre otros.
- Establecer programas y actuaciones dirigidos a la difusión e implantación de las **Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)** en los procesos de organización, gestión y comunicación de las Empresas de Economía Social.
- Fomentar y apoyar **proyectos de I+D+I**, en el ámbito de la economía social
- Diseñar y gestionar por sí y con otras Administraciones **Programas e Iniciativas Europeas** que desarrollen la Economía Social.

Propuestas en materia de formación y divulgación:

- Apoyar e incentivar el desarrollo de **actividades formativas** previas relacionadas con el conocimiento, la puesta en marcha y gestión de empresas de Economía Social, la prevención de riesgos laborales, la sostenibilidad, el fomento de la igualdad de oportunidades, la implantación de nuevas tecnologías y el desarrollo de buenas prácticas empresariales y laborales.
- Mejorar la **capacidad profesional** de personas desempleadas para integrarse en empresas de economía social o para emprender nuevos proyectos empresariales viables en este ámbito
- Facilitar y apoyar la **divulgación del significado y potencialidades que ofrece el modelo económico** y las distintas formas jurídicas de **economía social** en la creación de empleo y desarrollo de nuestra Comunidad.

- Potenciar la **participación ciudadana en proyectos de Economía Social**, al objeto de promover la cultura emprendedora y asociativa.
- **Apoyar desde la Administración y en conjunción con las organizaciones representativas del sector**, la difusión de los principios y valores que configuran la Economía Social como elementos integradores del concepto de responsabilidad social de las empresas, promoviendo y fomentando entre los trabajadores y socios de las empresas de economía social, la sensibilización sobre las mejoras que supone la aplicación de prácticas de **responsabilidad social de las empresas**.

Propuestas en materia de desarrollo social:

- Establecer una alianza estratégica de la Administración andaluza con las empresas de Economía Social en materia de políticas sociales.

La Economía Social está conformada por aquellas organizaciones que aun teniendo un **carácter privado** y surgidas de la iniciativa ciudadana, sus **finances son de interés general y, por tanto, social** e impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales mediante la fórmula del cooperativismo y de otras formas jurídicas de Economía Social. Son empresas que se configuran como aliados naturales en el desarrollo de muchas de las políticas públicas de las administraciones en la consolidación de las prestaciones y servicios sociales – dependencia, educación, prestaciones sociales,...; así como, en el desarrollo de los nuevos derechos contemplados en el Estatuto de Andalucía.

EL TRABAJO AUTÓNOMO.

- Dar prioridad al desarrollo de la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, evitando agotar los plazos establecidos, así como de los reglamentos que la desarrollen.
- Elaborar urgentemente el Plan Estratégico del Trabajo Autónomo con la participación de las asociaciones de trabajadores/as autónomos/as.
- Incluir en la Presupuestos de la Junta partidas concretas para implementar las distintas medidas de actuación contempladas en la Ley Andaluza.
- Promover las prácticas de jóvenes andaluces no solo en las grandes empresas sino también con autónomos y microempresas.
- Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus negocios por la elevada morosidad. Exigimos que los juicios por morosidad se resuelvan por la vía rápida, evitando así la financiación de grandes empresas.
- Que los pagos que se tengan que realizar a las Administración andaluza se puedan compensar con las deudas que está tenga contraídas con los autónomos y autónomas.
- Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías para evitar la economía sumergida por lo que supone de competencia desleal para la actividad del Trabajo Autónomo.
- El listón de garantías bancarias exigibles a los autónomos/as debe ser más asequible. En todo caso, la financiación para los trabajadores/as autónomos/as debe estar garantizada, en último extremo, a través de una banca pública.
- En las políticas activas de empleo, incluir las ayudas al autoempleo como alternativo al desempleo y al trabajo asalariado.
- Apostar por la formación, la readaptación y el reciclaje profesional de los autónomos/as para ser cada día más competitivos.

- Favorecer el relevo generacional de los negocios, facilitándoles el acceso a la formación y al apoyo técnico que precisen.
- Promover la unión, la interacción y cooperación entre emprendedoras y empresarias, con el fin de mejorar el nivel de competitividad de las empresas lideradas por éstas, a través de intercambio de ideas, conocimiento, experiencias y el “saber hacer” de las autónomas expertas.
- Para esto las administraciones tienen que apostar por políticas y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, familiar y personal, para evitar así que esto se convierta en un obstáculo para el desarrollo profesional de las mujeres autónomas.

UNAS ESTRUCTURAS COMERCIALES JUSTAS

Un nuevo modelo de desarrollo requiere de unas estructuras comerciales justas, pues es precisamente en el ámbito de la intermediación y de la comercialización donde se producen mayores abusos y procesos especulativos por parte de las multinacionales, tanto en el comercio exterior como en el comercio interior. Por ello, es necesaria una política de control sobre ambos que evite las prácticas monopolísticas y proteja a empresas más pequeñas.

COMERCIO EXTERIOR.

- Intensificar el impulso a las políticas de promoción exterior para conseguir que nuestras empresas y sus productos tengan cada vez más presencia en los mercados externos
- Puesta en marcha de un Plan Andaluz de incentivos a la comercialización y venta de productos de calidad.
- Reforzar el papel de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) en la búsqueda de nuevos mercados a los productos andaluces de calidad.

COMERCIO INTERIOR.

Izquierda Unida considera necesario una modificación de la legislación relacionada con el comercio para defender los intereses de los pequeños y medianos comercios, que es el mayor generador de empleos, junto con el de los consumidores frente a la implantación de monopolios comerciales.

De forma concreta nos proponemos:

- Impulsar una moratoria en la construcción de nuevas grandes superficies
- La defensa y mejora de los mercados y otros equipamientos colectivos asegurando ayudas a su financiación para conseguir dotarlos de los mejores servicios y de una gestión adecuada para competir con los grandes monopolios del comercio.
- Apostar por la modernización del llamado comercio tradicional.
- Mantenimiento de los actuales horarios comerciales, lo que implica la revisión de la regulación de la limitación de los horarios de cierre y apertura de comercios para evitar lagunas que están provocando una competencia desleal que daña al pequeño y mediano comercio.
- Construcción y dotación para el funcionamiento de centros de innovación y comercialización en sectores productivos locales financiados con cargo a programas de la Consejería de Innovación.

VENTA AMBULANTE.

El sector del Comercio Ambulante, como sector específico dentro del Comercio Interior, aglutina en Andalucía a más de 35.000 familias. El apoyo de la administración andaluza, que debe concretarse en lo siguiente:

- Compromiso por parte de las administraciones para garantizar la continuidad de las licencias y puestos de trabajo.

Tras la entrada en vigor de la Ley 3/2010, de 21 de marzo por la que se modifican diversas Leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo, entre ellas la Ley 9/1988, de Comercio Ambulante de Andalucía, el colectivo dedicado a esta actividad comercial Ambulante ha visto peligrar sus puestos de trabajo, creándose una gran incertidumbre sobre la continuidad de sus licencias.

La exclusión de nuestro colectivo de esta Directiva, al igual que ha pasado con otros colectivos, o una moratoria de 15 años prorrogables a otros 15, como en otras comunidades autónomas, es la mayor reivindicación que mantiene nuestro sector en estos momentos.

- Conciliación de la vida laboral y familiar. A lo largo de los años, los comerciantes ambulantes han ido acomodando el negocio a las localidades más cercanas, con la finalidad de poder atender a las familias y la escolarización de los hijos. Si se pone fin a la renovación de nuestras licencias, aumentará considerablemente el perímetro de trabajo, con el consiguiente impacto negativo en la conciliación de la vida laboral y familiar.
- Inclusión del Comercio Ambulante dentro de los planes integrales de fomento del Comercio Interior de Andalucía.
- Regulación autonómica de determinados aspectos sobre los mercadillos:
 - ▶ Constitución de Comisiones de Comercio Ambulante en todos los ayuntamientos, donde las asociaciones puedan debatir los puntos de interés para el colectivo.
 - ▶ Evitar que los consistorios puedan variar unilateralmente el número de puestos, cambiar el día de celebración de los mercadillos o el lugar de ubicación; lo que va en detrimento del comercio en general y de los comerciantes ambulantes en particular.
 - ▶ Reivindicamos un compromiso para que exista flexibilidad en los horarios comerciales del Comercio Ambulante.
 - ▶ Inclusión en los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) de cada municipio se destinen suelos para la ubicación de los mercadillos.
 - ▶ Dotación de servicios básicos y esenciales (pavimentado de calles, seguridad ciudadana, agua, servicios, etc.).
 - ▶ Realización de un estudio socio económico para demuestre y justifique el aumento en las tasas que se pagan por ocupación de vía pública, y que afectan directamente a la economía de nuestras familias.
 - ▶ Los Ayuntamientos y la Policía Municipal deben ejercer sus funciones en el control de los mercadillos y de los puestos que se ubican en ellos para evitar la competencia desleal entre los propios comerciantes.

PROPUESTAS PARA LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PARA IMPULSAR UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

PROPUESTAS PARA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

- Plan de choque con medidas urgentes para reactivar la economía y la generación de empleo que contemple, entre otras, medidas como creación de empleo en el sector público, especialmente en atención a la dependencia y servicios sociales, incorporación de la mujer al mundo laboral, creación de empleo en el mundo rural, etc.
- Recuperación de planes de empleo similares al PROTEJA y el MEMTA incrementando en los mismos las medidas que permitan la incorporación laboral de la mujer a los mismos.
- Redefinición de las políticas de apoyo a sectores económicos específicos (industria, turismo, servicios, agricultura,...) reforzando aquellas estrategias sectoriales de base tecnológica generadoras de empleo, innovación y valor añadido.
- Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos: inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas y autónomos que creen empleo y practiquen una gestión ambiental sostenible.
- Orientar los EREs hacia Planes Sociales de Formación y Recolocación: el mantenimiento de la relación laboral con la empresa por parte de los trabajadores y las trabajadoras afectadas por el ERE supondrá un coste que se financiará en base a lo siguiente: el 75% de la base reguladora del salario a cargo de Consejería de Empleo, siendo un 5% para la Formación, y el 25% a cargo de la propia empresa, que también pagará las cotizaciones sociales.
- Programa andaluz específico para ayuntamientos del medio rural basado en el cuidado de montes y reforestación.
- Implantar medidas para incrementar la incorporación al mundo laboral de personas con discapacidad.

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

IULV-CA se compromete a potenciar las políticas activas de empleo, con la finalidad de fortalecer la ayuda que éstas proporcionan a las personas paradas para lograr su integración laboral. Para ello, proponemos:

- Dotar de más recursos humanos y presupuestarios al Servicio Andaluz de Empleo, con objeto de que éste realice eficazmente las funciones que tiene encomendadas y garantice la atención personalizada a las personas demandantes, la potenciación de programas de orientación y formación para el empleo, y el fortalecimiento de la intermediación.
- Plan de Empleo y Formación para las personas desempleadas sin subsidio, con la financiación del Estado, de la Junta y la colaboración de los Ayuntamientos, basado en la creación de un puesto de trabajo dependiente de las administraciones públicas (ayuda a la dependencia, empleos de proximidad, apoyo a servicios municipales, etc.) durante 5 horas diarias y 2 horas diarias de formación, durante 6 meses prorrogables y con un salario 700 netos.
- Mejorar la formación y cualificación de los trabajadores y trabajadoras, incrementando, ordenando y dirigiendo los recursos hacia una formación profesional de carácter modular, flexible y adaptable que, además de formar, acredite la competencia profesional.

REIVINDICACIONES PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO

IULV-CA se compromete a luchar para que se mantenga todo el empleo público dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma (administración general, educación, sanidad y administración instrumental) y la garantía de que se sigan prestando desde lo público todos los servicios que hoy se prestan. Para ello planteamos:

- Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy una situación económica insostenible, posibilitando así que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen encomendados y manteniendo el empleo que depende de ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesionarias para que puedan cumplir sus obligaciones con sus plantillas.
- Instar al Gobierno del Estado a la creación de empleo público para asegurar la extensión de la educación. Cumplimiento de la memoria económica de la LEA, aumentando progresivamente el número de nuevas plazas de profesorado. Extensión de la de red pública de escuelas infantiles 0-3 años.
- Creación de empleo público para la completa aplicación de la Ley de Dependencia.
- Eliminación de las restricciones (como los límites a la tasa de reposición) en la oferta de empleo público creando nuevo empleo en educación, sanidad, servicios sociales y justicia.
- Aplicación y vigilancia de la legislación laboral, políticas de empleo y apoyo a la economía real, especialmente a los servicios públicos.
- Transformación de todas las becas, incluidas las de la Administración, en contratos de trabajo con alta en la Seguridad Social.
- Establecimiento de un plan de lucha contra la temporalidad laboral en la Administración.
- Regulación de salarios máximos y otras retribuciones en la Administración.
- Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción de medidas especiales de conciliación para las personas con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores dependientes.
- Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas que intervienen en los procesos de subcontratación y externalización.
- Adopción de las medidas necesarias para que los empleados públicos recuperen el poder adquisitivo perdido con los recortes adoptados por el Gobierno Central y los Gobiernos Autonómicos.
- Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontratas, no haber reducido el número de trabajadores en el último año, criterios de prevención de riesgos laborales y de preservación del medio ambiente, priorizar la selección de empresas que incrementen más el empleo y la calidad del empleo).

PROPUESTAS PARA EL IMPULSO DE UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

- Considerar el pleno empleo, digno y de calidad como el eje determinante del nuevo modelo productivo con políticas de reparto del trabajo y producción sostenible.
- Defender lo público y el papel de lo público en la economía. El Estado y las Administraciones Públicas deben reequilibrar el mercado, no sólo corregirlo.

- Paralización de las privatizaciones en curso y progresivo rescate de los servicios públicos hoy privatizados, incluida la gestión, especialmente en los campos educativo, sanitario y de servicios sociales.
- Establecer una nueva propuesta de indicadores alternativos a los clásicos: La eficiencia de un nuevo modelo no puede ser medida con los indicadores del antiguo modelo, y especialmente si el cambio que se pretende es cualitativo, como es el caso de un cambio que persiga sostenibilidad y democracia económica. Por ello hay que proponerse otros indicadores alternativos, que midan, además del crecimiento de los sectores, de la actividad, del empleo, etc., el grado de desarrollo sostenible y el nivel de democracia económica alcanzados.
- Rechazo de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, instando al Gobierno del Estado a emprender una reforma empresarial. Hay que cambiar la gestión empresarial en este país, penalizando el modelo de salarios bajos, precariedad y desregulación.
- Instar a la Junta de Andalucía a la democratización de la economía, desde la planificación del desarrollo sostenible hasta la gestión de cada empresa concreta.
- Y, en el mismo sentido que el apartado anterior, otorgar poder a los trabajadores y a las trabajadoras a partir del reconocimiento de su derecho a participar en la gestión de las empresas y en la distribución del excedente empresarial mediante la promulgación de una Ley de Participación de los trabajadores y sus representantes en la gestión de las empresas que, entre otras cuestiones, regule:
 - ▶ Su participación en los Consejos de Administración,
 - ▶ Su incidencia en los modelos de formación y cualificación laboral y en el modelo de Universidad,
 - ▶ La recuperación de la negociación, consulta y participación en la organización interna de las empresas,
 - ▶ El aumento de la participación de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras en cuantos organismos de inversión, de modelo de política industrial y de I+D+i, se creen.
 - ▶ El acceso a la propiedad de las empresas que se quieren deslocalizar.
- Salario máximo para los ejecutivos de las grandes empresas y la banca. Prohibición de los contratos blindados.
- Reforzar la cooperación empresarial y el diseño de planes sectoriales estratégicos con intervención pública.
- Erradicar las diferencias salariales entre mujeres y hombres y la segregación laboral por razón de sexo.
- Garantizar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres favoreciendo la flexibilidad horaria para favorecer el desarrollo de la vida personal, familiar o profesional.
- Fomentar la representación paritaria en todos los órganos de representación y favorecer la promoción profesional de las mujeres
- Instar al Gobierno del Estado para aumentar el período de permiso de paternidad y que éste sea obligatorio e intransferible.
- Modificar la Ley efectiva de Igualdad entre mujeres y hombres para que ésta recoja la obligatoriedad de que todas las empresas cuenten con un Plan de igualdad entre mujeres y

hombres que contemplen como mínimo la erradicación de las diferencias salariales y todo tipo de discriminaciones laborales por razón de sexo.

- Racionalizar los horarios como factor de mejora del modelo productivo:
 - ▶ Promover un consenso entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria para acordar conjuntamente las decisiones que favorezcan el cambio hacia una mayor racionalización de los horarios en Andalucía.
 - ▶ Desarrollo del Plan Concilia, que marca a las 18:00 horas la finalización de la jornada, en el sector público andaluz, o aprobar uno similar que regule un modelo de horario flexible y racional, gracias al cual los empleados públicos puedan hacer efectiva la conciliación de su vida personal, familiar y profesional.
 - ▶ Favorecer la adopción de medidas de racionalización y flexibilización de horarios en el ámbito empresarial, distinguiendo a las entidades que las aplican mediante desgravaciones fiscales, subvenciones, premios...

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

AUMENTO DE INGRESOS

- Dependientes del Gobierno del Estado:
 - ▶ Instar a una revisión del actual nuevo modelo de financiación autonómica que perjudica a Andalucía.
 - ▶ Instar al Gobierno del Estado a:
 - ▶▶ Dar a las rentas de capital mobiliario de las personas físicas un tratamiento similar al de las rentas del trabajo.
 - ▶▶ En relación con el IRPF, tratar las rentas de capital de las empresas al mismo tipo que el Impuesto de Sociedades.
 - ▶▶ La reforma del sistema de módulos de las PYMES y los autónomos.
 - ▶▶ La eliminación de los beneficios fiscales de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), así como a su transformación en sociedades en régimen de transparencia fiscal controladas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
 - ▶▶ La creación de una Impuesto Especial de Solidaridad sobre Altos Ingresos, y establecer en Andalucía un Impuesto que grave los altos ingresos mediante alguna de las figuras impositivas en las que tenemos capacidad normativa.
- De los impuestos cedidos por el Estado:
 - ▶ En el tratamiento del tramo autonómico del IRPF: Creación de dos tramos diferenciados, con incrementos de los tipos aplicados: de más de 60.000 euros, con un incremento de dos puntos porcentuales en el tipo aplicado; y de más de 120.000 euros, con un incremento de cuatro puntos porcentuales en el tipo aplicado.
 - ▶ En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones: Establecimiento de un nuevo sistema de deducciones y bonificaciones en función de la renta y patrimonio de las personas que son objeto de este impuesto, favoreciendo exenciones a aquellas con las rentas más bajas.
 - ▶ En el Impuesto de Patrimonio:

- ▶ Transformación del Impuesto de Patrimonio en un Impuesto sobre las Grandes Fortunas.
- ▶ Incremento del tipo general en un 20%.
- Puesta en marcha de un Plan de Actuaciones Fiscales Urgentes consistente en la adopción de las siguientes medidas:
 - ▶ Poner en marcha las medidas y actuaciones necesarias para que se haga efectivo el cobro del impuesto sobre tierras infrutilizadas contemplado en los artículos 30 y siguientes de la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria.
 - ▶ Creación de un impuesto sobre campos de golf.
 - ▶ La ampliación del cuerpo de tributos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en concreto, la creación del Impuesto Verde, que unifique y revitalice la actual imposición ecológica, estudiando la imposición respecto de los siguientes hechos imponibles:
 - ▶ Creación de un Impuesto de incentivación y promoción del transporte ferroviario.
 - ▶ Endurecimiento de las tasas sobre el juego.
 - ▶ Impulsar un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales con el objetivo de gravar el impacto ambiental, territorial y socioeconómico causado por el uso de las instalaciones y elementos afectos a la actividad y al tráfico que se desarrolla en torno a este tipo de establecimientos, así como las distorsiones que ocasiona en el sector por la posición dominante que les confiere, en el mismo, su implantación como grandes establecimientos.
 - ▶ Recuperación de un Impuesto sobre el suelo sin edificar con el objetivo de gravar la titularidad de aquellos terrenos que teniendo como destino natural la edificación, no estén edificados en los plazos establecidos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 - ▶ Implantar el Impuesto sobre edificaciones ruinosas con el objetivo de gravar la titularidad de aquellas edificaciones que, habiendo sido declaradas en ruina, no hayan sido objeto de sustitución o de rehabilitación en los plazos establecidos, así como gravar las viviendas vacías.
 - ▶ Presentación de una Ley de Fiscalidad Ecológica que establezca los Impuestos, las Tasas y los Cánones que graven las actividades con impacto medioambiental y favorezca el uso sostenible de los recursos naturales
- Reducción de las tasas de inscripción en convocatorias de selección de personal de la Administración Pública de Andalucía; reducción de las tasas de los servicios administrativos sobre la inscripción en el Registro de la propiedad intelectual; reducción de las tasas de acreditación de actividades formativas continuada de profesionales sanitarios; gratuidad de las entradas a museos y centros culturales públicos.
- Desarrollo de un Plan para hacer frente a la pérdida de financiación a través de fondos europeos que tendrá lugar a partir de 2013.

PLAN CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LA ECONOMÍA SUMERGIDA.

- Dotar a la **Agencia Tributaria Andaluza** con los recursos humanos y materiales necesarios para lograr la máxima eficacia en el desempeño de sus funciones y una coordinación efectiva con el resto de administraciones tributarias.
- La crisis económica ha traído el crecimiento de la economía sumergida, ya que aumentan los casos en los que esta situación es aprovechada para precarizar el empleo, privar a los

trabajadores y trabajadoras de sus derechos, y establecer competencia desleal con aquellas otras empresas cumplidoras. Por ello se hace imprescindible un compromiso firme por parte de las administraciones públicas para poner en marcha campañas, a través de las Inspecciones de Trabajo y de Hacienda, para aflorar estas prácticas y regularizar el empleo sumergido.

- Establecer el objetivo de reducción de la economía sumergida en 3 puntos anuales hasta 2016. La herramienta fundamental para conseguirlo es, en coordinación con la Agencia Tributaria de España, la puesta en marcha de Planes Autonómicos contra el fraude fiscal y la economía sumergida que refuercen la inspección y la denuncia de aquellas empresas que incumplen la ley.

REORDENACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

- Aprobación de un **Plan de Eficacia y Transparencia Administrativa** de Andalucía, consensado y con participación de los empleados públicos y las fuerzas parlamentarias, así como las asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía, con las siguientes líneas de actuación mínimas:
 - ▶ Suprimir procedimientos, trámites y modos burocráticos innecesarios, especialmente en relación con la creación de empresas, resolución de reclamaciones de usuarios y pago a acreedores, en especial, las administraciones locales.
 - ▶ Velar por el cumplimiento de los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, publicidad, concurrencia y transparencia en todos los contratos celebrados por la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.
 - ▶ Exigencia máxima de la objetividad en la adjudicación de los contratos públicos, evitando acudir al procedimiento negociado, a excepción de aquellos casos en que concurran los supuestos establecidos en la Ley Contratos de las Administraciones Públicas.
 - ▶ Garantizar el acceso y el derecho a la promoción de los ciudadanos al Empleo Público bajo los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como la cobertura de las plantillas orgánicas y los acuerdos entre los representantes de los empleados públicos y las distintas administraciones y organismos o empresas de ellas dependientes, para garantizar la calidad de los servicios públicos.
- Diseño y desarrollo de **planes de control interno del gasto público y de la calidad y eficiencia** de la misma con los siguientes elementos:
 - ▶ Centralización de los gastos de promoción, publicidad etc. a nivel de Consejería, Departamento, Organismos o empresas dependientes o vinculadas.
 - ▶ Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.
 - ▶ Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y publicaciones (excepto publicaciones de investigación y análisis).
 - ▶ Creación en cada departamento, institución, organismo, empresa, entes, etc. de una Comisión de Control y Seguimiento del Gasto de la que deberán formar parte por lo menos dos representantes de los trabajadores y trabajadoras.
 - ▶ Creación de una Agencia Autonómica para el Control de la Calidad del Gasto.
 - ▶ Control de la calidad y eficiencia de la Contratación pública, adoptando medidas para la transparencia de concursos y licitaciones y evitando como medidas eficaces el deslizamiento de los precios de los contratos públicos.

POLÍTICAS EN MATERIA ESPECÍFICA DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

En este punto nos referiremos a medidas que pueden encajarse de forma clara en lo que se pueden considerar como políticas generales de protección de los consumidores y usuarios en nuestra Comunidad.

- Definir y planificar en el ámbito de la Comunidad Autónoma políticas y estrategias de protección de los consumidores y usuarios desde una óptica transversal e implicando a todas las áreas del Gobierno andaluz, y ello aunque las funciones de coordinación, impulso y dinamización de las mismas recaigan y se sitúen en una Consejería específica. Dicho diseño y planificación debe abordarse con la participación y colaboración de las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas en el ámbito de Andalucía.
- Destinar en el presupuesto autonómico partidas económicas específicas para el desarrollo de las políticas de consumo y protección de los consumidores, en cuantía suficiente para poder ejecutarlas e impulsarlas. La insuficiencia de las partidas presupuestaria para las políticas de consumo, impide que puedan ser asumidas desde el rigor y el compromiso con los ciudadanos.
- Acometer una nueva regulación del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía. Es preciso abordar una revisión de la actual normativa reguladora del Registro al objeto de elevar los requisitos para el acceso al mismo y para ser considerada organización de consumidores colaboradora de la Junta de Andalucía con acceso a los derechos y beneficios reconocidos en la normativa vigente.
- Revisar y desarrollar la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía al objeto de completar la regulación de las organizaciones de consumidores y usuarios, definiendo claramente qué tipo de organizaciones pueden actuar como tales y qué requisitos deben cumplir las mismas, así como criterios de representatividad para actuar en el ámbito de la participación institucional y para el ejercicio de otras actuaciones.
- Redefinir del papel de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor contemplado en la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores de Andalucía, para que pueda ir asumiendo más competencias en materia de inspección y control del mercado y abrir un proceso para ir transfiriendo su actividad de atención e información al ciudadano a las organizaciones de consumidores a través de los oportunos convenios.
- Creación y desarrollo de la Comisión Interadministrativa de Cooperación en materia de Consumo como órgano de colaboración, coordinación y cooperación entre la Administración autonómica y las Corporaciones Locales. Esta Comisión permitiría analizar los problemas que puedan plantearse a los consumidores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en todos los ámbitos, incluido el local y las medidas más adecuadas para afrontarlos. Además serviría para programar y coordinar campañas informativas y armonizar criterios en la protección del consumidor.
- Aumentar y dotar los servicios de inspección, para desarrollar más actividad de control de mercado y mejorar la coordinación entre ellos con la creación y puesta en marcha de la Comisión Coordinadora de la Inspección de Bienes y Servicios prevista en la Ley 13/2003. Consideramos que los medios materiales y humanos de la administración Autonómica en materia de inspección deben orientarse a hacer un efectivo control del mercado, en beneficio del conjunto de la ciudadanía y de los consumidores y usuarios, a través de su presencia en la calle, reforzando las labores de inspección y sanción de las conductas fraudulentas y perjudiciales para los derechos de los consumidores y para fomentar vías de concertación entre consumidores y empresarios.
- Desarrollar programas anuales eficaces de inspección y control de mercado en colaboración con las organizaciones de consumidores representativas de Andalucía y dando participación

igualmente al sector empresarial para impulsar acciones y compromisos de mejora en los sectores con peores resultados. Anualmente la administración autonómica elabora distintos programas de control e inspección en diferentes sectores de actividad que tienen una incidencia directa en los consumidores y usuarios y en sus garantías como tales. Se hace preciso abordar tales programas en colaboración con los agentes implicados y afectados en los mismos para con ello contribuir a establecer prioridades, prevenir abusos y ayudar a implementar las mejoras necesarias.

- Revisión y actualización del régimen sancionador y de sus cuantías para garantizar que las sanciones impuestas cumplan su función disuasoria frente a conductas que atentan contra los derechos de los consumidores.
- Desarrollo y aplicación del artículo 92 de la Ley 13/2003 sobre difusión e información de las sanciones como medida tendente a garantizar los derechos de los consumidores y sobre limitación o prohibición para que las administraciones públicas andaluzas contraten con empresas sancionadas en firme por cometer infracciones graves y muy graves.
- Agilización de la tramitación de las reclamaciones presentadas por los consumidores y usuarios y organizaciones de consumidores representativas de sus derechos y reconocimiento expreso del carácter de interesado en el procedimiento de dichas organizaciones, desarrollando aplicaciones tecnológicas que permitan al interesado tener acceso al estado de tramitación del expediente. Agilización igualmente de la tramitación de los expedientes sancionadores y del cobro de las sanciones de forma que éstas puedan revertir en una mejora las políticas de protección de la ciudadanía en su condición de consumidora y usuaria.
- Regulación en Andalucía de los servicios de atención al cliente de las empresas que operan en nuestra Comunidad, estableciendo la gratuidad de sus servicios telefónicos, así como plazos de respuesta obligatorios a las reclamaciones y consultas de los consumidores y fijando indemnizaciones por incumplimiento.
- Impulsar la creación en Andalucía de un sistema de mediación como mecanismo de solución negociada de los conflictos con la colaboración y la concertación de las organizaciones de consumidores y usuarios y el sector empresarial que contribuya a la reducción de la conflictividad en materia de consumo.
- Incrementar el apoyo al Sistema Arbitral de Consumo como un instrumento para la resolución extrajudicial de los conflictos en materia de consumo y alternativa a la vía judicial. Ello requiere dotar de medios materiales y personales al Sistema e impulsar campañas de adhesión del empresariado, incluidas las empresas públicas que presten servicios a los ciudadanos, incorporando la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo como elemento a tener en consideración en los concursos y adjudicaciones de contratos de prestación de servicios de la administración autonómica. También requiere estimular la participación de todos los sectores, dotándoles de los recursos materiales necesarios para un funcionamiento ágil y eficaz, reforzar y dignificar el papel de los profesionales designados como árbitros por los agentes sociales implicados, asignando dietas adecuadas a los árbitros en el desempeño de sus funciones y cometidos.
- Aprobar el Plan Integral de Formación en materia de consumo y protección de los consumidores y desarrollar programas de educación específicos destinados a los consumidores y usuarios en general y a educadores, árbitros, empresarios, técnicos de las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios en particular, así como el desarrollo de actividades de especialización para el personal de las Administraciones Públicas de Andalucía vinculado al área de consumo. Es necesario fomentar la información, formación y educación en materia de consumo, impulsando hábitos de consumo responsable y sostenible, entre la población en colaboración con las organizaciones de consumidores más representativas.

- Desarrollar campañas de fomento del asociacionismo. El Gobierno andaluz debe proporcionar los medios para que las organizaciones puedan ejercer su papel de agentes económicos y sociales tal como establece la legislación vigente y con eficacia, e intervenir activamente en el mercado tomando como base las actuaciones encaminadas a engrosar su tejido social.
- Avanzar en el reconocimiento del papel de las organizaciones de consumidores y usuarios como agentes económicos y sociales. Debe reconocerse el desarrollo alcanzado por el movimiento consumerista organizado en Andalucía y asumir el nuevo papel que deben jugar las organizaciones de consumidores y usuarios andaluzas como agentes con capacidad de intervención en el mercado, garantizando su participación en la toma de las decisiones sobre aquellas materias que puedan afectar a los consumidores y usuarios andaluces y su papel como entidades representativas en las que debe residir la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, y fomentando el asociacionismo como el mejor cauce para la efectiva protección de dichos derechos, tanto en sus aspectos generales como en la tramitación de reclamaciones particulares.
- Desarrollo del I Pacto por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios en Andalucía e incremento de los recursos económicos destinados a apoyar a las organizaciones de consumidores y usuarios. Por imperativo constitucional y estatutario, las administraciones públicas deben adoptar las medidas necesarias para proteger defender a los consumidores así como apoyar a sus organizaciones representativas como elementos esenciales de nuestro sistema político, social y económico. Esto se revela especialmente importante ante un mercado que se torna cada vez más agresivo para la ciudadanía, en unos momentos complejos por los procesos de liberalización y desregulación de diversos sectores económicos que requieren que las organizaciones de consumidores, como agentes sociales y económicos, tengan una mayor capacidad para equilibrar las fuerzas.
- Promover la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en los Consejos de Administración de las Empresas y Agencias Públicas Andaluzas. Si aún es preciso avanzar en el ámbito de la participación social en el seno de la propia Administración autonómica, aún se hace más necesario contemplar la posibilidad de intervención de las personas ante los órganos de gestión de los entes instrumentales, y en concreto en los Consejos de Administración de las Empresas y Agencias Públicas que prestan servicios públicos y/o de interés general.
- Facilitar el reconocimiento como entidades de utilidad pública de las organizaciones de consumidores como instrumento para el mejor desarrollo de sus fines. Este reconocimiento, además de ser de justicia y corresponderse con la realidad de la labor de estas entidades, suponen una herramienta fundamental para diferenciar estas entidades de interés social general, cuyas funciones y cometidos se recogen en nuestra propia Constitución, de otras que representan intereses más sectoriales o particulares (legítimos, pero de un alcance más limitado), permitiéndoles acceder a un estatus legal y fiscal que es el que le corresponde en función del trabajo que desarrollan en beneficio de la Sociedad.
- Fortalecer el papel del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. Debe fortalecerse el papel del máximo órgano de participación y consulta de los consumidores y usuarios andaluces como tal, dotándolo de mayores competencias y recursos y reconociéndole legalmente personalidad jurídica propia, al objeto de contar con mayor autonomía e independencia para el cumplimiento de sus cometidos en beneficio de la sociedad andaluza.

UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES BÁSICOS

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, LAICA, DEMOCRÁTICA Y DE CALIDAD.

La educación es un proceso social multidimensional en el que interactúan la sociedad, los aspectos culturales, los individuos... Por ello es imprescindible tener en cuenta la transversalidad y globalidad de los procesos educativos, que se dan a lo largo de la vida y en lugares concretos. Nuestra concepción del sistema educativo andaluz está vinculada a una **EDUCACIÓN PÚBLICA, DE CALIDAD, LAICA, DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA Y PROGRESISTA, CONSTRUÍDA DESDE LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD**. Partiendo de este marco y entendiendo la educación como un elemento de cohesión social para formar personas más libres, más críticas y más iguales, proponemos:

- La **educación pública** como eje estructurador del sistema educativo, garante de la igualdad de oportunidades y de la integración. Un sistema público de enseñanza al servicio de las necesidades sociales, igualdad de derechos y valores democráticos.
 - ▶ Extender la **red de centros de titularidad pública** para atender con suficiencia la demanda en las diversas etapas educativas. Reducción progresiva de los conciertos educativos comenzando por aquellos distritos o localidades donde haya plazas públicas suficientes, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros hasta ahora concertados en una red única de centros públicos, dando prioridad a la integración de los centros cooperativos de trabajo asociado. Hasta tanto se mantenga la concertación, esta vendrá determinada solo si se ha satisfecho previamente la oferta pública.
 - ▶ **Red Pública de Centros de Educación Infantil**. Extender y consolidar una red de centros de titularidad pública de educación infantil que garantice una oferta suficiente y estable.
 - ▶ La administración educativa garantizará el acceso universal, la calidad del servicio y las condiciones laborales en **los comedores escolares, las aulas matinales y las actividades extraescolares**, dando prioridad a la gestión pública de dichos servicios.
 - ▶ **El suelo público solo para los centros de titularidad pública**. Impedir cesiones de suelo municipal destinados a centros de titularidad privada.
 - ▶ **Ampliación de la red de centros de Educación de Personas Adultas (E.P.A.)**, hasta cubrir la totalidad de la demanda, en todas las etapas, niveles y modalidades de enseñanza

presencial, semipresencial y a distancia, estableciendo la planificación de estas enseñanzas conforme a demanda. Ampliación de la oferta en los establecimientos penitenciarios.

- ▶ **Escuelas Oficiales de Idiomas:** Se garantizará para todo el territorio una oferta pública de calidad de enseñanza de idiomas, para todos los niveles de competencia lingüística según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, desde A1 hasta C2, con prioridad para los cursos de adquisición del nivel B2 –intermedio alto-.
- ▶ **Oferta planificada y ampliada de FP,** teniendo en cuenta tanto su rentabilidad social como su cualificación para satisfacer la demanda del tejido productivo. Ampliación de la oferta de los ciclos formativos al régimen de personas adultas, con duplicidad de horarios en los IES que los ofertan. Optimización de las instalaciones de los ciclos formativos para la impartición de cursos de formación profesional ocupacional. Modificación de la normativa para flexibilizar los ciclos formativos que permitan adaptarse con rapidez a nuevos perfiles profesionales.
- ▶ **Integración en el sistema general de las “enseñanzas de régimen especial”.** Promover el tratamiento equivalente en los estudios de Música, Danza, Arte Dramático y Artes Plásticas, con el fin de posibilitar al alumnado la simultaneidad con las enseñanzas de carácter ordinario. Ampliación de oferta educativa de las titulaciones más demandadas de estas enseñanzas en las escuelas y conservatorios de titularidad pública.
- Una **educación laica**, en la que prevalezcan los principios de libertad de conciencia, independencia de opciones religiosas o de creencias o convicciones personales.
 - ▶ Que el currículo escolar no contemple como área o materia la impartición de doctrina religiosa.
 - ▶ Que la enseñanza de doctrina religiosa salga del horario lectivo.
 - ▶ Que desaparezcan la simbología religiosa y los actos litúrgicos de los centros escolares públicos.
 - ▶ Condicionar las subvenciones a centros educativos de titularidad privada a su convergencia con los principios del sistema educativo andaluz establecido en la Ley de Educación de Andalucía, garantizando, en todo caso, la salvaguarda de la libertad de conciencia de las familias y el personal docente.
- Una educación de calidad

ESTRUCTURAL

- ▶ **Ley de acompañamiento** que dé un carácter de estabilidad a la inversión en la educación pública de Andalucía, que asegure el 7% del PIB de nuestra Comunidad o como mínimo una cuantía por alumno no menor a la media estatal (5.539 euros de gasto público en educación no universitaria por alumno y año).
- ▶ Con carácter general, **reforzar presupuestariamente** e invertir preferentemente en aquellos centros que por sus circunstancias socioeconómicas y características generales de su alumnado se encuentran en situación de desventaja.
- ▶ Incentivar los movimientos de **innovación en la educación y la formación preferente** en este ámbito entre el personal docente.
- ▶ Conseguir una adecuada **prevención de riesgos laborales y salud laboral** para todas las personas que trabajan en el sistema educativo.
- ▶ Establecimiento de la figura del **orientador/a en los centros docentes de educación infantil y primaria**.

- ▶ Coordinación de las diferentes administraciones para conseguir el **éxito escolar** del alumnado andaluz a través de un **PLAN INTEGRAL de carácter cuatrienal**, en un horizonte de reducción al 10 % del fracaso escolar en el 2020.
- ▶ **Las bibliotecas escolares** recibirán una dotación adecuada, con personal para mantenerlas y convertirlas en un recurso accesible.
- ▶ La gratuidad de los libros de texto debe ir acompañada de la **gratuidad de los materiales complementarios** que utilice el profesor.
- ▶ Avanzar hacia una **educación 3.0** que vaya más allá de la mera dotación instrumental. Queremos asociar la tecnología con una pedagogía 3.0 que suponga un cambio de valores respecto al conocimiento, al aprendizaje, a la metodología y al uso compartido de materiales y recursos.
- ▶ Aumentar con carácter experimental la **oferta de lenguas extranjeras**, que añadan a las de inglés, francés y alemán, aquellas denominadas emergentes (chino, árabe, chino, portugués y ruso) en determinados centros docentes de primaria y secundaria.
- ▶ Elevar el nivel de competencia lingüística en una lengua extranjera, sobre todo en su práctica oral, a través de la extensión de la **enseñanza bilingüe**, así como con programas complementarios, como la extensión a centros no bilingües de auxiliares de conversación.
- ▶ Extender, principalmente entre las zonas rurales o aquellas donde la práctica del inglés sea menor, los **programas de acompañamiento escolar** para el aprendizaje de este idioma entre el alumnado de edades tempranas.
- ▶ Impulsar la **evaluación** como elemento de mejora del sistema educativo andaluz desde parámetros que busquen, entre los principales objetivos, el éxito escolar, la mejora de la práctica docente y el funcionamiento de los centros docentes.
- ▶ Fortalecimiento de la función inspectora en las competencias encomendadas por la Ley de Educación de Andalucía.
- ▶ Desarrollar con urgencia el Título V de la citada Ley de Educación de Andalucía referente a la creación de **las redes de centros y zonas educativas**, con el fin de potenciar en mayor medida la coordinación entre los centros de Primaria y Secundaria.
- ▶ Implantación generalizada de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (**PCPI**), garantizando en todo caso la existencia de estos cursos en los IES, con las mismas familias profesionales que las de la oferta de Ciclos Formativos.
- ▶ Realizar el **reparto equitativo del alumnado** con necesidades educativas especiales de cualquier tipo (inmigración, desfase sociocultural, discapacidad, etc.) entre todos los centros en general y entre centros públicos y privados concertados en particular.
- ▶ Aumentar la plantilla de **auxiliares administrativos** de los centros con criterios de proporcionalidad a la dimensión de los centros docentes.
- ▶ La Consejería de Educación irá asumiendo el **mantenimiento** íntegro de los centros docentes no universitarios –incluidos las escuelas de educación infantil y los colegios de educación primaria–, así como la competencia sobre el personal no docente de los mismos.

ALUMNADO

El alumnado es el centro del proceso educativo: Garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor instrucción posible a todo el alumnado es la mejor manera de que el sistema en su conjunto logre los mejores resultados. Entre otros, proponemos:

- ▶ Dar una respuesta adecuada a la **diversidad** como garantía para el éxito académico y escolar: apoyo y seguimiento en la etapa obligatoria del alumnado con dificultades y con altas capacidades intelectuales. Fortalecer la prevención y detección precoz de situaciones de riesgo desde la etapa 0-6 años.
- ▶ Hacer seguimiento específico en los dos primeros ciclos de educación primaria de aquel alumnado con mayores dificultades en la **lectura y la competencia matemática**.
- ▶ Fortalecer las estrategias de **aprendizaje hacia la personalización** del proceso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria.
- ▶ Establecer tutorías especiales con mayor grado de seguimiento y personalización con los alumnos con mayores dificultades en su aprendizaje y permanencia en el sistema. Extender la **tutoría lectiva al bachillerato** dentro del horario semanal del alumnado.
- ▶ Reducción de las **ratios** de grupo/alumnado, para una mejor atención del mismo, en las diferentes etapas educativas de manera progresiva y con preferencia, en una primera fase en esta legislatura, a los centros con mayor dificultad y de acuerdo con indicadores objetivos de menor rendimiento académico y desfase sociocultural, con un horizonte que encamine de modo generalizado a las ratios máximas siguientes: 4 para menores de 12 meses, 6 para 12-24 meses, 8 para 24-36 meses, 15 para 3-6 años, 20 para primaria, 25 para ESO y 30 para bachillerato.
- ▶ Garantizar las **zonas de escolarización** que favorezcan la **mezcla** y la convivencia en un mismo centro de distintos perfiles **de alumnado**, a fin de convertir **todos** los centros educativos en espacios de encuentro y cohesión social.
- ▶ Aumentar las convocatorias de programas para alumnado en el **aprendizaje de idiomas**, a través de estancias en el extranjero y cursos de inmersión lingüística total en territorio andaluz.

PROFESORADO

La calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia se revela, en consecuencia, como uno de los principales objetivos del sistema, que garantizará en cualquier caso un proceso formativo permanente que trascienda la selección inicial del propio profesorado. Entre las medidas encaminadas a estos objetivos, destacamos:

- ▶ Incremento progresivo de las plantillas docentes en coherencia con el cumplimiento de los compromisos de la Ley de Educación de Andalucía.
- ▶ Promover convenios con las Universidades andaluzas para el desarrollo de **master adecuados** a las necesidades de desarrollo de destrezas profesionales del sistema educativo y con garantías de adecuación a las necesidades prioritarias de los objetivos básicos del mismo.
- ▶ Incrementar la realización de prácticas directas en el aula en las etapas de formación universitaria de los futuros profesionales docentes.
- ▶ **Cuerpo único de profesorado**, que contemple las distintas vertientes de la función docente, especialmente la pedagógica, y que combine simultáneamente práctica remunerada, tutorizada por profesorado cualificado en los centros educativos, con la formación universitaria recibida, a lo largo de todo el periodo de formación inicial y no sólo en el último curso de a misma.
- ▶ **Derogación del Decreto 302**, en particular el articulado relacionado con la regulación de la selección del profesorado interino, y consensuar un nuevo procedimiento que, para la baremación y ordenación de las bolsas de trabajo, contemple, entre otros aspectos, el tiempo de servicio prestado como elemento prioritario, así como la validez de la máxima

calificación obtenida en la prueba de oposición, sin que sea obligatoria la presentación a las sucesivas convocatorias.

- ▶ **Formación inicial:** Definición del perfil docente desde la formación universitaria, con dominio de las TIC, idiomas, alto nivel académico... Todo ello se complementará con una formación práctica que se realizará en los centros escolares durante la formación universitaria y en una de las fases de oposición. Adecuación de la cualificación profesional al perfil de la etapa educativa que impartirá el profesorado.
- ▶ Oferta amplia de **formación continua y permanente, de calidad y gratuita** a todo el personal docente, con prioridad de formación en los objetivos de los proyectos educativos de los centros, con especial atención a los idiomas y uso de las TIC. Los Centros de Profesorado serán clave para la articulación de un nuevo **Plan de Formación del Profesorado Andaluz**. El objetivo de la formación deberá ser la mejora de la práctica docente para la disminución del fracaso escolar.
- ▶ **Favorecer la investigación-acción** de los docentes para la mejora de su desempeño profesional, en colaboración con el ámbito universitario y su posterior apoyo en la difusión.
- ▶ **Estatuto de la función docente**, acordado con los sindicatos, que regule el acceso, las condiciones de trabajo, la carrera profesional y el sistema de jubilación de los profesionales de la educación pública, que contemple la jubilación voluntaria sin penalización a partir de los 60 años.
- ▶ **Reconocimiento de la labor docente** a través del mantenimiento de la reducción horaria a los/as mayores de 55 años sin reducción salarial; carácter permanente de la denominada jubilación LOGSE. Igualmente este reconocimiento se garantizará por el mantenimiento de los salarios sin recortes o congelaciones.
- ▶ **Acceso a la estabilidad laboral** para el profesorado interino mediante la dotación de plazas suficientes para cubrir todas las necesidades del sistema educativo y donde se valore la experiencia y conocimiento demostrado durante el ejercicio de la profesión. El profesorado de los centros concertados deberá seleccionarse de la misma manera.
- ▶ Diseñar protocolos para que las **sustituciones** de bajas del profesorado (maternidad/paternidad, permisos reglamentados, imprevistas...) se produzcan de inmediato o en menos de 72 horas con carácter generalizado.
- ▶ Favorecer al máximo la **estabilidad del profesorado** en cada centro, especialmente en la etapa obligatoria, con el fin de que su labor con un grupo específico de alumnado tenga continuidad en cada ciclo. En consecuencia debe reducirse con urgencia el número de interinos existentes y, donde sean indispensables y con duración superior a un curso (por ejemplo, por una situación de servicios especiales o comisión de servicio) favorecer la continuidad del sustituto en el mismo centro. El objetivo será la consecución, con carácter general, de que el 90% de la plantilla de funcionamiento de un centro sea plantilla orgánica.
- ▶ **Desburocratización** de la función directiva y la labor docente, con procesos que, garantizando la información y el seguimiento de las funciones correspondientes, liberen tareas administrativas para reforzar la perspectiva pedagógica de los grupos directivos y los equipos docentes.

UNA EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA BASADA EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA EQUITAD

- ▶ **Elección democrática de los equipos directivos** de los centros docentes. Una dirección de carácter colegiado que se aleje de los modelos de gestión empresarial siendo la gestión democrática uno de los ejes de la organización escolar, y como tal, de la dación

de cuentas ante la Administración y la Comunidad Escolar. Elección por el Consejo Escolar de la dirección del centro.

- ▶ Fomentar la toma de decisiones participativas dentro de la comunidad educativa, devolviendo el papel de órgano de decisión al **Consejo Escolar**.
- ▶ **Escolarización** equitativa del alumnado con discapacidades, necesidades educativas especiales, extranjeros/as...
- ▶ Modificación del Decreto sobre **Consejos Escolares Municipales** que convierta a estos órganos en verdaderos elementos de coordinación de las administraciones, y de la Administración con la ciudadanía y los colectivos sociales.
- ▶ Impulsar la participación de las familias y el alumnado en la gestión escolar, promoviendo el asociacionismo.
- ▶ La **educación para la paz y la convivencia democrática** debe ser elemento esencial en el currículo, con la inclusión de educadores/as y trabajadoras/es sociales en los equipos educativos, actuaciones educativas con las familias...
- ▶ La **educación para la igualdad, coeducación**, ha de tener un papel vertebrador de todo el currículo. Todos los centros públicos y sostenidos con fondos públicos deberán desarrollar este elemento esencial en el currículo.
- ▶ Reforzar, en coordinación con el gobierno central, la legislación vigente para evitar que con dinero público se financien proyectos educativos que aplican la segregación por género del alumnado. Asimismo, recurrir en todos los ámbitos posibles las últimas sentencias favorables al mantenimiento de los conciertos con aquellos centros que practican la segregación.
- ▶ Velar por que todos los centros educativos respeten la diversidad afectivo-sexual, promoviendo una **educación sexual que supere los contenidos heterosexistas** actuales y ofreciendo a todos los profesionales y a las AMPAS programas de prevención de la LGTBfobia.
- ▶ Amplio sistema de **becas** que garantice el estudio y posibilite el acceso a los servicios públicos a aquellas familias de rentas más bajas, entre otros, a actividades extraescolares, aulas matinales, comedores, perfeccionamiento de idiomas en el extranjero o acompañamiento escolar. El alumnado con rentas más bajas deberá tener prioridad e incluso la obtención de la gratuidad en su caso.
- ▶ Elaboración, con los agentes sindicales, las AMPAS y otras asociaciones de profesionales de la enseñanza (ADASIPRE, ADIAN, ADIDE) de un Plan de Choque bienal para **erradicar el fracaso escolar y evitar el absentismo escolar**, en el marco del Plan Integral por el éxito escolar del alumnado andaluz.

POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD.

Defendemos una Universidad entendida como servicio público que no busque la “competitividad” y la “excelencia”, sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad, para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural y profesional, no una universidad al servicio del mercado y de las demandas empresariales. Para ello, proponemos:

- **Defensa del sistema universitario público andaluz** formado por las actuales Universidades públicas, con una amplia oferta de titulaciones vinculadas a los territorios, desde la diversidad de las áreas de conocimiento y el mantenimiento de las titulaciones actuales.

- Implantación de un **modelo andaluz de financiación pública** basado en criterios formativos, científicos y de utilidad social, frente a la financiación de base competitiva o de pretendida “excelencia”.
- Establecimiento de **mecanismos que impidan** que la **inversión privada determine** la actividad docente y **la investigación** de las universidades.
- **Congelación de las tasas**, y aplicación, consecuentemente, del menor tramo en los estudios universitarios, dentro de la horquilla de precios establecida por el Ministerio de Educación. Establecer como objetivo la **gratuidad de los estudios universitarios**, priorizándola en los de Grado. Se garantizará, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas
- Financiación pública suficiente para generalizar las **becas-salario**, vinculadas al cumplimiento de las obligaciones requeridas para los estudios cursados y desde la concepción de que el estudio es una actividad socialmente útil que debe ser retribuida.
- **Estatuto del Personal Docente e Investigador** negociado con los sindicatos, estableciendo el **cuerpo único docente**, y donde se consolide la erradicación de la precariedad y la progresiva homologación de las retribuciones del profesorado y del personal de administración y servicios universitarios a la adaptación al EEES.
- **Representación democrática** de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno, reequilibrando su representación e incrementando el peso del estudiantado, y propiciando una gestión de esta institución que responda a objetivos formativos y no mercantilistas. Apostamos por un **nuevo estatuto del estudiante** que refuerza su naturaleza democrática.
- **Paralizar la “Estrategia Universidad 2015”** y abrir un debate social con toda la comunidad universitaria sobre la Universidad que realmente se necesita.
- **Revisión del sistema de titulaciones del proceso de Bolonia** evitando en todo caso su supeditación a las empresas privadas.
- Establecer mecanismos para que la **transferencia de conocimiento tecnológico sea de dominio público**, de pública disponibilidad, no un negocio privado.
- **Aumento sustancial de la financiación de la investigación** destinada a las Universidades públicas.
- **Universidad por la paz**: Eliminación de las titulaciones de “Ingeniería en Sistemas de Defensa” de las Universidades, así como cátedras y máster relacionados con fines militares. Se eliminará como I+D los recursos dedicados a fabricación de armamento.
- **Planificación de la oferta de plazas universitarias** acorde con las necesidades sociales y **supresión de pruebas de acceso** generalizadas de carácter selectivo (“selectividad”).
- Equiparación de los precios públicos en los postgrados a los precios vigentes en los grados.
- Reconocimiento a los estudiantes universitarios del derecho al desarrollo de asambleas en horario lectivo y del derecho al paro académico mediante un procedimiento de garantías. Se promoverá, desde el respeto a la autonomía universitaria, el reconocimiento de las asambleas como máximo órgano de participación y decisión estudiantil y la inclusión en los presupuestos universitarios de partidas para el desempeño de las funciones de las estructuras representativas estudiantiles.
- **Conversión** de los Consejos Sociales en órganos representativos de la sociedad civil que articulen la participación de este en la gestión de las universidades. En ellos se establecerá un régimen de incompatibilidades entre la pertenencia a los mismos y la propiedad o gestión de entidades con ánimo de lucro.

- **Reforma de la Ley Andaluza de Universidades** que consolide las propuestas definidas en el presente programa.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN EL TRABAJO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Dar cumplimiento al Art. 53 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en un momento en el que es prioritario colocar la actividad científica y tecnológica en el centro del debate social con el fin de convertirla en elemento de cohesión social y territorial y, que a la vez, contribuya al modelo de construcción de la cultura científica indispensable para elegir y decidir el modelo social en que queremos vivir.

Nuestras propuestas prioritarias en I+D+i se resumen en:

- Establecimiento de líneas propias de investigación y el seguimiento control y evolución de los proyectos financiados por la Junta de Andalucía.
- Salvaguardar la investigación como servicio público que garantice el carácter público del los resultados que se obtengan.
- Consolidar el sistema científico optimizando la asignación de sus recursos, tanto económicos como humanos.

Por otra parte, es necesario poner en marcha una serie de políticas y medidas que hagan posible la consolidación del sistema científico optimizando la asignación de sus recursos, tanto económicos como humanos. En particular:

- Conversión efectiva de todas las becas de investigación en contratos laborales de cuatro años con evaluación anual.
- Derogación del Estatuto del Becario
- Orientación de los recursos de I+D a aplicaciones civiles, descartando el modelo de desarrollo vía innovación militar.
- Integración en el diseño de las políticas científica y tecnológica de las actuaciones y orientaciones públicas en materia de infraestructuras, sanidad, educación vivienda, ordenación del territorio, política medioambiental y energética, y recursos naturales.
- Promoción de la investigación asociada a modelos de desarrollo sostenible, protección del medio ambiente, energías renovables y limpias y salud laboral.
- Fomento del sector público y articulación con el sector privado de las actividades de I+D. Consolidación y crecimiento de la infraestructura de los Centros Públicos de I+D. Creación y promoción de Centros Tecnológicos Sectoriales con financiación mixta público-privada, ligados a actividades sectoriales y territoriales.
- Priorizar las tecnologías que mejoren la relación innovación/volumen y calidad del empleo generado. Desarrollo de I+D en educación, para adecuar las cualificaciones a los procesos de innovación.
- Desarrollo de tecnologías genéricas y respetuosas con el medio ambiente, que permitan mejorar la calidad de vida en los entornos urbanos y rurales. Políticas de difusión activa diseñadas para casos específicos (PYMES, regiones menos favorecidas, sectores tradicionales).
- Recuperación y reforzamiento de la investigación en temas socioeconómicos, con especial énfasis en los objetivos dirigidos al estudio de los fenómenos de marginación y exclusión

social, emigración, consecuencias sociales del paro y la precariedad laboral. Evaluación del impacto social de las políticas de reducción del gasto público y de desregulación de las condiciones de trabajo. Evaluación del impacto de las tecnologías generadas sobre el empleo, la calidad de vida y el medio ambiente.

SANIDAD UNIVERSAL, PÚBLICA Y GRATUITA

La sanidad es un derecho y no un privilegio, únicamente desde la defensa de una sanidad pública de calidad, garante de la equidad, solidaria, democrática y orientada al ciudadano (sin la alineación neoliberal predominante), puede garantizar una sanidad para tod@s sin exclusiones. Es de vital importancia la promoción de hábitos de vida saludable en un entorno medioambiental adecuado.

IU se pronuncia en defensa de la sanidad en todo su carácter conquistado, público, universal, de calidad, integral, solidario y de equidad garantizada.

Consideramos irrenunciable garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a la protección de la salud, sin discriminación de ningún tipo y sujeto a la condición de ciudadanía. Y no sólo en la vertiente reparadora o curativa sino también en las acciones de prevención y promoción de salud.

Es necesario entender que la actuación en torno a los factores socioeconómicos es determinante en la generación y garantía de salud, es por esto que el programa completo para la salud (entendido como bienestar físico, psíquico y social) debe buscarse también en otras partes de nuestra propuesta política. Entendemos que la salud es un derecho y no una mercancía, y que sólo se puede garantizar desde la defensa de una sanidad pública de calidad.

A lo largo de los años, el Sistema de Salud ha hecho gala de una notable capacidad para generar buenos resultados con arreglo a distintos parámetros de rendimiento: Estado de salud de la población, cobertura, acceso y equidad financiera, calidad y seguridad de la atención sanitaria, siendo base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de nuestra sociedad

Estos logros se han alcanzado con un nivel relativamente bajo de gasto, si se compara con el porcentaje del PIB que se dedica a la sanidad en otros países europeos y en otras comunidades (situándonos en la cuarta comunidad autónoma con menor gasto sanitario per cápita-datos de la ADSP). Partiendo de este déficit, los ciudadanos disfrutaban de un sistema sanitario con una buena relación coste-calidad.

Sin embargo, en los últimos años se ha llevado a cabo una campaña generalizada para desprestigiar y dismantelar los sistemas públicos de salud, bajo la influencia neoliberal, que quiere privatizar los sistemas sanitarios en busca de oportunidad de negocio. Esto conlleva una mayor desigualdad en nuestro territorio.

En Andalucía se han puesto en marcha en los últimos años estrategias privatizadoras que van deteriorando la calidad asistencial, caminando hacia modelos que han fracasado allí donde se implantaron. En la práctica se han extendido modelos y procedimientos como las externalizaciones y subcontratas a empresas privadas (en todos los grandes hospitales de Andalucía), conciertos sanitarios (tanto procedimientos diagnósticos como terapéuticos), así como la puesta e marcha de nuevas formas de gestión mixta público –privados que menoscaban la calidad y la atención sociosanitaria.

En esta situación la sanidad andaluza sufre una serie de carencias que menoscaban la calidad que es necesario paliar:

- El déficit de personal sanitario (que se agudiza más en las urgencias y en los centros rurales), esta dotación es necesaria para una correcta atención, además de las condiciones de precariedad en la política de contratación del SAS. En el contexto actual observamos como las plantillas se están adelgazando

- Déficit democrático en el modelo del SAS, en la toma de decisiones sin la participación del personal ni de la ciudadanía, orientado hacia una política neoliberal donde el paciente pasa a ser considerado cliente.
- Déficit en la atención social, en la prevención y promoción de la salud, así como en la investigación.
- Es necesario un estudio de situación de la sanidad en Andalucía y de las necesidades del sistema.

Desde IU consideramos que las cualidades del sistema público que debemos desarrollar son las siguientes:

- La Atención Primaria como pilar fundamental del sistema andaluz de salud. En los últimos años vemos que está perdiendo su papel dinamizador. La AP como puerta de entrada al sistema sanitario, debe tener un papel preponderante en la organización de la prestación del servicio público.
- Apuesta del sistema público por el medio rural. Desarrollo de una red adecuada de Hospitales Comarcales para garantizar la igualdad en la asistencia dentro de Andalucía, descentralizando la atención especializada.
- Aumento de las prestaciones al sistema público :
 - ▶ Cubrir la necesidad de atención de cuidados medios para pacientes crónicos.
 - ▶ Adecuar la atención integral al enfermo mental.
 - ▶ Atención especial a los colectivos discriminados y aquellos en riesgo de exclusión social (planes integrales como el de atención a la diversidad cultural, creación de la figura de mediador-traductor...)
- Adecuar la cartera de servicios a las necesidades reales de la sociedad, con uniformidad en el territorio andaluz.
- Puesta en marcha de planes de promoción y prevención de la salud, aumentando las campañas de sensibilización (incidiendo sobre la discriminación y los estigmas de las enfermedades). Es de vital importancia promover estilos de vida saludable.

Es por ello que desde IULV-CA trabajaremos prioritariamente por la consecución de los siguientes objetivos:

- Derogar todas aquellas leyes que introduce el ánimo de lucro, que abren las puertas a la mercantilización de la sanidad
- Supresión progresiva de los conciertos con el sector privado, cese de las externalizaciones y absorción de las subcontratas por el sistema público, así como la supresión de las nuevas fórmulas jurídicas de gestión e incorporación al sistema público de estos centros
- No a los recortes ni a los despidos encubiertos, dotación adecuada estable del personal sanitario
- Red de centros públicos a pacientes crónicos y dependientes
- Red adecuada de hospitales comarcales en el medio rural

Y, para su consecución llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:

- Derogación de todas aquellas leyes que introducen el ánimo de lucro, abriendo las puertas a la mercantilización de la sanidad (nos sumamos a la petición de la derogación de la ley

15/97, aunque corresponde al ámbito estatal, tiene su aplicación a nivel andaluz dadas las competencias autonómicas)

- Supresión progresiva de los conciertos con el sector privado, cese de las externalizaciones y absorción de las subcontratas por el sistema público
- Supresión de las nuevas fórmulas de jurídicas de gestión e incorporación al sistema sanitario de estos centros
- Es necesario replantear una nueva política de personal con una dotación adecuada y calidad en el empleo, para una correcta atención en los centros sanitarios. Consideramos a los profesionales como un valor importantísimo del SSPA, que además es necesario prestigiar. Necesidad de darle periodicidad a las OPE
- Red de centros públicos de atención a pacientes crónicos y dependientes
- Exclusividad por parte de los profesionales sanitarios con la sanidad pública
- Rotunda oposición a la implantación del Copago-Repago Sanitario
 - ▶ Integración y desarrollo de las unidades de atención al paciente terminal y unidades del dolor en el SAS
 - ▶ Ampliación del catálogo de coberturas sanitarias que incluya óptica, ortopedia y salud bucodental
- Orientar el sistema sanitario hacia el ciudadano. Cambiar los modelos gestión basados en la orientación neoliberal en otros basados en la cooperación, coordinación y democráticos.
 - ▶ Es necesaria una gestión transparente, con sistemas de información accesibles
 - ▶ Planificación y evaluación pública del uso de tecnologías y medicamentos respondiendo a criterios de coste-efectividad
 - ▶ Evaluación pública de los resultados
 - ▶ Desarrollar la centralización de compras para abaratar costes.
 - ▶ Coordinación de servicios, entre los distintos niveles y con el sistema de servicios sociales
- Supresión de las unidades de Gestión Clínicas del SAS y su sustitución por otro modelo de unidades asistenciales que se alejen de la mercantilización, del modelo de gestión empresarial, de la privatización encubierta y de la desregularización de los derechos laborales
- Instauración de una real participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, incorporando la sociedad en la planificación y gestión, creando consejos de salud en las zonas básicas y hospitales. Impulsaremos planes de salud de carácter municipal. Crear instrumentos de participación de las asociaciones de afectados y familiares.
- La investigación y la formación pública de los profesionales como eje de creación de empleo. Modular esfuerzos hacia objetivos socialmente relevantes. La investigación como eje generador de empleo y de conocimiento.
- Estudiar mecanismos de compensación /revisión de tarifas, del gasto soportado por los servicios de salud, asegurando el 100% de su cumplimiento en concepto de atención sanitaria.
- Una nueva política farmacéutica. La reestructuración debe ser global disminuyendo la influencia de la industria farmacéutica en las decisiones sanitarias, restando sus cuantiosos

beneficios y ganado independencia. Es una oportunidad de ahorro, además de una fuente generadora de empleo y conocimiento

- ▶ Completar la implantación de medicamentos genéricos a todos los niveles.
 - ▶ Uso racional del medicamento
 - ▶ Eliminación del registro de medicamentos inútiles o injustificadamente caros.
 - ▶ Gratuidad a personas sin recursos
 - ▶ Distribución y dispensación de los medicamentos en los centros públicos, tanto en los centros de salud como en hospitales (Farmacia pública).
 - ▶ Propuesta de largo alcance: Fabricación por parte de la administración pública de medicamentos esenciales (farmacéutica pública)
- Regular la objeción de conciencia en el SAS, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente.
 - Financiación adicional de la sanidad para garantizar la sostenibilidad del sistema
 - Universalidad de la sanidad como prestación no contributiva y derecho subjetivo ciudadano

UN SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL

LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Los impactos más negativos y dramáticos de la crisis y de las políticas drásticas de recorte se ponen de manifiesto en la brutal destrucción de empleo que está viviendo nuestro país, y que nos ha llevado a que actualmente haya en España 5,3 millones de personas en desempleo, 1,2 millones en Andalucía, lo que representa una tasa de paro del 22,85% y del 31,23% respectivamente. El drama de querer trabajar y no poder hacerlo lo están sufriendo con mayor intensidad las personas jóvenes, cuya tasa de paro supera de manera alarmante el 55%. A todo esto hay que sumar que conforme se alarga la crisis se eleva el número de personas que quedan sometidas al desempleo de larga duración, situándose al borde de la exclusión social. Exclusión que se hace patente en el crecimiento del número de hogares con todos sus miembros en paro, situación por la que en estos momentos pasan 1.575.000 hogares en España, de ellos, 401.000 en Andalucía. En más de un tercio de ellos ya no entra ningún ingreso, ni del trabajo ni de las prestaciones sociales.

Por ello es **urgente un gran Pacto por el Empleo y Contra la Pobreza, entre todas las fuerzas progresistas.**

Este pacto social significa articular desde abajo un tejido social de defensa contra la pobreza y el desempleo, con los sindicatos, las asociaciones de parados, Cáritas, Cruz Roja,...con el fin de cubrir las necesidades mínimas de todas las familias andaluzas, y **con la partición económica y administrativa de la Junta de Andalucía y de las Corporaciones Locales.** El objetivo principal es que todas las familias andaluzas, ante el drama de la crisis, tengan cubierto los niveles mínimos de subsistencia, entre ellos la vivienda, y además contribuir a la búsqueda de empleo, creación de nichos de empleo y formación profesional

INSTRUMENTOS PARA LA COHESIÓN SOCIAL: RENTA BÁSICA Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

La virulencia de la actual crisis, en una Andalucía que supera el 1.200.000 desempleados, está poniendo a prueba la resistencia incluso de los dispositivos de protección al desempleo. Esta situación cruel e injusta nos conduce de manera imperiosa y urgente a contar con sistemas de rentas mínimas de amplia cobertura y de relevante dotación presupuestaria. Para ello, proponemos:

- Exigir el compromiso del Gobierno del Estado para que garantice la cobertura económica a todas las personas desempleadas mientras no encuentren empleo, ya que en Andalucía más de medio millón de las personas que sufren el paro, carecen de protección económica alguna. Extensión y ampliación autonómica de los 420 euros de ayuda a los desempleados/as con mayores necesidades sociales. Asimismo es preciso que este compromiso incluya el mantenimiento del sistema de protección especial por desempleo para los trabajadores y trabajadoras eventuales agrarios.
- Conocedores de las dificultades de inclusión laboral y con la finalidad de garantizar la cobertura de necesidades básicas, se propone la concesión del salario social a quien no tenga otros ingresos, mediante programas específicos que faciliten la integración social de estas personas como medida compensatoria de redistribución de renta para posibilitar la subsistencia de las personas paradas en edad de trabajar que por no haber cotizado a la Seguridad Social o haber agotado la prestación por desocupación no reciban ésta y no hayan conseguido ninguna ocupación en el mercado de trabajo. Como contraprestación deberían realizar labores socialmente útiles, bien con la realización directa de servicios sociales comunitarios, bien formándose para adquirir habilidades socialmente útiles.
- En la Legislatura, cumplir con el mandato estatutario (artículo 23.1) y establecer por Ley una Renta Básica de Ciudadanía, como derecho subjetivo que garantice unas condiciones de vida digna a toda la ciudadanía andaluza.

En IULV-CA somos conscientes de que ninguna de las políticas, planes, medidas y propuestas, anteriormente señaladas, serán posible sin el compromiso con los profesionales públicos, por ello realizaremos cuantos esfuerzos sean necesarios para la regulación de sus funciones profesionales en diálogo y acuerdo con los colegios profesionales y sindicatos e impulsaremos la formación y la dignificación de su función profesional.

En este mismo plano y considerando situaciones extremas como es la vivienda, desde IULV-CA se propone la toma de medidas urgentes para proteger a familias sobre todo con menores en la calle, en situación de quiebra económica y con gran riesgo de exclusión social.

SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES

Garantizar un Sistema Público Andaluz de Servicios Sociales como referente fundamental para el desarrollo de la protección e inclusión social de las andaluzas y los andaluces, a través de una Nueva Ley actualizada que contemple los derechos subjetivos de la ciudadanía. Con una financiación suficiente y adecuada como garantía para el cumplimiento de los derechos descritos. Potenciando la red andaluza de centros y los vínculos con los otros sistemas públicos (Seguridad Social, Educación y Salud).

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el Título I de Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas, contempla además, los principios rectores de las políticas públicas, así como, las garantías. Si se hubiera dado cumplimiento a todos y cada uno de los derechos-deberes descritos en el texto, con el correspondiente desarrollo normativo, se podrían haber evitado muchas de las situaciones de desigualdad y exclusión que en estos momentos encontramos en la sociedad andaluza.

El Sistema Andaluz de Servicios Sociales (Comunitarios y Especializados) precisa de una nueva Ley, adaptada a los tiempos y la sociedad. La existente ha quedado totalmente obsoleta. Analizando la heterogeneidad territorial andaluza como base para la configuración del Sistema, la precariedad de la red de centros debido a una financiación insuficiente y la puesta en marcha de procesos de privatización y delegación de competencias que deben ser responsabilidad pública, todo esto está contribuyendo a la gran fractura social que tenemos en nuestra Comunidad

Los servicios sociales deben perseguir la transformación social a través de la inclusión, la garantía de derechos de ciudadanía y la convivencia.

Las personas jóvenes, el colectivo de inmigrantes, nuestros mayores, las personas en situación de dependencia y aquellas con discapacidad y enfermedad mental, son colectivos especialmente vulnerables, que requieren una especial atención y están siendo doblemente castigados por las políticas neoliberales, por su condición de ciudadanos y por las desiguales condiciones de las que parten.

Las actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de Servicios sociales han dado como resultado para nuestra Comunidad las siguientes carencias e insuficiencias:

- Graves problemas en cuanto a financiación, ya que no está adecuadamente garantizada.
- Marco legal desfasado, que no responde a la realidad social actual en Andalucía.
- Falta de mecanismos de coordinación entre los servicios sociales comunitarios y otras estructuras, especialmente sanidad, educación y justicia
- Baja dotación de las estructuras comarcalizadas y mancomunadas tanto en servicios sociales comunitarios como servicios sociales especializados.
- Procesos de externalización y privatización de servicios.
- Lentitud en la aplicación de la Ley de Dependencia con excesiva burocratización de los procesos.
- Políticas centradas en el asistencialismo y con escasa participación de la ciudadanía.
- Falta de participación de los profesionales en el diseño y evaluación de las políticas.

Frente a esta situación debemos garantizar que los servicios sociales públicos sean la referencia para el desarrollo de la protección social, que no debe verse interferido por una privatización de servicios, destructiva para la cobertura universal de las necesidades sociales. Para ello IULV CA desarrollará las estrategias y planes necesarios para la correcta:

- Articulación de mecanismos jurídicos y administrativos que mejoren la coordinación entre administraciones y supriman duplicidades
- Reversión del proceso de privatización y externalización que los Servicios Sociales están padeciendo.
- Garantía de servicios sociales públicos, universales y descentralizados, de responsabilidad pública a través de la promulgación de una nueva ley.
- Elaboración de carta de derechos subjetivos de ciudadanía garantizados jurídicamente.
- Desarrollo normativo de lo establecido en el Estatuto de Autonomía
- Configuración del Mapa de Servicios Sociales Comunitarios, estableciendo ratios de habitantes por UTS, ZTS
- Regulación de un nuevo marco competencial y organizativo de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios
- Renovación de unos servicios sociales que pasen del modelo asistencialista al fortalecimiento comunitario y al empoderamiento de la comunidad.

Para transformar los servicios sociales actualmente existentes, y evitar que sean un mecanismo funcional al sistema capitalista, que favorece la existencia de un ejército de reserva de excluidos sociales, reivindicamos unos servicios sociales participativos y bien gestionados desde lo público sobre la base de:

- Aumento del gasto social hasta equipararlo con la media europea, es decir, el 7% PIB.

- Nueva Ley Andaluza de Servicios Sociales que ayude a consolidar el Estado del Bienestar, contando con los recursos y medios adecuados, una mejor coordinación con los gobiernos locales y desarrollando un modelo de intervención integral comunitaria que comprenda no sólo a la ciudadanía andaluza sino a todos aquellos residentes en el territorio con independencia de la situación administrativa en la que se encuentren.
- Carta de derechos sociales que garantice su instrumentación jurídica para que sean derechos subjetivos, exigibles por la ciudadanía.
- Los servicios sociales deben luchar contra la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva preventiva creando redes entre administraciones y colectivos y potenciando mecanismos de coordinación entre administraciones.

Desde IULV CA estamos dispuestos a transformar los servicios sociales actualmente existentes, para que no sean un mecanismo funcional, asistencialista y controlador de la pobreza, reflejo de modelos anclados en pasadas beneficencias a través de las siguientes propuestas:

- Modernización y simplificación de los procesos administrativos del Sistema.
- Inclusión del Sistema Andaluz de promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia dentro del Sistema Público andaluz de Servicios Sociales.
- Elaboración de nuevo Plan Andaluz para la Inclusión Social.
- Apoyo a la autonomía de las personas con diversidad funcional como apuesta radical por la autonomía personal. Especial atención a las personas con discapacidad y enfermedad mental, creando planes específicos para atender sus necesidades.
- Promulgación de normativa de actuación en materia de personas mayores y personas con discapacidad en situación de riesgo social.
- Reordenación y mejora de los procesos de atención a menores en riesgo, garantizando su atención inmediata en situaciones de emergencia.
- Impulso desde los servicios sociales a la mejora de las políticas en materia de vivienda, como elemento vital en la inclusión de las personas andaluzas.
- Elaboración de un plan transversal de empleo para colectivos en situación de riesgo social, con la colaboración de los servicios sociales.
- Creación de Entidad Pública Andaluza de Servicios Sociales como organismo garante de la formación permanente, de homogeneidad en la práctica profesional, la promoción y canalización de la investigación, las buenas prácticas y la interdisciplinariedad en el marco de los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados.
- Ampliación de la red Andaluza de Residencias públicas, viviendas tuteladas y Centros de Día para mayores y revisión de la aportación de los ciudadanos.
- Refuerzo de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia y a niñas y niños para erradicar el modelo patriarcal de cuidados, centrados en la mujer y apuesta por los servicios de apoyo para conciliar la vida laboral y familiar.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

La promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha supuesto un importantísimo avance para las personas que necesitan ayuda para su desenvolvimiento. El proceso de creación de dicha ley contó en todo momento con el apoyo de IU porque considerábamos que se trataba

de una ley fundamental para la ciudadanía, especialmente para las personas mayores y las personas con discapacidad.

Desgraciadamente, una vez más, las políticas neoliberales se han cebado con los colectivos con mayor vulnerabilidad. Los recortes han supuesto un frenazo para un sistema, el SAAD (sistema de atención a la dependencia) que acababa de nacer y que, además de mejorar la atención a estos colectivos y sus familias ha conseguido crear un importantísimo yacimiento de empleo.

Por ello, desde IU LV-CA actuaremos para que se cumpla íntegramente lo establecido en dicha ley y revisaremos algunos de los puntos negros del sistema, con tal fin proponemos:

- La integración del sistema andaluz de atención a la dependencia en el sistema andaluz de servicios sociales a través de disposiciones normativas.
- El cumplimiento del calendario de la Ley de Dependencia en relación con la atención a las personas con grado I nivel 2, que tendrían que estar recibiendo atención desde el 1 de enero de este año y han quedado sin atender por culpa de la moratoria establecida por el gobierno del Partido Popular
- La revisión de la aportación de las personas que acuden a Unidades de Estancia Diurna y Centros Ocupacionales.
- La ampliación de la red residencial para personas en situación de dependencia, claramente insuficiente en relación con las demandas.
- La mejora de los procedimientos administrativos para que la tramitación sea mucho más ágil.
- Mejoras en el seguimiento de los recursos prescritos en pro de un mayor y mejor ajuste en la atención a la persona dependiente.
- El establecimiento de procedimientos de urgencia y emergencia, en los casos que así se determinen.
- La puesta en marcha de los servicios de promoción de la autonomía.
- La mejora de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en la atención, especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y centros varios, para ello es fundamental la aplicación de los servicios desde lo público, por lo que es necesario revertir los procesos privatizadores.
- La mejora de los servicios dirigidos a personas con enfermedad mental.
- El establecimiento de un protocolo de coordinación a nivel andaluz con el Servicio Andaluz de Salud.
- Buscar la solución más adecuada e inmediata con los estamentos judiciales para situaciones de incapacitación y tutela.

Desde IU pondremos en marcha dispositivos de evaluación permanente que mejoren la calidad del sistema andaluz, contando con los ciudadanos, los profesionales implicados, así como aquellas Asociaciones o grupos organizados vinculados con los colectivos dependientes.

TERCER SECTOR Y VOLUNTARIADO

- Aumentar el grado de reconocimiento del TSAS (Tercer Sector de Acción Social) y asegurar su participación activa y significativa en la Gobernanza sociopolítica, bajo la premisa de que el TSAS es un actor fundamental e irremplazable para la sociedad en la concepción, seguimiento y diseño de las políticas públicas.
- Promocionar la acción voluntaria organizada entre la ciudadanía y garantizar la atención social de los colectivos a través de las personas voluntarias y el personal contratado de las organizaciones del TSAS, tanto en Andalucía como en los países en desarrollo a través de la cooperación, estableciendo un sistema de financiación transparente, justo, suficiente y coherente que dé lugar a un marco de intervención de calidad, generador de igualdad de oportunidades.

PROPUESTAS PARA QUE LA VIVIENDA SEA UN DERECHO

Una de las luchas concretas en las que se expresa las contradicciones del capitalismo actual es la que reivindica el derecho efectivo a la vivienda. Una lucha, que en los últimos meses, se ha puesto de manifiesto a través de la desobediencia civil y de colectivos ciudadanos organizados con el objetivo de frenar la ejecución de desahucios.

La realidad andaluza muestra los siguientes parámetros:

- Incremento del 59,3% de los desahucios en el año 2011
- En Andalucía existen 621.128 viviendas vacías
- El endeudamiento privado tiene distintos tratamientos políticos

En este contexto se hace necesario poner de manifiesto que:

- Los espacios de encuentro, debate y movilización que identifiquen los desmanes del capitalismo y los combata
- El derecho a la vivienda recogido en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- Los mecanismos de la democracia en defensa del derecho a la vivienda.

Por ello desde IULV-CA nos comprometemos a poner en práctica, no sólo, una declaración de intenciones, si no la disposición a plantear medidas concretas para:

- Defensa y apoyo a las familias acosadas por el poder financiero.
- Parque público de viviendas en alquiler acorde con los ingresos del demandante.
- Banca Pública, Social y Ética al servicio del derecho a la vivienda

Ello significa que trabajaremos en la línea de conseguir para la ciudadanía los siguientes objetivos programáticos:

- Participación ciudadana en las decisiones cruciales para la sociedad como puede ser la política de vivienda
- Frente a la especulación situar la política de vivienda al servicio de las personas
- Dación en pago de la vivienda para saldar el préstamo hipotecario
- Protección de las personas y familias en situación de quiebra económica.
- Incorporar las viviendas vacías al parque de viviendas ocupadas mediante impuestos y sanciones.
- Construcción pública de viviendas en régimen de alquiler y/o propiedad
- Apoyo institucional a la construcción en régimen de cooperativa
- Plan de Seguridad Pública que establezca directrices y políticas a desarrollar a partir de la previsión de riesgos, las actuaciones y los medios en materia de seguridad ciudadana, emergencias y seguridad vial.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON ACCESO GRATUITO, ÁGIL Y DE CALIDAD

Corresponde a la Junta de Andalucía garantizar la calidad de los servicios de la administración de justicia, la atención a las víctimas y el acceso a la justicia gratuita.

Existe un distanciamiento progresivo de la Justicia respecto a la ciudadanía que se concreta en la opacidad y las dificultades que tienen los ciudadanos y ciudadanas para disponer de información y poder acceder a ella de forma directa, sin tener que contratar a un procurador o un abogado. Un problema añadido es la demora en los procedimientos, por lo que se hace imprescindible desarrollar mejoras en materia de competencias, en demarcaciones judiciales, en la ejecución de la legislación Estatal (Artículo 80 de la norma estatutaria) y, a la vez, desarrollar acciones encaminadas a:

- Establecer por **Ley una Carta de Derechos de la Ciudadanía** que vaya más allá de la mera declaración de intenciones, dotándola de derechos con eficacia jurídica y permitiendo al ciudadano o ciudadana exigir la oportuna responsabilidad, en caso de infracción de tales derechos.
- Extender la **gratuidad en el acceso a la administración de justicia** y ningún caso circunstancias sociales o económicas pueden impedir el ejercicio de derechos básicos, y desde luego lo es el acceso a la justicia en un Estado de Derecho, para lo que habrá de contar con suficiente consignación presupuestaria.
- **Constitución del Consejo de Justicia de Andalucía** y el desarrollo normativo preciso, de forma que se garantice el gobierno democrático del poder judicial en nuestra Comunidad Autónoma.
- Adaptar la demarcación judicial a las necesidades reales de nuestra Comunidad, lo que conlleva la **dotación y cobertura de las suficientes plazas judiciales**.
- Dotar asignaciones presupuestarias suficientes para no dilatar en el tiempo las actuaciones judiciales

Proponemos democratizar la Justicia y transformar su Administración en un servicio público transparente, ágil y de calidad, cercano al ciudadano. Tenemos que alertar sobre los planes de privatización y liquidación del derecho constitucional a la “justicia gratuita” que se suministra a través del Turno de Oficio.

El desarrollo de los mecanismos para el disfrute de la justicia gratuita y simplificación de los trámites para su concesión, con la finalidad de que no se prive del derecho fundamental a la tutela judicial a ningún ciudadano y para ello desarrollaremos las siguientes propuestas:

- Garantizar la atención a las víctimas de todo tipo de delitos, trascendiendo la meramente jurídica, para lo que han de establecerse en las propias sedes de los juzgados y tribunales unidades específicas de equipos multidisciplinarios.
- Garantizar la mas amplia participación ciudadana en la justicia,, lo que va más allá de la institución del jurado (artículo 154 del Estatuto de Autonomía), por lo que ha de constituirse un Consejo de Justicia integrado por profesionales de ese ámbito, no es descabellada la constitución de otros consejos, con las facultades que la ley permita, integrados por los usuarios de esta Administración.
- Desarrollar la justicia de paz y proximidad, lo que conlleva una posición firme de exigencia de las oportunas reformas legales que hagan efectiva esta figura.
- Establecer procedimientos de mediación y conciliación en la resolución de conflictos en las materias de su competencia (artículo 150.2 del Estatuto), salvando las prescripciones

legales que impiden a la Administración transigir sobre sus derechos, como posible vía de solución de los conflictos mantenidos por la ciudadanía con las Administraciones andaluzas.

- Agilizar las actuaciones judiciales, especialmente, en estos momentos de tanto impacto sobre el empleo, en los Juzgados de lo Social.

PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Abordar un modelo de seguridad ciudadana desde la izquierda conlleva, por definición, su carácter integral, es decir, la búsqueda de un equilibrio entre el derecho a la seguridad colectiva y el derecho a la libertad de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, la actuación sobre las causas sociales que generan la delincuencia y la inseguridad ciudadana y no sólo sobre las consecuencias. No pueden existir políticas de seguridad eficaces si no se erradica la pobreza, el paro, la xenofobia y la exclusión social, mediante políticas integrales de empleo y protección social.

En los últimos años, nuevos fenómenos y realidades sociales emergen en una sociedad cada vez más compleja fruto de su propio desarrollo y que viene determinado por:

- El incremento de detenidos en las prisiones no reduce el número de delitos
- Los principios neoliberales y su modelo económico dificultan la inclusión social
- La evolución contradictoria de la sociedad dificultan acciones reactivas y preventivas

La creciente desigualdad de rentas propicia espacios para el desarrollo de la delincuencia a escala global y local, y la aparición de nuevas conductas delictivas, unas vinculadas a la criminalidad económica y financiera (blanqueo de dinero, tráfico de drogas y armas, redes de corrupción...) y otras a la irrupción de algunas mafias y bandas criminales y de delincuencia internacionales, con nuevas tipologías en sus métodos de actuación y mucho más violentas. Hay, sin embargo, otros comportamientos delictivos, de carácter creciente, que forman parte de la evolución contradictoria de la sociedad y que precisan acciones reactivas y preventivas sustentadas en:

- Las políticas transversales de inclusión social y de prevención para unos servicios públicos de calidad y reducción de los factores de riesgo
- La política de vivienda social y la acción integral en los barrios de riesgo
- La estrategia preventiva que aborde la educación y la formación

Estas acciones deben ser complementarias a las imprescindibles acciones policiales y a la justicia penal. La acción policial y penal no es incompatible con acciones preventivas.

La experiencia europea nos dice que el incremento de detenidos en las prisiones no ha hecho reducir el número de hechos delictivos, por eso son precisas políticas públicas transversales de inclusión social y de prevención, unos servicios públicos de calidad y la reducción de los factores de riesgo. Trabajar, sin embargo, la inseguridad ciudadana solo desde la prevención de los factores de riesgo sería no solamente insuficiente sino también un error. Por ello, son imprescindibles unos cuerpos policiales próximos al territorio y a la ciudadanía y con la formación básica y especializada por hacer frente con profesionalidad y eficiencia de las diferentes expresiones delictivas que se producen.

- Avanzar hacia una ratio de 4,5 policías por cada 1.000 habitantes
- Elaboración y aplicación de un plan de carrera profesional que recoja todos los grados del escalafón de la policía, con homologación de las correspondientes titulaciones académicas

- Diseñar el modelo de seguridad ciudadana integral e integrado, que incorpore la vertiente de la Protección Civil como una materia prioritaria y se coordine con los diferentes grupos operativos: Guardia Civil, bomberos, sanitarios (emergencias), policías locales y Protección Civil. En este sentido, el objetivo es que los servicios de emergencia y de seguridad lleguen en 15 minutos ante cualquier persona que esté en situación de riesgo.
- Trabajar para la puesta en marcha del Cuerpo de Policía Autonómica.

IULV-CA apuesta por un modelo basado en la efectividad policial por encima de las especificidades corporativas, un modelo policial integrado más eficaz que contribuya a sumar esfuerzos, que favorezca la coordinación y cooperación policial y que responda a la demanda de la ciudadanía de la seguridad como un servicio público de calidad.

Y desde esa perspectiva proponemos las siguientes acciones:

- La regulación de la figura del vigilante de las discotecas y de las salas de fiesta y la comprobación de la titulación específica exigible al personal que trabaja en el sector de la Seguridad
- Impulsar la creación, la formación y la organización de voluntariado civil para llevar a cabo tareas de apoyo a los grupos actuantes y operativos en la prevención y la actuación ante las situaciones de riesgo y/o de emergencia.
- Establecer o mejorar los órganos de coordinación del Gobierno autonómico con los Ayuntamientos y el Gobierno Central.
- Plan de Seguridad Pública que establezca directrices y políticas a desarrollar a partir de la previsión de riesgos, las actuaciones y los medios en materia de seguridad ciudadana, emergencias y seguridad vial. Elaboración y aplicación de un plan de carrera profesional que recoja todos los grados del escalafón de la policía, con homologación de las correspondientes titulaciones académicas.
- Reforzar la capacidad inspectora y sancionadora que vele por el cumplimiento de la normativa y promueva la investigación de los accidentes y de los sucesos que se produzcan.
- Dar el apoyo conveniente a los municipios, para cumplir el precepto de prestar asistencia y auxilio en materia de protección civil, especialmente en los municipios de menos de 20.000 habitantes y en los que cuentan con riesgos especiales

PROPUESTAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Conceptualizar la práctica deportiva desde la óptica del acceso universal de todos los ciudadanos y ciudadanas como una de las herramientas más potentes para la integración social y la superación de desigualdades. El desarrollo de políticas deportivas tendentes a la cohesión social se subordina a la apuesta global de IULV-CA por alcanzar una sociedad en la que los servicios públicos primen en el desarrollo cotidiano de la ciudadanía.

La práctica de la actividad física deportiva debe ser considerada un elemento esencial en la elaboración de políticas públicas frente a lo que se ha venido realizando desde las distintas administraciones y que ponen de manifiesto las siguientes insuficiencias:

- La práctica deportiva ligada a la dimensión de espectáculo mediático
- Falta de coordinación en la utilización y gestión de los distintos equipamiento e infraestructuras.
- Desigualdades (municipios pequeños, ciudades) en equipamientos, infraestructuras y programas.

De ahí que debamos desposeer de la práctica deportiva toda dimensión de espectáculo mediático ligándola al desarrollo y mejora de la calidad de vida de nuestras ciudades y comarcas, como herramienta de integración social y de superación de desigualdades. Ello conlleva las siguientes tareas a desarrollar:

- Coordinar la diversidad de instrumentos de gestión generados al amparo de la regulación local y autonómica para la gestión de los distintos programas deportivos.
- Acercar a los municipios y comarcas de la Comunidad Autónoma a las ratios europeas de equipamientos por habitante. Actualmente existe un enorme diferencial de equipamientos entre las provincias andaluzas al tiempo que los planes directores de equipamientos e infraestructuras impulsados por la Conserjería de Comercio y Deporte son a todas luces insuficientes, dado que concentran la inversión en aquellas localidades que tengan la suficiencia financiera para atender porcentaje fijado en el sufragio de los equipamientos deportivos

Las siguientes propuestas programáticas sientan sus bases en el reconocimiento, por parte de IULV-CA, del deporte como bien social. No entendemos el deporte como un bien económico que vaya a dar impulso a la economía local, sino que consideramos al deporte como un recurso generador de salud y bienestar individual, y al mismo tiempo, como elemento de socialización, capaz de potenciar la integración desde distintos ámbitos y realidades. Y consecuencia proponemos:

- Apuesta por el desarrollo de equipamientos deportivos que tengan como objeto la atención a necesidades terapéuticas y no estrictamente deportivas y que permitan desarrollar programas específicos vinculados a la mejora de la salud de los ciudadanos
- Reutilización de los espacios escolares y de educación superior para la practica deportiva de base ligados a los programas de iniciación y promoción deportiva. Adecuación de los espacios deportivos singulares de nuestra comunidad autónoma dentro de los patronatos e institutos municipales de deportes permitiendo una relación fluida en la utilización de los equipamientos de titularidad autonómica con los municipios que los acogen.
- Apostar por el desarrollo de instalaciones energéticamente sostenibles y autosuficientes, garantizando la implantación de energías renovables para el calentamiento de agua caliente sanitaria y para atender las actividades deportivas de los distintos centros de la ciudad.
- Extender los programas deportivos de apoyo a las entidades deportivas de elite de la Comunidad Autónoma a aquellos equipos que participan en su máxima categoría en el ámbito autonómico y no, tan solo, en la máxima o submáxima categoría nacional
- Creación de los programas de tecnificación deportiva que permitan dar continuidad en la formación deportiva a los alumnos en formación procedentes de las escuelas deportivas municipales.
- Creación de programas de implementación deportiva de aquellas comarcas y municipios que cuentan con una menor ratio de equipamientos deportivos más allá de las órdenes de subvenciones de la Conserjería de Comercio Turismo y Deporte. Tendrá que existir en todas las localidades de menos de 5000 habitantes, al menos, un centro polivalente cubierto que permita la practica de las distintas modalidades deportivas tanto individuales como colectivas.
- Promoción de los programas andaluces de integración a través del deporte haciendo de las iniciativas que contemplen la practica deportiva como instrumento al servicio de la integración con colectivos en riesgos de exclusión; así como habilitar uno de los centros de la acción de las delegaciones provinciales de la conserjería competente
- Apuesta decidida de la Comunidad Autónoma para la creación de programas de apertura de los centros deportivos que permitan utilizar las pistas de los centros escolares y que estas se

incorporen a los espacios en uso para el deporte base. Ampliación del programa de puertas abiertas de la comunidad autónoma

- Apuesta decidida por los servicios deportivos públicos asentando la gestión de los medios deportivos de la comunidad autónoma a través de entes públicos.
- Concreción de iniciativas de cogestión de equipamientos deportivos públicos con las federaciones deportivas andaluzas, adquiriendo un papel protagonista en la gestión de equipamientos junto a la Administración Autonómica.
- Vincular a las empresas de capital andaluz o aquellas que promuevan la obra pública deportiva para nuestra comunidad al patrocinio de nuestras entidades deportivas, en especial aquellas que cuentan con una menor capacidad de generar ingresos propios.
- Transferencia de mayor capacidad de financiación a las Administraciones Locales entendiendo a estas como el espacio de la administración más idónea para atender las demandas de los ciudadanos y ciudadanas.
- Impulso, junto a los ayuntamientos, de redes de carriles bici como medio de transporte limpio y saludable
- Creación de centros de atención específica a los deportes minoritarios que permitan a través de la dotación de los equipamientos necesarios residenciar en territorio andaluz al menos un centro de tecnificación deportiva por cada modalidad deportiva en coordinador con el Consejo Superior de Deportes.
- Dotación de los equipamientos deportivos necesarios que permitan desarrollar el plan docente de las facultades de la actividad física y del deporte de las universidades públicas andaluzas en el seno de los campus universitarios.
- Reutilización de los espacios escolares y de educación superior para la práctica deportiva de base ligado a los programas iniciación y promoción deportivas.
- Adecuación de los espacios deportivos singulares de nuestra comunidad autónoma dentro de los patronatos e institutos municipales de deporte permitiendo una relación fluida de los equipamientos de titularidad autonómica con los municipios que los acogen.
- Adecuación de infraestructuras que más allá del ámbito de la movilidad permitan la promoción del ciclismo urbano haciendo de la práctica ciclista un medio de mantenimiento de un estado físico saludable.
- Aprovechamiento de todos aquellos espacios públicos que sean posibles para la práctica física deportiva no reglada.
- Desarrollo de programas de senderismo y multiaventura que permitan la difusión de las modalidades deportivas que se vinculen con los parajes naturales andaluces.
- Promoción de aprovechamientos de los escenarios naturales para las competiciones deportivas haciendo de los estuarios y ríos navegables de nuestra comunidad escenarios permanentes de competiciones deportivas conceptuando estos, en su dimensión mayoritaria como escenarios deportivos y no de recreo.
- Búsqueda de la cooperación con las entidades deportivas a través del apoyo económico para sufragar los gastos de mutualidad y pago de obligaciones federativas a la que se ven obligados para poder competir en los diferentes escalafones andaluces.
- Apuesta por la cobertura universal a través de seguros del deportista y reconocimientos facultativos de todos los participantes en los programas deportivos locales o comarcales creando la cartilla médica de nuestros deportistas.

MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PROPUESTAS PRIORITARIAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

El objetivo de IULV-CA es cambiar la tendencia de creciente consumo y esquilmación de recursos naturales, de incremento de emisiones y aumento de trabajo precario. Es necesario alcanzar un desarrollo social y ecológicamente sostenible dentro de un modelo económico concebido para atender las necesidades básicas de las personas. Para ello es fundamental garantizar la propiedad y la gestión pública de los recursos naturales estratégicos, AGUA, ENERGÍA, AIRE Y SUELO, para ponerlos al servicio del conjunto de la sociedad.

Más austeridad y suficiencia en un mundo finito y con recursos limitados es fundamental. Necesitamos decrecer en el consumo de recursos naturales (materias primas y energías) y en la emisión de residuos y gases de efecto invernadero, para poder crecer en torno a la creación y refuerzo de los servicios públicos, el empleo verde y el desarrollo humano. Por ello hay que hablar de otra contabilidad de la actividad productiva, introduciendo la *huella ecológica*, el *índice de desarrollo humano* y otros que permitan superar la visión economicista de otros indicadores.”

Diseñar un nuevo modelo de desarrollo basado en la gestión sostenible de nuestros recursos naturales, que luche contra el cambio climático y la dependencia energética exterior; fomentando las energías renovables. Un nuevo modelo productivo basado en la planificación democrática de los recursos endógenos de nuestra economía que sean generadores de empleo y riqueza diseñar una región que respete su patrimonio natural, defienda una nueva cultura del agua y de la energía y sea responsable en su gestión de residuos y contaminaciones de distinta procedencia es nuestro objetivo

Objetivos que resaltando los déficits de las políticas llevadas a cabo por el gobierno de la Junta de Andalucía se concretan en:

- Pésima gestión del ciclo integral del agua y de los residuos sólidos urbanos
- Nula participación en la gestión de los recursos naturales (agua, energía, bosques...)
- Modelo de crecimiento insostenible

Y analizando, brevemente, cada uno de los recursos naturales enumeraremos las propuestas de IULV-CA y nuestro compromiso a desarrollar políticas encaminadas a:

- Poner en valor el importante Patrimonio natural

- Modelo de desarrollo productivo basado en los recursos endógenos
- Apuesta por los yacimientos de empleo verdes

Para ello apostamos por:

- Nueva Cultura del Agua, de la Energía y del Territorio
- Gestión pública y participativa de los recursos naturales
- Protección del patrimonio natural y modelo productivo alternativo
- La gestión pública de los residuos
- Impulso de los tributos medioambientales
- Rechazo a los transgénicos
- Nueva Ley de protección animal
- Calidad del aire, contaminación atmosférica y lumínica
- Participación y educación ambiental

LA POLÍTICA ENERGÉTICA

La política energética de Andalucía es posiblemente el principal problema estructural con el que se encuentra nuestra tierra y el principal foco de incertidumbre sobre nuestra economía y sobre el modelo social y ambiental del futuro. La tasa de dependencia energética en este momento se aproxima al 83% de los consumos, centrada mayoritariamente en la importación de combustibles fósiles cuyos precios se encuentran en escalada permanente como consecuencia del incremento de los consumos y el estancamiento de la producción.

Respecto de la componente ambiental del problema, prácticamente nadie cuestiona hoy las desastrosas consecuencias que el cambio climático global tendrá sobre la salud, los sistemas naturales, los sectores socioeconómicos, el bienestar social y la economía global, especialmente sobre Andalucía, y cuya repercusión global se estima entre el 5% y el 20% del PIB mundial anual. Las cada vez más catastróficas previsiones sobre los efectos devastadores que se avecinan como consecuencia del calentamiento global y el brutal incremento de emisiones de gases con efecto invernadero en nuestra Comunidad Autónoma en los últimos años, hacen hoy más urgente que nunca un giro radical en la política energética andaluza.

Los diferentes planes y programas puestos en funcionamiento han demostrado sobradamente su incapacidad para afrontar la situación. La aprobación del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 introduce los objetivos de reducción de CO₂ a través de la sustitución progresiva de fuentes de energía por energías renovables y del aumento de la eficiencia energética. Sin embargo, no se puede afrontar la crisis climática global sin afrontar la crisis del modelo capitalista, responsable de la situación. Las nuevas fuentes de energía no pueden ser una vez más objeto de negocio privado a través de la privatización y el monopolio de los conversores energéticos. La sustitución progresiva de fuentes de energía no renovables por energías renovables debe ir acompañada de un cambio en el modelo de gestión energética. El nuevo sistema energético deberá ser de gestión pública y centralizada, a nivel de las redes y muy descentralizado a nivel de la utilización de las fuentes, del consumo y del mantenimiento. Ese es el horizonte en el que IULV-CA inserta sus propuestas programáticas.

Mención especial merece el aprovechamiento de biomasa, que está siendo objeto de políticas una vez más productivistas en las que la introducción de monocultivos prima sobre el aprovechamiento de residuos forestales y agrícolas.

El aprovechamiento de este potencial debe ser un elemento básico de desarrollo endógeno y de transferencia de rentas desde los centros urbanos, grandes consumidores energéticos, hacia los núcleos rurales. Sin embargo, la experiencia actual muestra que esta capacidad de reequilibrio territorial de la economía que poseen las ER no se manifiesta debido, esencialmente, a la cada vez mayor concentración empresarial del sector con el consiguiente aumento de su capacidad de negociación (en Andalucía cuatro grandes grupos concentran casi el 50% de la potencia instalada eólica), y el actual marco legislativo, que deja en un segundo plano a las administraciones locales respecto de los beneficios de esta actividad y que determina finalmente una escasa repercusión en términos de empleo y renta en las zonas productoras. Es por ello que proponemos un Plan energético andaluz en base a:

- **Plan Energético Andaluz** (previa realización de una ecoauditoría sobre las necesidades energéticas de la Comunidad Autónoma) tendente a la soberanía energética de los territorios. Para ello contendrá entre otros los siguientes programas:
 - ▶ Planes energéticos de eficiencia, ahorro y basados en energías renovables
 - ▶ Programa de incentivación de instalaciones energéticas de autoconsumo. Papel principal de la energía solar y minieólica.
 - ▶ Programa de ordenación de la energía eólica y de adaptación de la red de evacuación a las nuevas necesidades.
 - ▶ Programa de fomento del aprovechamiento energético de la biomasa (excluyendo en todo caso sistemas de incineración de RSU y la posibilidad de plantaciones agrícolas con ese único fin).
 - ▶ Programa de apoyo y fomento de las instalaciones mini-hidráulicas.
 - ▶ Programa de ahorro y eficiencia energética. Diseño de generación energética descentralizada y de proximidad.
 - ▶ Ley de Ordenación de la Investigación, Desarrollo, Aplicación e Implantación Territorial de las Energías Renovables en Andalucía, dirigido asimismo a propiciar la progresiva sustitución de las fuentes energéticas no renovables por las nuevas energías alternativas y a potenciar la descentralización del sistema energético andaluz, así como el autoabastecimiento.
 - ▶ Poner en marcha un programa de apoyo y fomento de la arquitectura y el urbanismo bioclimático.
 - ▶ Establecimiento de medidas fiscales que graven el consumo de energías no renovables y contaminantes, así como la disposición de incentivos fiscales al uso de las energías renovables y no contaminantes. Creación de un tributo que grave la energía en función del CO2 emitido por cada unidad de energía producida.
 - ▶ Establecer una línea de ayudas y subvenciones dirigida a impulsar actividades que utilicen o promuevan el uso de fuentes de energías renovables, del ahorro y la eficiencia energética.
 - ▶ Crear la Compañía de Ahorro Energético de Andalucía
 - ▶ Declaración de Andalucía tierra desnuclearizada.
 - ▶ Eliminar progresivamente los cupos de energías renovables para administraciones permitiendo de manera real la transición a un modelo energético no dependiente.

EL AGUA EN ANDALUCÍA

El agua en Andalucía en la actualidad no puede considerarse estructuralmente como un recurso escaso, aunque la mala gestión, la falta de actuaciones para su conservación y una distribución inadecuada de su uso nos sitúan en una coyuntura de escasez y falta de este recurso en determinados momentos y sectores. Para superar esta coyuntura no es necesario incrementar la oferta mediante obras faraónicas con un enorme coste ambiental, económico y social, sino planificar la demanda adecuándola a las circunstancias actuales y a las necesidades reales del conjunto de la sociedad, en lugar de hacerlo para el beneficio exclusivo de grandes y muy contados intereses de carácter exclusivamente económico.

Desde IULV-CA nos comprometemos a la:

- **Planificación de los Recursos Hídricos de Andalucía**, según criterios de la Nueva Cultura del Agua y el convencimiento de que el agua es un derecho humano fundamental:
 - ▶ Programa Global de Planes Integrales de recuperación y saneamiento de pequeñas cuencas y ríos de Andalucía, así como de nuestros grandes ríos por tramos, con el objetivo de planificar y gestionar de manera integral los recursos hídricos de Andalucía. Estos Planes contemplarán, al menos, acciones encaminadas al saneamiento, recuperación de riberas, rehabilitación del patrimonio histórico hidráulico, mejora de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, así como a garantizar los abastecimientos a los diferentes usos de manera racional y sostenible. Potenciar la reutilización integral de las aguas residuales tratadas.
 - ▶ Política de aguas basada en el ahorro y la eficiencia, así como en la gestión de la demanda. Garantizar mínimos universales, políticas tarifarias por tramos de consumo y renta familiar, así como presión mínima del agua
 - ▶ Promover la constitución de consorcios y/o mancomunidades para la gestión del ciclo integral del agua y la creación de empresas públicas para la gestión del servicio, rescatando el carácter público en aquellos casos en los que estén en manos privadas o mixtas. Realizar un programa de ordenación de las aguas subterráneas de Andalucía.
 - ▶ Estudio de la calidad de las aguas litorales en función de parámetros biológicos y físico-químicos, analizando además el contenido en metales pesados y otras sustancias químicas de carácter peligroso.
 - ▶ Endurecer la ley de aguas respecto de la obtención de licencias de pozos, y aumentar la vigilancia de su cumplimiento
 - ▶ Aplicar las leyes contra los miles de pozos ilegales, que extraen la riqueza hídrica de agua dulce más importante del país.
 - ▶ Establecer un Plan Renove (en forma de incentivos, ayudas, etc...) para cambiar, en zonas rurales, las fosas sépticas por fosas ecológicas homologadas.
- Apuesta política por la modificación de percepciones y actitudes sociales.
- Necesidad de políticas de comunicación y pedagogía social generalizadas, con calendarios, objetivos y evaluación de resultados.
- Explicación adecuada de las cuentas del agua, valorando correctamente los servicios ambientales de los ecosistemas y los paisajes del agua.
- Campañas de explicación pública sobre desigual distribución social de costes y beneficios de la gestión del agua.
- Condición de partida: fortalecer el compromiso político con los objetivos de la DMA, claridad de objetivos, liderazgo.

- Asumir la transversalidad de los contenidos de la política del agua y desarrollar los mecanismos de coordinación interadministrativa que esto exige.
- Constituir equipos técnicos especializados, de calidad, experimentados, con los recursos humanos suficientes y con dominio de las técnicas más adecuadas.
- Asumir el compromiso de devolución de resultados a los agentes sociales participantes e integrar los resultados de la participación en las decisiones adoptadas
- Incorporar las experiencias de los movimientos sociales en curso que más sintonizan con los objetivos y los procedimientos de la DMA, identificando y tratando adecuadamente la relación entre participación y conflicto.
- Diseñar medidas de sensibilización no sólo para la ciudadanía (el público en general) sino también de carácter interadministrativo, para concienciar y actualizar en su formación a los técnicos de los organismos públicos con competencias concurrentes sobre el agua.
- Puesta al día, mantenimiento actualizado y aplicación del Registro de Derechos de Aguas superficiales y subterráneas. .
- Aplicación del régimen concesional: revisión de concesiones y caducidad de concesiones.
- Control de extracciones: medición volumétrica (contadores y caudalímetros), programa de vigilancia y control de extracciones.
- Actuaciones referidas a otros problemas de generalizada indisciplina: vertidos, ocupación de cauces, actividades incompatibles en zona de policía.
- Incorporación en la planificación hidrológica de las determinaciones de la Ley andaluza de aguas (LEY 9/2010, de 30 de julio) en relación con los procesos de modernización de regadíos, exigiéndose que antes de iniciar cualquier proyecto de modernización se acepte por parte de los beneficiarios la renuncia a los derechos de uso de las aguas que se prevé ahorrar.
- Integración operativa de los objetivos de la planificación hidrológica y los de otras políticas sectoriales (urbanismo, turismo, energía, industria, ordenación del territorio), con especial atención a política agraria y de desarrollo rural.
- Apoyo decidido a la agricultura ecológica de Andalucía.
- Garantizar el acceso (en el caso de Andalucía, el mantenimiento de este acceso) al agua potable para toda la población, como *derecho humano*, lo que implica un reto de inversiones y financiación inconsistente con la idea de asignar tal responsabilidad a los mercados.
- Renovar profundamente el modelo de gestión pública de los servicios urbanos del agua, en el sentido de su compromiso con el buen estado de los ecosistemas acuáticos, la eficiencia, la transparencia, la participación y el control ciudadano, que garanticen los objetivos del servicio, por encima de intereses políticos o burocráticos.
- Apoyar la consolidación de la Asociación Estatal de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.
- Contabilizar correctamente los costes de los servicios del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso.
- Establecer las medidas concretas con las que sensibilizar a los usuarios sobre la necesidad de recuperar los costes, en especial los ambientales y del recurso.
- Introducir de manera efectiva la recuperación de costes a los usuarios de aguas subterráneas.

- Suprimir las ayudas indirectas a través de condonación de cánones y tarifas y, en su caso, establecer ayudas directas
- Definir regímenes de caudales ecológicos capaces no sólo de mantener el estado actual sino mejorarlo para alcanzar el buen estado de las masas de aguas.
- Adoptar los mecanismos necesarios de ajuste de las demandas a las características de estos regímenes.
- Aplicar las previsiones de información pública y resolución de alternativas en procesos de concertación que prevé la normativa.

GESTIÓN DEL GUADALQUIVIR

El debate sobre la titularidad de la Administración del Agua, tal y como se está planteando, desvía la atención de los problemas reales de la gestión del agua: la contaminación, la sobreexplotación, la falta de garantía, la ilegalidad, la concentración de un alto porcentaje de los recursos en pocas manos, los perjuicios a usuarios que se ven perjudicados por la falta de control y buen gobierno. El debate sobre las sentencias debería servir para abrir una reflexión mucho más profunda y clarificadora sobre la grave situación del agua en Andalucía.

La solución a estos problemas no reside en fortalecer una de estas administraciones en detrimento de la otra. Esta discusión puede superarse mediante la aplicación rigurosa de la Directiva Marco de Aguas que brinda la oportunidad de planificar y gestionar las aguas de forma **integrada** de todas las aguas, superficiales, subterráneas y costeras e **integradora** respecto de todas las competencias concurrentes. El conflicto de intereses acerca de la titularidad o competencia sobre las aguas siempre va existir y la única solución es **crear espacios sólidos y estables donde sea posible debatir dichos intereses y decidir con todos los actores implicados las soluciones a los conflictos.**

Propuestas:

- Mantener la unidad de gestión la Demarcación hidrográfica, que comprende toda la cuenca fluvial y aguas costeras, sean cuales sean las divisiones administrativas de este territorio.
- Llevar a cabo una planificación y gestión integradora designando los Comités de Autoridades Competentes, para la aplicación de sus normas. En él deben estar representados, de manera mucho más activa y operativa que en la actualidad, los distintos departamentos de las Administraciones públicas con competencias concurrentes sobre las aguas.
- Democratización en profundidad de los organismos de cuenca y en particular del Consejo de cuenca, en línea con lo que ya se intentó sin éxito en la fallida reforma de la Ley de Aguas de 2007.

POLÍTICA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

En cuanto a la Política de espacios naturales protegidos, hemos de diseñar Planes de Desarrollo sostenible destinados a aprovechar de modo social y ecológicamente sostenible todos sus recursos con el objetivo de elevar la calidad de vida de sus habitantes, así como poner en marcha las determinaciones de la Directiva Hábitats, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, como factor clave para frenar la pérdida de diversidad biológica.

La elaboración de estos planes ya estaba contemplada en la Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y continua estando pendiente al final de la VIII Legislatura; sometiendo los espacios protegidos a la presión de los diferentes agentes e intereses que de manera arbitraria administra la Junta de Andalucía. Desde aquella fecha, la población de los municipios integrados en los parques naturales de Andalucía ha venido demandando su elaboración y puesta en marcha, como contrapartida y complemento a las

lógicas limitaciones, cautelas y restricciones de uso deseables para la correcta conservación de los valores y recursos naturales de estos espacios.

Hasta ahora, el Gobierno Andalúz se ha contentado con un desarrollo turístico escasamente controlado en nuestros espacios naturales como falsa solución a corto plazo. Se busca que la sociedad visualice que se está haciendo una política efectiva en estos espacios, cuando la realidad es que la verdadera solución debe venir de la mano de unos Planes de Desarrollo Sostenible destinados a aprovechar de modo social y ecológicamente sostenible todos sus recursos con el objetivo de elevar la calidad de vida de sus habitantes. Unos Planes de Desarrollo Sostenible que deben sentar las bases para que en el futuro no sean necesarios nuevos “planes de subsidios” destinados a favorecer el clientelismo político y el anquilosamiento y falta de dinamismo de sus habitantes.

Una legislatura más, otro de los aspectos en los que no acaba de despegar Andalucía es en la puesta en marcha de las determinaciones de la Directiva Hábitats, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, como factor clave para frenar la pérdida de diversidad biológica.

Este es uno de los mayores problemas medioambientales a los que, con la desaparición anual de un número importante de especies florísticas y faunísticas de manera definitiva o de áreas en las que secularmente han encontrado su hábitat natural, en la actualidad nos enfrentamos en el ámbito mundial. Esta continua y progresiva desaparición de especies supone la pérdida, no sólo de un importante patrimonio natural, sino también de un volumen importante de recursos por las múltiples aplicaciones o potencialidades que estas especies poseen.

Es por ello que es prioritario llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Un nuevo Plan Forestal Andalúz ha de ser una parte sustancial del Plan de Desarrollo Sostenible de Andalucía de manera que desde la óptica de la sostenibilidad ambiental, se potencie su papel como motor de la economía rural y la generación de empleo.
 - ▶ Dentro del Plan Forestal Andalúz, se hará especial hincapié en las potencialidades ambientales y económicas derivadas del papel de los bosques como sumideros de carbono y la aplicación de instrumentos de fiscalidad ambiental asociados a mecanismos de compensación de emisiones de CO₂.
 - ▶ Recogerá un apartado específico para regular la explotación de la biomasa con destino energético, priorizando la limpieza y mantenimiento del momento, a la vez que minimizará la introducción de monocultivos con ese destino específico.
 - ▶ El Plan Forestal junto al mantenimiento del carácter público de los montes ha de ser instrumento de generación de empleo, ya que para garantizar el éxito de las políticas forestales y el cumplimiento de sus objetivos, uno de los ejes fundamentales en los que debe apoyarse es la mejora de las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las áreas forestales, ya que estos deben ser uno de los principales agentes para la conservación del monte mediante aprovechamientos sostenibles del mismo que permitan una calidad y nivel de vida suficientes para fijar a la población de estas comarcas mediante la elaboración de planes forestales comarcales.
- Desde el año 2001 se ha ido aprobando los Planes de los Parques Naturales existentes en el territorio andalúz, sin embargo no se han ido ejecutando por falta de dotaciones presupuestarias, es por ello urgente el desarrollo de instrumentos de planificación acompañados de sus correspondientes planes económicos.
- Elaborar una nueva Ley Autonómica de Espacios Naturales Protegidos que sustituya a la Ley 2/1989 y que permita:
 - ▶ Reunir el compendio de Leyes, Decretos y Órdenes asociados a la declaración y gestión de espacios naturales protegidos en Andalucía elaborados.

- ▶ Reformar la constitución y funcionamiento de las Juntas Rectoras de los ENP para dotarlas de capacidad de decisión y aprobación de los proyectos de PORN, PRUG y PDS de cada espacio natural protegido, así como el seguimiento efectivo de los mismos.
- ▶ Dar cabida a nuevas figuras de protección, como son los corredores ecológicos o los Lugares de Interés Comunitario, y cuantas emanen del cumplimiento y desarrollo de la Directiva 92/43 de Hábitats de la UE y de la ley 42/2007 del Estado Español”
- Para dotar de una mínima credibilidad a estos Planes sería, al menos, necesario estimar la inversión total necesaria, la de cada una de los programas, líneas de actuación y medidas, y la cuota de participación que correspondería en esa financiación a las diferentes administraciones y también a la iniciativa privada.
- Fomentaremos el disfrute libre de nuestros espacios naturales y nos opondremos a su “privatización” mediante operaciones de instauración de precios a cobrar por empresas privadas concesionarias para permitir el acceso a los mismos.
- Dotaremos de personal suficiente a las Oficinas Gestoras de los diferentes ENP de Andalucía, evitando así que las labores de gestión de los mismos recaiga en personal contratado a través asistencias técnicas realizadas por empresas públicas. En su defecto, se apostará por pequeñas empresas cooperativas de carácter local para prestar aquellos servicios que sea necesario externalizar en lo que a la gestión de los ENP se refiere.
- Promocionaremos empresas de carácter cooperativo dedicadas al conocimiento del medio natural –mediante visitas guiadas y otros servicios similares- de estos espacios, pero estableciendo en todo caso, salvo para áreas especialmente sensibles cuya gestión será siempre de carácter público, la voluntariedad en el uso de sus servicios.
- Nos opondremos a todas aquellas infraestructuras que supongan un alto impacto medioambiental en la red de espacios protegidos.
- Adecuación a los criterios de sostenibilidad de todos los procesos productivos y de consumo mediante planes de control de eficiencia, ahorro energético y disminución de impactos ambientales.
- Reelaborar los Planes de Desarrollo Sostenible con un nuevo diseño y criterios diferentes, mediante una metodología participativa que cuente con y priorice las opiniones de los habitantes de los municipios incluidos en los distintos espacios naturales protegidos. Con un capítulo financiero exhaustivo, establecimiento de prioridades y cronogramas precisos. Estos Planes irán dirigidos al aprovechamiento integral de los recursos de los parques, prioritariamente a través de iniciativas locales, y sus inversiones irán destinadas en su mayor parte a sentar las bases necesarias para propiciar las inversiones endógenas de carácter sostenible.
- Poner en marcha un Programa para la conservación y restauración de las zonas húmedas de Andalucía.
- Poner en marcha un Programa para la interconexión de los diferentes Espacios Naturales Protegidos y Montes Públicos de Andalucía a través de corredores ecológicos, a fin de posibilitar un mejor intercambio genético de sus especies florísticas y faunísticas.
- Impulsar la creación del Parque Natural de los Subdesiertos de Almería – Tabernas y del Espacio Natural Transfronterizo del Guadiana

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

La gestión de los residuos que se producen en nuestra Comunidad no es la adecuada. Un elevado porcentaje de los residuos sólidos urbanos (RSU) que anualmente producimos en Andalucía son aun enterrados, o simplemente abandonados de una forma incontrolada, generando así un despilfarro de recursos y convirtiéndose en focos de infecciones, riesgos

potenciales para el medio ambiente y degradación paisajística. Igualmente, Andalucía genera alrededor de 2.000.000 de toneladas de residuos industriales de los que al menos el 10% son tóxicos y peligrosos. Hasta ahora, las políticas de residuos han sido orientadas por el Gobierno Andaluz hacia una gestión de final de proceso, de final de tubería, relegando cada vez más las políticas de prevención, y por ello es necesario llevar a cabo las siguientes medidas:

- Establecer políticas destinadas a la reducción de la producción de residuos peligrosos en su origen.
- Planes de Investigación y Desarrollo encaminados tanto a conseguir el objetivo anterior como a la mejora de las técnicas de inertización, destoxificación, reutilización, recuperación, etc.
- Gestión pública de las infraestructuras de gestión de residuos industriales.
- Puesta en marcha de las infraestructuras necesarias para la gestión de los residuos peligrosos producidos en Andalucía (depósitos de seguridad, plantas de inertización, recuperación o valorización, etc.), teniendo en cuenta el principio de proximidad y sometiendo las decisiones sobre la ubicación de cada instalación a consulta, considerada absolutamente vinculante, entre los habitantes de los posibles emplazamientos, y con medidas compensatorias para las zonas receptoras de estas actuaciones, no solamente en materia medio ambiental, sino en otro tipo de cuestiones (infraestructuras, adquisición de suelo público, medidas de diversificación económica, etc.).
- La creación de empresas de reciclaje integral de residuos peligrosos, planteando la creación de una planta de reciclaje de baterías y pilas usadas.
- Puesta en marcha de infraestructuras destinadas al reciclaje y reutilización de residuos procedentes de la demolición y la construcción, reduciendo la extensión de las escombreras controladas y no controladas existentes en Andalucía y evitando la aparición de otras nuevas.
- Promover programas de I+D destinados a encontrar nuevos usos para estos residuos, una vez tratados en las instalaciones adecuadas.
- Promover la creación de plantas de tratamiento de residuos agrícolas (residuos de poda, por ejemplo) para su posterior aprovechamiento.
- Utilización de los residuos agroforestales como fuente energética en plantas de biomasa o de producción de biocombustibles, siempre que no se afecte a los ecosistemas naturales.
- Incentivar la recogida selectiva de materia orgánica con la finalidad de utilizarla como compostaje. Uso del producto para la regeneración de suelos erosionados.
- Ecotasa sobre los envases difícilmente reciclables.
- Prohibición de la incineración de residuos sólidos urbanos, así como de aquellos materiales con potencialidad de ser reciclados o cuya combustión genere residuos tóxicos.
- Elaborar un Plan Andaluz de Recuperación de Espacios Mineros, en el que se incluirán medidas de control de balsas y escombreras mineras, así como el desarrollo de planes específicos para la actuación sobre suelos degradados de cara a regenerar la cubierta vegetal de los mismos y a frenar los efectos erosivos, escorrentías descontroladas, etc. que se producen.
- Elaborar un Plan forestal de recuperación integral de la Ría de Huelva, que conlleve la instauración de un órgano de participación social que oriente sobre las actuaciones y medidas de las decisiones a tomar. Este plan ha de ir acompañado de la suficiente financiación, así como de la exigencia a empresas y administraciones para su correcta puesta en funcionamiento.

- Desarrollar actuaciones concretas en el Campo de Gibraltar, que impidan continuar con los vertidos descontrolados de los barcos y buques al mar y la recuperación del litoral.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

En lo que se refiere a la **contaminación atmosférica**, es necesario regular nuevos límites más estrictos que ofrezcan mayores garantías para la salud ciudadana y el medio ambiente. Para posibilitar la adecuación progresiva de las industrias a estos nuevos límites será necesaria la habilitación de instrumentos de apoyo técnico y financiero, por parte de las diferentes Administraciones, de modo que se garantice su total implantación del modo lo menos traumático posible para el sector empresarial y para el empleo.

Otro de los aspectos que incide directamente en la **calidad del aire** es la contaminación acústica, un importante problema ambiental y sanitario especialmente en áreas urbanas e industriales, como consecuencia, entre otros factores, de la movilidad motorizada y de determinadas actividades productivas. En este sentido hay que hacer también mención a los focos de ruido constituidos por la realización de actividades lúdico-recreativas, de manera significativa cuando éstas se desarrollan al aire libre.

Por todo ello proponemos:

- Adoptar medidas que hagan frente a la aparición de nuevas enfermedades como la SQM con la aplicación estricta del Principio de Precaución que recomienda minimizar el uso de sustancias que desencadenen reacciones alérgicas o estén bajo sospecha.
- Avanzar en la realización de estudios epidemiológicos en aquellas zonas de Andalucía donde la incidencia de determinadas enfermedades superen la media estatal.
- Garantizar la independencia de la elaboración de los estudios e informes de impacto ambiental.
- Control por Ley de la contaminación lumínica, fomentando el uso de iluminación pública (farolas y focos) eficiente.
- Apoyamos la obligatoriedad en la instalación de medidores fijos para el control de la contaminación atmosférica, en todos los núcleos urbanos, y en todas las zonas de influencia donde se desarrollen actividades enmarcadas en el Anexo I de la Ley de Calidad del Aire.
- Adaptación de la nueva normativa de la Junta de Andalucía en relación a los ruidos para que se pueda aplicar y evaluar en municipios de tamaño pequeño o mediano.

FISCALIDAD ECOLÓGICA

Para IULV-CA es necesario el impulso de los **tributos medioambientales** y no deben ser considerados como algo aislado sino como un elemento más de la necesaria reforma de la contabilidad a partir de criterios ecológicos, así como de una nueva orientación del gasto público con criterios de sostenibilidad. Y por otra parte, su finalidad principal no debe centrarse en la recaudación, sino en incentivar cambios profundos en las prácticas de producción y consumo insostenibles, para lo cual es necesario también el desarrollo de alternativas a estas prácticas.

- Desarrollaremos un cuerpo de contabilidad pública que integre las externalidades sociales y ambientales (tanto directas como remotas) que se producen en el conjunto de los sectores económicos en nuestra Comunidad Autónoma, y diseñaremos paralelamente los indicadores necesarios para apoyar ese nuevo modelo de contabilidad.
- Redefiniremos, en función de ese nuevo modelo de contabilidad pública, los objetivos, medidas y actuaciones contempladas en los diferentes planes transversales y sectoriales de la Junta de Andalucía, tanto existente como nuevo.

- Realizaremos modificaciones en la legislación autonómica de carácter económico, territorial, medioambiental, estadístico y sectorial, en aquellos aspectos necesarios para posibilitar la reorientación de la contabilidad pública y de la planificación hacia el desarrollo sostenible.
- Aprobaremos una Ley de Fiscalidad Ecológica.
- Realizaremos un estudio para evaluar las medidas necesarias de carácter normativo, formativo, de concienciación ciudadana, etc., para que los tributos ecológicos previstos en la Ley de Fiscalidad Ecológica contribuyan, además de a financiar actuaciones restauradoras, a modificar comportamientos antiecológicos

TRANSGÉNICOS

Los organismos modificados genéticamente y, formando parte de éstos, los alimentos **transgénicos** es uno de los temas de carácter ambiental y socioeconómico que más debate y polémica están suscitando en la actualidad. Es patente la extensión progresiva de este debate al conjunto de la sociedad, debido a la preocupación que suscitan la opacidad informativa así como a los efectos negativos que en el ámbito rural está suscitando la comercialización de semillas transgénicas.

A este respecto la política de IULV-CA es clara en cuanto a la necesidad irrenunciable de exigir el establecimiento de un eficiente control social antes de la comercialización de organismos manipulados genéticamente en el sentido de demostrar la inocuidad y compatibilidad de los nuevos organismos transgénicos, así como de proceder a su etiquetado correcto e idóneo: en definitiva la aplicación estricta del principio de precaución en el tema de los transgénicos, y para ello:

Impulsaremos desde Andalucía la revisión de la normativa española relativa a la experimentación con organismos genéticamente modificados, con la finalidad de minimizar riesgos imprevistos contra el medio ambiente y de satisfacer las demandas de un mayor control y seguimiento de los mismos.

Estableceremos una moratoria en Andalucía sobre la liberación de nuevos cultivos transgénicos hasta que dicha revisión normativa no sea realizada.

Impulsaremos la declaración de Andalucía como territorio libre de transgénicos

NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

La Ley de Protección de los Animales vigente en Andalucía, al ser una ley de mínimos dedicada casi exclusivamente a los animales de compañía, resulta una Ley insuficiente y que, de ningún modo supone que la protección y defensa de los animales en Andalucía tenga una cobertura legal suficiente. A lo anterior hay que unir que la Ley de la Flora y la Fauna Silvestres es en realidad una normativa orientada especialmente a satisfacer la demanda de cazadores y pescadores. Presentaremos de nuevo una la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, a fin de establecer unas normas generales de protección y para la regulación específica que vaya más allá de la dirigida los animales domésticos y de compañía.

- Regulación de las actividades agropecuarias para limitar al máximo, en la medida de lo posible, el sufrimiento animal.
- Erradicación de los métodos inhumanos que se emplean en la cría de ganado y en las explotaciones avícolas, tales como la alimentación forzada, el crecimiento en encierro permanente, la inmovilidad o los mataderos irrespetuosos con las normas de abatir animales.
- Oposición, como norma general, a los espectáculos que suponen crueldad con los animales. Potenciar la creación de asociaciones en defensa de los animales.
- Regulación del transporte de animales para que se realice en condiciones que no supongan un maltrato para los mismos.

- Regulación de las instalaciones destinadas a alojamiento de los animales, ya sean silvestres, de compañía o de carácter comercial, para proporcionar a los mismos un espacio adecuado para su desenvolvimiento en función de sus características biológicas.
- Nueva regulación de la experimentación con animales, priorizando en la experimentación el uso de cultivos celulares y el uso de invertebrados sobre la utilización de mamíferos (relegando el uso de vertebrados a las investigaciones de probada utilidad social en los que su sustitución no es posible).
- Establecimiento del Documento de Identificación del Buen ciudadano canino que permita a los animales que lo porten permanecer en lugares comunes, medios de transporte, etc.
- Eliminación de subvenciones y ayudas directas al mundo de la tauromaquia.
- Prohibición de la comercialización de animales exóticos (peligrosos para la fauna y flora autóctona).
- Mejora de las condiciones de crianza de animales para consumo humano.
- Consensuar una ley de base autonómica con los derechos y deberes de los ciudadanos y entidades implicadas en la convivencia de propietarios, perros y su entorno

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

La solución a los problemas ambientales depende en gran medida de la actuación de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, rara vez se les consulta sobre las actuaciones y programas a desarrollar.

Las escasas comisiones de participación creadas han sido vaciadas de representación social y competencias. Desde IU LV-CA nos comprometemos a crear, impulsar y democratizar estas comisiones que enriquecen los diseños de las políticas ambientales, con competencias y reglamentos propios, tanto en el ámbito local, como en el comarcal y regional.

Por ello, entendemos que una línea estratégica de la acción ambiental la constituye la Educación Ambiental, entendida ésta de una forma integral y dirigida a todos los sectores de la población, tanto desde la educación formal como no formal. La educación medioambiental y los criterios de desarrollo sostenible debe incluirse como materia transversal en todos los diseños curriculares de las asignaturas de primaria y secundaria.

Para esta acción es necesario coordinar los esfuerzos de las distintas administraciones de manera que se oriente y coordine las distintas campañas, priorizando las actuaciones más urgentes y trabajando en colaboración con los sectores más dinámicos de los movimientos sociales.

Por otra parte desde IULV-CA se reconoce el esfuerzo con el que los promotores del Colegio Profesional de Ambientólogos de Andalucía han reclamado la creación de éste, y conocedores de la resolución de 24 de octubre de 2011, de la DG de Oficina Judicial y Cooperación por el que se aprueba el Anteproyecto de Ley de creación, así como de la finalización de los trámites administrativos necesarios, nos comprometemos a impulsar desde las instituciones la creación del Colegio Oficial de Ambientólogos

PROPUESTAS PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Constituir la ordenación del territorio como piedra angular sobre la que construir una Andalucía de futuro más equilibrada, solidaria y social que, en contra de los dictados del mercado, cambie de forma radical las tendencias actuales. La utilización racional del territorio, su planificación y la participación de la sociedad en la toma de decisiones, que sobre el mismo, adopten los poderes públicos ha de ser realizada desde una concepción global y diversificada, otorgando una clara prelación a la planificación territorial, por su carácter integral, sobre la sectorial.

Las políticas practicadas, hasta hora, por el gobierno andaluz se han caracterizado por;

- Demora en la aprobación de los instrumentos de planificación territorial
- Pasividad ante la destrucción de los recursos naturales y el territorio por operaciones especulativas.
- Desarrollo territorial desequilibrado y desigual, ordenación en función de los intereses del neoliberalismo y el capital trasnacional en detrimento de los intereses del pueblo andaluz

Por ello, IULV-CA considera prioritario acometer en la próxima legislatura:

- Dirigir el desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de forma prioritaria a hacer frente a la especulación, a potenciar la intervención pública en suelo y vivienda, y a optimizar y limitar el crecimiento de las zonas urbanas mediante un uso eficiente y eficaz del territorio.
- Establecer unos baremos o parámetros en el desarrollo reglamentario de la LOUA, que fijen precios máximos de adquisición del suelo para los promotores y particulares, lo que podría dar como consecuencia fijar precios máximos de venta de la vivienda.
- La puesta en marcha de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, para hacer frente a los procesos especulativos e inflacionarios en curso, y materializar una intervención pública fuerte y decidida en garantía del derecho de los andaluces y andaluzas a la vivienda digna que debe traducirse en un compromiso cuantificado y concretado en el tiempo dentro de la próxima legislatura, que contemple el incremento de los objetivos cuantitativos en materia de vivienda pública, modifique la orientación actual del Plan de Vivienda y de los programas en que ésta se traduce y logre, junto a la puesta a disposición directa de viviendas para amplias capas de la población andaluza, influir en el mercado para conseguir un cambio en las tendencias de éste a corto plazo. Tales medidas deben incluir por tanto:
 - ▶ La aprobación de una nueva Ley del derecho a la Vivienda de Andalucía.
 - ▶ La revisión de las determinaciones del vigente Plan Andaluz de Vivienda y, en su caso, la aprobación de un Plan Extraordinario de Vivienda.
 - ▶ La aceleración de la creación del Patrimonio Andaluz de Suelo.
- El impulso a la planificación territorial de Andalucía basada en un modelo de desarrollo territorial ecológicamente sostenible, socialmente justo y territorialmente equilibrado, que implica:
 - ▶ La reforma de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía.
 - ▶ La adaptación al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía de los planes subregionales vigentes. Aprobación de los planes subregionales pendientes, en especial los de las aglomeraciones urbanas y áreas litorales. Aprobación de planes sectoriales y planes intermodales de transporte, en función de las directrices emanadas del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y de los correspondientes planes subregionales.

Las líneas básicas de actuación por parte de IULV-CA respecto a la ordenación del territorio se fundamentan en el concepto básico de la utilización racional del territorio, su planificación, y la participación de la sociedad en la toma de decisiones que sobre el mismo adopten los poderes públicos en base a:

- Participación de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de todos los instrumentos de Planificación y ordenación del territorio (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, PGOU, Planes Especiales), de todos los ciudadanos y ciudadanas y sus asociaciones para las

decisiones a adoptar en cada Plan, incluyendo la información relativa a la participación pública.

- La democratización de los órganos decisorios competentes, adecuándose en su composición a la realidad social de los agentes que intervengan en la organización del territorio. Es esencial la modificación de la composición de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
- El fomento de la acción pública como instrumento de control en los procesos de ejecución

IULV-CA postula una nueva organización territorial para nuestra Comunidad Autónoma fundamentada en un compromiso fuerte con la realidad comarcal que paulatinamente tiende a su consolidación como ente administrativo. Ello implica, entre otras acciones, acometer la reforma de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El planeamiento supramunicipal, siempre vinculante, debe acometerse de inmediato, potenciándose la dotación de recursos suficientes y garantes de invertir la ilógica de la actual administración autonómica de parcheo sectorial.

IULV-CA impulsará una planificación territorial basada en los siguientes criterios y actuaciones:

- Diseñar la política de ordenación del territorio con el objetivo, entre otros, de frenar, y si es posible invertir, la actual dinámica de concentración territorial de la población en el litoral y grandes ciudades. De esta manera, se mitigarían los impactos ambientales negativos que se han derivado del abandono de las áreas rurales y de la concentración en las áreas urbanas.
- Dirigir el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), en función de las estrechas relaciones existentes entre la planificación ambiental y la ordenación del territorio, a posibilitar el desarrollo de la orientación expresada en el punto anterior.
- Aprobar los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional en las áreas metropolitanas y aglomeraciones urbanas y áreas litorales que aún no cuentan con este instrumento, adaptando los ya existentes a los nuevos criterios definidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
- Desarrollar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y modificar la Ley de Ordenación del Territorio para establecer los mecanismos normativos y de gestión que garanticen de modo efectivo que el desarrollo urbano se producirá con arreglo a dichos planes y, por tanto, para impulsar la adaptación del planeamiento urbanístico municipal a los mismos.
- Garantizar la vinculación y sujeción de la planificación sectorial (aguas, transporte, espacios verdes, etc.) de las grandes ciudades y áreas metropolitanas y ciudades medias a la planificación territorial subregional elaborada en desarrollo de las directrices y criterios del POTA.
- Contemplar en los planes de ordenación territorial de las aglomeraciones de Huelva y de la bahía de Algeciras, un capítulo específico destinado a la reordenación de los espacios industriales (incluidas las áreas ocupadas por residuos de las industrias), en el que se tendrá en cuenta la relocalización de las actividades más impactantes y la recuperación estratégica e integral de espacios y suelos degradados.
- Elaborar, como Plan Económico para la Comunidad Autónoma, un Plan de Desarrollo Sostenible de Andalucía, basado en criterios ecológicos y en un nuevo modelo de reequilibrio territorial.
- Considerar en los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional una zonificación de su territorio con el objetivo de asignar a cada una de las zonas resultantes normas y directrices sobre los usos más adecuados para las mismas, así como unos límites claros para el crecimiento urbanístico admisible en función de criterios ecológicos y de desarrollo sostenible (generación de residuos, consumo de agua, pérdida de biodiversidad,

etc.), procediendo, en función de lo anterior, a diseñar y ordenar sus diferentes infraestructuras.

- Poner en marcha, donde sea necesario, las Áreas Metropolitanas en las grandes aglomeraciones urbanas de Andalucía, como marco adecuado para ordenar las múltiples relaciones de carácter supramunicipal existentes en las mismas, mediante la elaboración de planes integrales de ordenación territorial; vinculantes para el planeamiento urbanístico municipal y las políticas sectoriales, con especial atención a las infraestructuras de transporte, hidráulicas y de espacios verdes. El desarrollo urbanístico debe ir acompañado de nuevos equipamientos sociales, educativos, sanitarios, etc. Entre los objetivos básicos de estas áreas metropolitanas estarán: frenar los procesos de expansión urbana, evitar la formación de continuos urbanos, favorecer la integración de usos en el territorio, regular la implantación de usos comerciales, minimizar los desplazamientos, establecer sistemas públicos de transporte colectivo no contaminantes y de carácter intermodal, garantizar la implantación y gestión sostenible ecológica y socialmente de infraestructuras urbanas y energías, etc.
- Potenciar redes de ciudades medias en áreas de montaña, donde estas estructuras están poco o nada desarrolladas, para así dotarlas de una mayor articulación territorial interna y externa, frenar su despoblamiento y desertización y optimizar el aprovechamiento de sus recursos endógenos a través de iniciativas locales.
- Garantizar la conjunción entre la planificación de la movilidad y la planificación urbanística, introduciendo los criterios de movilidad sostenible y de accesibilidad a escala humana (desarrollo de las actividades cotidianas en entornos que reduzcan al mínimo o eliminen los desplazamientos motorizados y garantía de medios de transporte públicos colectivos y/o no contaminantes) como criterios de la planificación territorial y de la planificación urbanística municipal en función de los cuales se ordenen los usos del territorio y asentamientos.

En este sentido resulta igualmente urgente la elaboración y ejecución de Planes Multimodales de Transporte para Aglomeraciones Urbanas y Grandes Ciudades, como que éstos se produzcan en base a previos planes subregionales de ordenación territorial que garanticen que el desarrollo urbano de los municipios se producirá de modo coherente a las necesidades y objetivos de aquellos, con el fin de permitir la implantación de modelos sostenibles de movilidad, tendentes a reducir el número y la distancia de los desplazamientos mediante el incremento de la accesibilidad la cercanía.

PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN URBANA. ALQUILER SOCIAL DE LA VIVIENDA

Diseñar la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de consumir y producir diferente supone un cambio radical en la manera de organizar y ordenar los territorios. La consideración de que el suelo es un recurso limitado implica reconocer que la planificación urbanística debe perseguir el reequilibrio territorial, la conservación del medio natural y la cohesión social, generando espacios para la convivencia y la integración social y dando respuesta a las necesidades ciudadanas de infraestructura y vivienda. Todo ello, articulado desde el espacio a través de una buena red de transporte público basado en el ferrocarril, prioritariamente, y en el transporte no motorizado. Los conceptos claves son accesibilidad y ciudad compacta.

El modelo que se ha seguido, hasta ahora ha venido determinado por:

- Vivienda: objetivo especulativo frente a los objetivos sociales, económicos y ambientales
- El crecimiento desordenado del tráfico, polución
- Transporte insostenible basado en la carretera y sin búsqueda de la cohesión territorial

- Urbanismo depredador de recursos sin carácter social, destructor del entorno natural y del patrimonio histórico

Frente a esta situación, tenemos que hacer compatible, como objetivo básico, la consecución del derecho ciudadano al medio ambiente y a un modelo urbano sostenible, sano y solidario. En este sentido la actuación en el medio no debe suponer una masificación o concentración de las construcciones y los servicios, sino la desconcentración como principio equilibrador.

Por ello, nos comprometemos con que el principio de igualdad social presida la política urbanística y territorial, no entendida como homogeneidad, sino como distribución justa de las posibilidades de desarrollo social, en contraposición de la lógica dominante, hasta ahora, constituida principalmente por el ánimo de lucro. Nuestras propuestas actuarán en los tres pilares siguientes:

- Planeamiento urbano con el objeto de definir la mejor ciudad posible para las personas, partiendo de un análisis crítico de la realidad que queremos transformar.
- Política de vivienda basadas en: sostenibilidad, solidaridad, ética e igualdad
- Transporte como instrumento que debe perseguir el reequilibrio territorial, la cohesión social y los objetivos de preservación y conservación del medio natural.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y VIVIENDA

Es necesario crear un modelo alternativo al actual, en materia de **planeamiento urbanístico y vivienda** que parta de las siguientes premisas:

- La ciudad productora de recursos: energéticos, alimentarios, económicos.
- Calidad de vida: Respeto al medio natural, sus valores y su defensa frente a la contaminación y a los intereses meramente especulativos.
- Un medio ambiente urbano, que incremente los porcentajes de suelo destinado a equipamientos, zonas verdes, huertos urbanos, etc.
- Creación de redes de parques periurbanos, situados en zonas forestales con cierta degradación que puedan soportar la presión ejercida por la necesidad del esparcimiento de los ciudadanos.
- Planes de recuperación de los cascos antiguos.
- Un hábitat democrático, sin periferias marginales ni centros congestionados, en base a un planeamiento urbanístico que evite la especulación del suelo.
- Planes de erradicación del chabolismo y de los guetos de pobreza. Garantizar unos mínimos de habitabilidad y de calidad estética y constructiva.
- Evitar el despilfarro social que suponen las viviendas vacías o desocupadas. En las ciudades con problemas de suelo, incrementar y fomentar las promociones públicas de viviendas, a través de cooperativas sociales.
- Defensa y promoción de las pequeñas y medianas ciudades. Igualar las condiciones de vida de los pueblos y ciudades: aumento de infraestructuras sociales en los primeros y seguimiento del aumento de la población en grandes ciudades, junto a la creación de zonas verdes, peatonales y parques periurbanos.
- En definitiva, el suelo tiene que ser entendido como un bien social perteneciente a la comunidad y a la sociedad en su conjunto, que tiene que actuar como valor reequilibrador de las desigualdades en materia urbanística que permanecen hoy en Andalucía.

La ordenación urbanística de los municipios debe girar sobre el concepto de construcción social de la ciudad, respondiendo a los principios de planificación democrática, ya señalados, a la garantía de la más real participación ciudadana -no sólo en la elaboración de planeamiento sino también en el control público de las actuaciones sobre la ciudad, al establecimiento de mecanismos eficaces para la lucha contra la especulación, a la disponibilidad de suelo para equipamiento, a la resolución de los problemas de vivienda, etc.

Las grandes ciudades, sus áreas de influencia y las ciudades medias tienen para IU LV-CA problemas específicos que precisan soluciones concretas, debiendo fundamentar su ordenación urbanística en:

- Planeamiento realmente participado por la ciudadanía.
- Planes-programas frente a planes exclusivamente normativos.
- Impulsar siempre el logro de los siguientes objetivos:
 - ▶ Gestión del Patrimonio Público de Suelo, como elemento generador de empleo (SP industrial).
 - ▶ Equipamientos suficientes para la prestación de los servicios públicos necesarios para la población
 - ▶ Utilización de criterios de cohesión, proximidad y oferta en el diseño y planificación de las infraestructura y equipamientos
 - ▶ Adecuar el sistema urbano para evitar la sectorización, apostando por incorporar al mismo los elementos productivos que puedan desarrollarse sin comprometer el bienestar social ni ambiental de la ciudadanía
 - ▶ Establecimiento de criterios de sostenibilidad medioambiental y de objetivos sociales concretos a la hora de elaborar los planes de vivienda
 - ▶ Políticas de descentralización de los servicios públicos.
 - ▶ Dotación y cercanía de servicios e infraestructuras. Una ordenación territorial de municipio con vocación de funcionalidad y atención a las demandas
 - ▶ Gestión del Suelo Público. Elemento principal para generar empleo (SP Industrial).
 - ▶ Conexiones sostenibles y fluidas con los núcleos de empleo, potenciando medios públicos que fomenten la igualdad interterritorial de pueblos y ciudades
 - ▶ Afección de determinados suelos a usos concretos de carácter social y/o de relevancia económica (VPO e industria; especialmente).
 - ▶ Establecimiento de los criterios de crecimiento y programación en función de las necesidades existentes y demandas contrastadas.
 - ▶ Recuperación de los cascos históricos por parte de su población tradicional limitando su proceso de terciarización y estableciendo mecanismos de realojo en el barrio de pertenencia.
 - ▶ Políticas de vivienda de marcado carácter social, que se base en medidas que fomenten el alquiler y la rehabilitación antes que en la nueva construcción
 - ▶ Actuación urbanística, social y económica en las barriadas marginales, integrando las mismas dentro del tejido urbano.
 - ▶ Re-equipamiento de la ciudad tomando como base la distribución de la población y sus necesidades y déficits históricos.

- ▶ Reconocimiento de la realidad histórica de nuestros municipios, sus procesos de crecimiento, las características y tipologías singulares de sus edificaciones, la importancia de su patrimonio construido tanto monumental como ambiental, recuperando la memoria histórica de los barrios, entendiendo la ciudad como un todo orgánico y no como una desordenada yuxtaposición de usos.
- ▶ Recuperación y divulgación de los intereses arqueológicos.

La preocupación de IULV-CA por los pequeños municipios se fundamenta en los principios constitucionales y estatutarios de igualdad de los ciudadanos, que se quiebran si no se garantiza, independientemente del lugar de residencia, un nivel de equipamiento básico acorde con las necesidades de desarrollo de las personas. Al mismo tiempo hay que considerar y reconocer las diferencias sustanciales existentes en los pequeños núcleos de población, estableciendo para ellos acciones normativas, administrativas y económicas, tales como:

- Dotarlos de instrumentos de gestión urbanística más eficaces, menos complejos y más adecuados a la solución de problemas puntuales pero de gran transcendencia para el funcionamiento de la localidad, mediante el desarrollo de una normativa urbanística específica.
- Creación de un verdadero Fondo Andaluz de Cooperación Municipal, con especial apoyo a los pequeños municipios.
- Apoyar la constitución de unidades de asesoramiento.
- Fomentar las iniciativas comarcales de autoorganización.

El patrimonio arquitectónico de multitud de localidades andaluzas obliga a establecer medidas para preservarlo de los procesos de demolición y abandono, así como al establecimiento decidido de políticas de rehabilitación y mantenimiento que permitan su uso por parte de los habitantes, en el convencimiento de que la fórmula óptima de preservación de un bien es su utilización. Por ello se propone:

- Actuaciones de planeamiento integral (infraestructuras, viviendas, equipamiento y aspectos socioeconómicos) en los conjuntos históricos andaluces, con medidas de rehabilitación de su patrimonio arquitectónico, mejora de sus espacios públicos y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos.
- Programar, con especial énfasis, las actuaciones de fomento dentro de estos núcleos de forma que se posibilite el mantenimiento de su población, se continúen los usos actuales del suelo y, en su caso, se frene la terciarización.
 - ▶ Planes de infraestructuras y transporte basados en: Accesibilidad, ferrocarril y transporte no motorizado
 - ▶ Políticas de vivienda de marcado carácter social, que se base en medidas que fomenten el alquiler y la rehabilitación antes que en la nueva construcción.

LA POLÍTICA DE TRANSPORTES

La política de transportes de Izquierda Unida irá presidida por el principio de que la función del transporte es crear accesibilidad, sin generar otra movilidad que la estrictamente necesaria. Accesibilidad definida como la facilidad con la que los bienes y los servicios pueden ser alcanzados o utilizados por todas las personas. Accesibilidad que se identifica, por tanto, con proximidad. Teniendo en cuenta que en el ámbito de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo el derecho social y ecológicamente justo es el derecho a la accesibilidad. Por ello, promoverán un sistema de transporte multimodal e integral basado en los servicios de transporte público y el fomento de los desplazamientos en medios no motorizados (en bicicleta, a pie), frente a la preeminencia del automóvil. El sistema de transporte contribuirá a la reducción de la movilidad innecesaria, al equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano, al desarrollo del

sistema de ciudades medias que eviten los fenómenos de congestión urbana y, en definitiva, a alcanzar la máxima accesibilidad atenuando el tráfico y la movilidad innecesaria.

Desde el punto de vista de IULV-CA, es necesario dar un diseño diferente a las infraestructuras de transporte en Andalucía para contribuir a rentabilidad social, ecológica y territorial, partiendo de los siguientes aspectos:

- Elaborar, como marco general a partir del cual planificar todas las infraestructuras de transporte, un Plan para la configuración y consolidación de un Sistema Integrado de Transportes en Andalucía; con el propósito de racionalizar con criterios ecológicos el sistema andaluz de transportes, primando el ferrocarril como eje vertebrador y modo principal de transporte, dando carácter de complementario al resto. Este sistema estará basado en una red de centros de relación intermodal, tanto para el tráfico de mercancías como para el de pasajeros, que primará para los trayectos medios y largos el ferrocarril, como medio de transporte más eficiente desde un punto de vista social y ecológico.
- En el marco del Sistema Integrado de Transportes de Andalucía, potenciaremos la relación intermodal entre transportes urbanos e interurbanos, con especial atención a la creación de intercambiadores en las áreas urbanas andaluzas, al objeto de facilitar el intercambio de mercancías y pasajeros, priorizando los accesos a la red ferroviaria desde los puertos de Almería, Algeciras, Cádiz, Huelva y Málaga, así como desde los Centros de Transporte de Mercancías (CTM) de las áreas metropolitanas y aglomeraciones urbanas.
- Dotación y cercanía de servicios e infraestructuras. Una ordenación territorial de municipio con vocación de funcionalidad y atención a las demandas
- Potenciar el transporte marítimo entre los puertos andaluces y de estos con el exterior. Dotación y cercanía de servicios e infraestructuras. Una ordenación territorial de municipio con vocación de funcionalidad y atención a las demandas
- Conexiones sostenibles y fluidas con los núcleos de empleo, potenciando medios públicos que fomenten la igualdad interterritorial de pueblos y ciudades
- Realizar las actuaciones necesarias ante la Unión Europea y el Gobierno central para la disposición, por parte de estas administraciones, de partidas presupuestarias suficientes para realizar las inversiones necesarias para adaptar el conjunto de la red ferroviaria andaluza a la velocidad alta, para integrar ferroviariamente la mitad oriental y occidental de Andalucía, para mejorar la comunicación ferroviaria entre el oriente andaluz y la meseta y para potenciar y dotar suficientemente los sistemas de transporte de cercanías para pasajeros en las áreas metropolitanas.
- Es preciso establecer precios asequibles para todo el transporte ferroviario, incluido el de alta velocidad.
- Priorizar las actuaciones en la red secundaria de carreteras, como elemento imprescindible para el reequilibrio y cohesión territorial y social de Andalucía, y para un verdadero desarrollo sostenible de las áreas rurales. Mediante un programa, estructurado en dos cuatrienios, adaptaremos la red secundaria a las necesidades de las comarcas a las que da servicio. Realizar un estudio y trabajar para el mantenimiento de la señalización (tanto vertical como horizontal) en las carreteras secundarias, como elemento de mayor deficiencia hoy en día tras los problemas de asfaltado.
- Actuar en las carreteras de la red básica mediante un programa para la mejora de sus trazados y la circunvalación de núcleos de población
- Suprimir el peaje de la A-4 Sevilla-Cádiz.
- Potenciar, mejorar y racionalizar el transporte público por carretera al objeto de hacerlo "competitivo" y atractivo frente al uso del vehículo privado.

- Potenciar el uso de la bicicleta en áreas urbanas como medio de transporte alternativo mediante la elaboración de un Plan Director del uso de la bicicleta y la elaboración de unas directrices dirigidas a la inclusión de vías ciclistas como elemento a contemplar en el planeamiento urbanístico. Igualmente promover conexiones interurbanas.
- En cuanto a la infraestructura portuaria creemos necesario evitar la construcción de puertos deportivos y otras infraestructuras litorales en tanto no se garantice con total certeza la ausencia de impactos negativos en los planos social, medioambiental y económico

FERROCARRIL

IULV-CA es consciente de que la cuestión ferroviaria no se ha abordado desde las instancias gubernamentales con una decidida vocación de planificar a largo plazo el futuro de este medio de transporte de bajo impacto y futuro cierto. Por ello estamos decididos a ejercer las competencias más absolutas sobre el ferrocarril en Andalucía, potenciando cuantos instrumentos de carácter normativo, de implicación en el sector público, de planificación e inversión a largo plazo sean necesarios para la creación de una Red Ferroviaria de Andalucía, evitando el cierre de líneas y desmantelamiento de las infraestructuras y para ello proponemos

- Avanzar hacia un modelo único de ferrocarril, eliminando las distinciones entre ferrocarriles “de alta velocidad” y “convencionales”. Asimismo, las futuras infraestructuras ferroviarias diseñadas con criterios de mínimo impacto ambiental y bajo consumo, seguridad, calidad austeridad y articulación del territorio. Ello lleva a optar por un modelo de ferrocarril de altas prestaciones que se sitúe en el entorno de los 200 km/h, pues para velocidades superiores se dispara el coste de las inversiones, el consumo y el impacto ambiental.
- Elaborar de un nuevo Plan Estratégico Ferroviario de Andalucía, centrado en la mejora de la red actual y el apoyo a la explotación y el desarrollo de nuevos ejes ferroviarios (ferrocarril de altas prestaciones que combinen altas velocidades, transporte de pasajeros y mercancías), a fin de lograr una mejor relación y articulación interna y con el exterior del territorio andaluz, y una mejor conexión de los centros subregionales de nuestra comunidad autónoma mediante ferrocarril.
- Creación de la red ferroviaria andaluza que articule las áreas metropolitanas y la geografía andaluza interprovincial. Uno de los principales problemas de los ciudadanos en general y de los trabajadores en su acceso diario a sus centros de trabajo es la accesibilidad en las áreas metropolitanas: hacen falta redes metropolitanas de tranvías y/o metros. Además, en general hace falta un servicio ferroviario con horarios eficaces para incentivar la sustitución del coche por el transporte público ferroviario. En consecuencia, se trata de completar el mapa ferroviario andaluz dando prioridad al establecimiento de servicios ferroviarios de cercanías completos, al menos, en las zonas metropolitanas adyacentes a las capitales de provincia y ciudades mayores de 50.000 habitantes.
- Instar a al Gobierno Central a transferir, en cumplimiento del artículo 148.1.5) de la Constitución Española y del artículo 64.1.1ª de nuestro Estatuto de Autonomía, a la Comunidad Autónoma de de Andalucía, como muy tarde antes de la finalización del mes de enero de 2013, las competencias, infraestructuras y servicios de transporte ferroviario de cercanías y de carácter regional gestionados por las empresas públicas Adif y Renfe, así como los recursos humanos y financieros necesarios para su gestión y desarrollo futuro.
- Encomendar al Ente Público de Gestión de los Ferrocarriles Andaluces la gestión directa y de carácter público de la red de infraestructuras y servicios de transporte de cercanías y metros y tranvías de Andalucía.
- Proceder a la ampliación de la red ferroviaria de cercanías a otras áreas urbanas andaluzas, con especial atención a las que forman parte de la conurbación litoral de Andalucía.
- Planificar y desarrollar la conexión multimodal de la red ferroviaria andaluza con la red portuaria y aeroportuaria, así como con las áreas logísticas y las plataformas multimodales de los centros de transportes de mercancías de Andalucía, en aquellos casos en que sea

competencia exclusiva de nuestra Comunidad Autónoma, e instar al Gobierno General del Estado a hacer lo propio, para los casos en que se que excedan las competencias asignadas a Andalucía por la Constitución Española y nuestro Estatuto de Autonomía, con especial atención a la conexión interior ferroviaria andaluza y el corredor del Mediterráneo por el litoral con el Levante, así como de la zona más occidental de Andalucía con el corredor de la Vía de la Plata.

- Establecer en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, y en coordinación con las determinaciones del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA) 2007-20013, los criterios necesarios y, en su caso, las reservas de suelo necesarias, para garantizar el desarrollo del sistema ferroviario andaluz y su conexión multimodal con otros modos de transporte y con las áreas logísticas y centros de transporte de mercancías.

PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD, LA EQUIDAD Y LA DIVERSIDAD: EL PLENO DESARROLLO DE LOS DERECHOS DE LOS COLECTIVOS SOCIALES

PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Conseguir una Andalucía donde mujeres y hombres seamos iguales. Una sociedad igualitaria en lo formal y en lo real; desterrando definitivamente de nuestra sociedad la discriminación, violencia, desigualdad y explotación a la que nos sigue sometiendo el sistema capitalista y patriarcal a las mujeres.

POR UNA IGUALDAD REAL DE LAS MUJERES EN NUESTRA SOCIEDAD

Partimos en nuestro programa de que para que una sociedad sea considerada como realmente democrática y avanzada, debe ser feminista. Este componente político es imprescindible para tener una visión transversal y global de la sociedad. Conseguir una Andalucía donde mujeres y hombres seamos iguales es nuestro objetivo, por eso todas nuestras propuestas están inmersas en el desarrollo programático. Para alcanzar una sociedad igualitaria en lo formal y en lo real, es necesario el análisis de la sociedad desde la perspectiva de género, pero también, son necesarias propuestas específicas destinadas a desterrar definitivamente todo tipo de discriminación y explotación por razón de sexo.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD

Hay que reconocer que en todos los períodos de gobierno del PSOE, en concreto en Andalucía, ha existido el discurso de la igualdad en sus propuestas políticas, si bien, en la inmensa mayoría de las ocasiones, éstas no han gozado de una plasmación real en lo concreto por falta de voluntad política, presupuesto y personal propio para llevarlas a cabo.

Así hemos podido comprobar que institucionalmente, ha sido el abandono y la desidia lo que ha caracterizado a la Administración Pública, obligada a dar ejemplo de cumplimiento de sus propias normas. Nos hemos encontrado con los informes de impacto de género de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, que un año tras otro, han consistido en una serie de indicadores marcados por Consejerías, sin que los mismos estuviesen ligados a programas presupuestarios concretos.

Igualmente las Unidades de igualdad de género de los Organismos Públicos, no han tenido plasmación en las relaciones de puestos de trabajo y tampoco ha habido preocupación en que las personas que las ostentan tengan en todos los casos preparación y dedicación exclusiva en el tema.

La ley de Igualdad y la Integral de Violencia, se han quedado en el mero enunciado, ya que el mismo Parlamento andaluz, ha sido testigo de que las políticas supuestamente derivadas del desarrollo de ambas leyes, han sido realizadas en su mayoría por asociaciones y organizaciones de mujeres y, por la voluntad e interés de las empleadas y empleados públicos de la enseñanza. Excepto, el acierto en modificar la Ley Electoral Andaluza para que las listas sean cremallera, todos los órganos de decisión, administración o sectoriales, dictan mucho de que sean paritarios. La misma Junta de Andalucía reconoce que, a pesar de que en la Administración andaluza está compuesta por un 58,2 % de mujeres y un 41,8 % de hombres, los altos cargos están ocupados mayoritariamente por hombres.

El Consejo Andaluz de Participación de la Mujer, no deja de ser un órgano a imagen y semejanza de la Administración, manejada por ésta y sin posibilidad de manifestar crítica o de vincular sus opiniones a través de informes.

En cuanto al esfuerzo por integrar a las mujeres en el empleo y fomentar la empleabilidad de las mujeres se refleja en que la tasa de paro del 33,06 % a finales de 2011, casi nueve puntos por encima de la media estatal.

En cuanto a la violencia de género, las actuaciones llevadas a cabo con motivo del Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la violencia de género prácticamente se han reducido a Jornadas y a los anuncios que con motivo del 25 de Noviembre de cada año se hacen. La protección y atención a las víctimas se ha limitado al servicio telefónico y a los centros de información.

DERECHOS POLÍTICOS, DEMOCRACIA PARITARIA Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Los derechos de ciudadanía de las mujeres, son derechos políticos aún pendientes. Las oportunidades y las libertades de las mujeres están relacionadas directamente a las auténticas democracias.

La reivindicación de democracia paritaria, surge a partir de que la realidad muestra que las mujeres, aunque incorporadas a muchos de los espacios públicos, siguen sin tener una representación real en todos los ámbitos. La democracia actual es una democracia inacabada, ya que existen todavía de manera persistente patrones que excluyen a las mujeres de los centros de poder de decisión.

Por otro lado, la estructura institucional que ahora existe en Andalucía y el presupuesto con las que están dotadas las políticas de igualdad de género, demuestran la desconsideración que el actual Gobierno tiene para con las mujeres: las políticas de igualdad insertas en la Consejería también de Bienestar Social, un Instituto de la Mujer denostado y sin competencias y un presupuesto que representa tan sólo un 0,01%,...

Las políticas participativas, paritarias y transversales, son la base de nuestras propuestas. Tenemos que profundizar en la democracia institucional: los reglamentos de participación deben incorporar la obligatoriedad de la democracia directa y la democracia paritaria. La primera significa que los consejos de participación deben estar conformados exclusivamente por las organizaciones sectoriales, sin tutelas ni injerencias institucionales. Y la segunda significa que tanto los consejos como los órganos institucionales, comisiones, etc. se deben comprometer efectiva y realmente a la paridad en su representación.

Apostamos por los presupuestos participativos con perspectiva de género, ya que esta forma de hacer política, incorpora la colaboración entre las instituciones y la sociedad civil cooperando necesaria y directamente en los asuntos públicos; y significa especialmente para las mujeres la posibilidad de incidir directamente en las formas y en fondo de la política.

EMPLEO, DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LAS MUJERES

Para las mujeres, la incorporación al trabajo fuera del ámbito doméstico, significó una conquista sin precedentes. Sin embargo, las tradicionales formas de desigualdad laboral no se han

superado: mayor índice de paro, menor índice de actividad, salarios inferiores, menor promoción laboral,...

Las mujeres llevamos décadas reivindicando políticas activas de incorporación al trabajo productivo en igualdad de condiciones, sin embargo, hasta ahora, sólo se han adoptado tímidas iniciativas de incentivación empresarial para la contratación de mujeres jóvenes o mayores de 45 años, sin que ello haya ido unido al compromiso de la contratación indefinida, ni haya conseguido incidir de una forma estructural en la discriminación laboral y económica de las mujeres.

En un contexto de transformación y concienciación social es desde donde definimos nuestra forma de hacer política. Apostamos por inversión pública en infraestructuras sociales, convertir el derecho constitucional al empleo en un pilar, desarrollar medidas para acabar con la brecha salarial, con la precarización de los sectores más feminizados.

Debemos generar unos sistemas públicos de calidad que además garanticen empleos dignos. Los presupuestos públicos, al contrario de la práctica neoliberal, deben incrementarse económicamente para la consecución de objetivos sociales, protección de los sectores y colectivos más desfavorecidos y desarrollo del estado de bienestar; y dentro de estas metas están la consecución de la igualdad social, laboral y económica entre mujeres y hombres.

ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La violencia de género como mal estructural de nuestra sociedad, sigue invadiendo todos los espacios. Esta lacra patriarcal no puede ser erradicada sin que todas sus manifestaciones sean tratadas de forma integral. Así ley contra la violencia de género tiene que enfocar todos los aspectos en que ella se manifiesta: la segregación laboral, la discriminación salarial, el acoso y la explotación sexual, la infrarepresentación, la objetualización, la perpetuación de los roles sexistas.

Como parte central de nuestra acción política, debemos incidir y desarrollar, medidas y acciones preventivas, dirigidas a la erradicación de la violencia desde sus orígenes, única forma efectiva de acabar con la violencia de género en nuestra sociedad. Dichas medidas deben estar coordinadas con todas las administraciones públicas especialmente con los municipios y tienen que tener una dotación presupuestaria suficiente y preferente.

En la lucha contra la violencia de género no podemos olvidar que para desterrarla es imprescindible erradicar también el pilar fundamental que la sustenta: la desigualdad.

Es fundamental ahondar en la integración y el respeto a la diversidad, de ahí la importancia de políticas adecuadas de sensibilización y apoyo a mujeres en riesgo de exclusión social y a mujeres inmigrantes.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Estamos inmersas en un momento de involución de los derechos sexuales. El gobierno del partido popular en el Estado, pretende dejar sin efecto y retrotraer, la tímida e insuficiente reforma de la IVE efectuada por el partido socialista. Sigue siendo por tanto una prioridad la reivindicación del movimiento feminista de aborto libre y a cargo de la seguridad social. Y trabajaremos desde Andalucía para el pleno desarrollo de la libertad de las mujeres y realización de las IVE en el marco de la sanidad pública.

Los derechos sexuales y reproductivos garantizan la libre decisión sobre cómo vivir el propio cuerpo en el ámbito sexual y reproductivo; como desarrollar la sexualidad sin estereotipos sexistas y sin la coerción social que determine forzosamente la maternidad. Suponen un marco de relaciones sexuales igualitarias entre mujeres y hombres y entre personas del mismo sexo.

Para garantizar los derechos sexuales de todas las personas consideramos que la enseñanza, desde la primaria hasta la universitaria, tiene que estar reglada la educación sexual, de manera

que se naturalice el concepto de igualdad y se generen los valores éticos y políticos que construyan una sociedad sin tabúes ni sesgos sexuales en todas las edades.

PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Desde IULV-CA es prioritario llevar a cabo actuaciones políticas y administrativas para el:

- Desarrollo y ampliación de la Ley de Igualdad andaluza para una eficacia real.
- Desarrollo y modificación de la Ley de Violencia andaluza, para la consecución de una ley realmente integral dirigida a la erradicación de la violencia de género.

Y, para su consecución es necesario implantar las siguientes medidas:

- Asignación del 5 % del total del presupuesto autonómico para políticas específicas para mujeres, asignado de manera transversal..
- Consejería de la Mujer con dotación presupuesta suficiente para llevar a cabo políticas transversales, y con competencias de coordinación con el resto de las consejerías.
- Políticas dirigidas a potenciar la igualdad de las mujeres en el mundo laboral, a partir de propuestas encaminadas a corregir la segregación ocupacional, la precariedad y la desigualdad salarial. Se adoptarán medidas encaminadas a la eliminación en todos los ámbitos, de las discriminación directa e indirecta y la desigualdad salarial de las mujeres.

Partiendo de la concepción de estas iniciativas prioritarias y necesarias para la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres desde IULV-CA realizaremos las siguientes acciones:

- Modificación del reglamento del Consejo andaluz de la Mujer, para que sea un órgano asesor y consultivo, constituido de forma exclusiva por organizaciones de mujeres.
- Creación de una adjuntía en la institución del Defensor del Pueblo, destinada a denunciar los casos de discriminación de género tanto en el ámbito público como en el privado.
- Modificación de la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, para que la paridad sea obligatoria a todos los niveles de representación institucional, consejos sectoriales y consultivos.
- Desarrollo efectivo de la democracia participativa, a través la puesta en marcha de los Presupuestos Participativos con Perspectiva de Género.
- .Dotación de créditos blandos para potenciar las iniciativas empresariales de las mujeres así como impulsar programas de financiación preferente por parte de los organismos públicos competentes
- Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos y subvenciones de las administraciones públicas, que garanticen la presencia de mujeres en los sectores laborales con menos representación.
- La promoción de convenios marco con cláusulas que garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. A tal fin no se procederá al registro de ningún convenio que contenga explotación, que nos siguen sometiendo a las mujeres.
- Desarrollo e implantación de Servicios Públicos que posibiliten la conciliación de la vida laboral y privada.
- Políticas que avancen en la corresponsabilidad doméstica y en el reconocimiento del trabajo reproductivo, que es realizado mayoritariamente por mujeres, y que supone un 25% del computo del PIB.

- Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía, coordinado por la Consejería de la Mujer y con la participación de todas las consejerías.
- Dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Estos fondos tendrán que ser destinados fundamentalmente para actuaciones directas y estructurales.
- Especialización en violencia de género de los diversos sectores profesionales (sanidad, educación, justicia,...), y especialmente de los órganos judiciales, tanto jueces como personal de los juzgados y tribunales
- Reglamentar y habilitar presupuestariamente las partidas suficientes para poner en funcionamiento el Fondo de Pensiones Impagadas, según lo dispuesto en la Ley andaluza contra la violencia de género.
- Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución. Sensibilización sobre esta forma extrema de violencia de género; programas integrales dirigidos a mujeres prostituidas, dichas actuaciones en ningún caso favorecerán ni legitimarán a los que comercian y se lucran (proxenetas, clientes, traficantes,...) con los cuerpos y las vidas de las mujeres.
- Garantizar la práctica de la IVE a cargo de la Seguridad Social y dentro de la red sanitaria pública andaluza.
- Fomento de políticas de sensibilización y respeto a las diversidad sexual y a las distintas opciones sexuales. Apostamos por una educación sexual reglada
- Respeto a la diversidad y desarrollo de políticas dirigidas a la incorporación en igualdad de las mujeres inmigrantes, a todos los ámbitos sociales y económicos.
- Control de las ayudas de Cooperación. No financiando programas que sigan fomentando la discriminación, afianzamiento de roles o segregación laboral.

PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD DE DERECHOS LGTBI

Desde IU nos presentamos a estas elecciones orgullosos de haber participado en los avances sociales de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y nos sentimos especialmente satisfechos porque los hemos conseguido trabajando con el conjunto de movimientos sociales LGTBI a través de mucha lucha y organización política.

Cometeríamos un gran error si creyéramos que ya está todo conseguido en materia de igualdad. Pese a los avances conseguidos por el movimiento LGTBI en materia de libertades sexuales durante los últimos años, hoy en día continúan existiendo situaciones de discriminación y desigualdad. Es necesario, sobre todo, impedir cualquier retroceso y consolidar las metas ya conseguidas y **seguir luchando por la dignidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales hasta conseguir la igualdad real.**

Los recortes sociales y los **ataques contra el Estado del Bienestar** impulsados por los mercados suponen serios peligros para los colectivos sociales especialmente vulnerables ante la crisis económica del capitalismo. Hoy lesbianas, gays, transexuales y bisexuales tenemos ciertos derechos reconocidos, pero seguimos sufriendo la precariedad, el desempleo o el acoso escolar y laboral. Con precariedad no puede haber igualdad.

El principal problema es la falta de sensibilización de la sociedad en cuanto a la diversidad afectivo-sexual, encontrándonos con situaciones como que:

- A día de hoy, la transexualidad se sigue considerando como una enfermedad psiquiátrica.
- Todavía existen casos de discriminación en centros educativos y laborales sin que las autoridades respectivas cuenten con protocolos de actuación específicos.

- Vivimos en una sociedad que impone la heterosexualidad como único modelo válido y que invisibiliza los diferentes modelos de familia.
- Desde la Administración Pública se siguen ayudando y subvencionando entidades públicas y privadas con actividad o ideología que incurren en la LGTBIfobia
- Invisibilización de los diferentes modelos de familia.
- Se ayudan y subvencionan entidades públicas y privadas con actividad o ideología que incurren en la LGTBIfobia.

Las soluciones a estos problemas pasan por una **apuesta firme en la educación** desde los primeros años, en aplicar **políticas activas en sanidad** y en la **concienciación de la sociedad y de las instituciones** que siguen dando un trato de favor a la Iglesia Católica pese a su constante misoginia y LGTBIfobia. Es por, tanto, necesario actuar sobre la:

- Visibilización y normalización de las personas LGBTI en cualquier ámbito y a cualquier edad.
- Luchar contra la LGTBIfobia.
- Promoción de la búsqueda de nuevos fármacos y terapias para combatir el VIH/Sida.

Desde IULV-CA nos comprometemos con

LA DIVERSIDAD DE LA REALIDAD TRANSEXUAL

El año 2006 fue histórico en la lucha por los derechos de las personas transexuales: se aprobó la Ley de Identidad de Género que permite modificar la inscripción en el Registro Civil sin el requisito previo de una intervención quirúrgica. Pese a ello, la discriminación y estigmatización del colectivo transexual sigue estando patente.

No hace mucho se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad psiquiátrica. A día de hoy la transexualidad se sigue considerando como tal. Por eso IU ha reivindicado y se ha sumado a la campaña estatal por **la despatologización de la transexualidad** en los manuales psiquiátricos que culminará en el 2012.

Hay que exigir que se retire la categoría de “disforia de género” de la actual Ley de Identidad de Género de 2007 y eliminar la obligatoriedad de los tratamientos médicos y psicológicos sin perjuicio de la cobertura por la Sanidad Pública y las restricciones que no permiten a las transexuales inmigrantes acogerse a los avances conseguidos.

Desde IU nos comprometemos a visibilizar y reivindicar la lucha del colectivo transexual en las instituciones.

- Impulso de un compromiso para conseguir la despatologización de la transexualidad y su eliminación de los manuales psiquiátricos de enfermedades mentales.
- IU propone trabajar para hacer posible la promulgación de una **Ley Integral de No Discriminación** por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales y que articule toda una serie de propuestas principales en estos dos ámbitos: el sanitario, para garantizar la cobertura gratuita de todo el proceso de reasignación de sexo y una formación específica y general sobre transexualidad del personal sanitario; y el ámbito laboral, con políticas de acción positiva.
- Implantación de un Plan de Inserción Laboral y fomento del empleo para la población transexual con incentivos laborales para su contratación, con especial mención a mujeres transexuales.
- Asegurar que en procesos de divorcio con descendencia, la transexualidad no sea un circunstancia que se tenga en cuenta a la hora del establecimiento de la custodia.

EDUCANDO EN LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL

Actualmente nos encontramos con un sistema educativo que padece graves déficits desde la perspectiva LGTBI: las y los profesionales de la educación no cuentan con recursos o herramientas que ayuden a identificar, mediar o resolver los conflictos y la violencia derivados de la diversidad afectivo-sexual. Hay muy pocos libros de texto, de lectura, de consulta, etc. que reflejen la realidad LGTBI, que permitan la identificación de personas del colectivo LGTBI para lograr una verdadera integración en el sistema educativo de otras perspectivas y realidades sociales.

Lo más alarmante es que los y las adolescentes LGTBI sufren, en su mayoría, verdaderas situaciones de violencia por el mero hecho de su condición sexual.

Desde IU creemos que **es fundamental educar en la diversidad afectivo-sexual**, sin complejos y desde los primeros años de la enseñanza. Por todo ello, nos comprometemos a:

- La inclusión en el currículum educativo tanto de forma transversal como específica de contenidos relevantes sobre educación afectivo sexual, sobre la diversidad de modelos familiares, sobre valores de respeto y diversidad, etc.
- La creación de unos contenidos mínimos de educación afectivo-sexual para introducirlos en los planes de estudio del máster de formación del profesorado.
- La elaboración de materiales específicos en materia de diversidad sexual complementarios a la formación formal (contando con la participación conjunta en su elaboración de colectivos LGTBI) así como la creación de programas de colaboración con los distintos centros educativos y los colectivos LGTBI.
- Garantizar que en todos los centros públicos de enseñanza haya un servicio psicopedagógico con la colaboración de colectivos LGTBI que tenga conocimientos sobre diversidad sexual y que pueda atender a estudiantes o mediar en los conflictos que surjan en los centros.
- Programas de formación específicos en educación afectivo-sexual para las y los profesores en los que participen también los colectivos LGTBI.
- Estudios sobre la situación de acoso y violencia (bullying) para conocer la realidad de nuestros centros educativos y articular una serie de medidas para atajar con la grave situación que sufren las y los adolescentes LGTBI.

SENSIBILIZANDO DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La gran meta para conseguir la igualdad real a la que aspiramos es la concienciación y sensibilización plena de la sociedad en materia LGTBI. No es algo que se consiga en una legislatura, sino con un trabajo continuo y una serie de pequeños pasos en los que la Administración Pública debe ser ejemplarizante.

Desde IU creemos que las **Administraciones Públicas deben ser un ejemplo** de normalización del colectivo LGTBI y de visibilización de las diferentes realidades y modelos de familia. Por todo ello, desde la izquierda alternativa y transformadora nos comprometemos a:

- La retirada de cualquier ayuda o subvención por parte de la Administración a aquellas entidades que por su ideología o actividad incurran en cualquier manifestación de LGTBIfobia.
- Apoyo institucional de la Junta y de los ayuntamientos a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, como día de celebración y reconocimiento de la diversidad sexual y la lucha en favor de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
- Compromiso y cooperación para la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTBI en cuantos foros y organismos internacionales participe Andalucía.

- Creación de una Fiscalía contra la discriminación para perseguir la LGTBIfobia.
- Creación de un servicio público para la promoción, defensa y atención de la igualdad del colectivo LGTBI.
- Dotar las bibliotecas públicas de fondos bibliográficos relacionados con el colectivo LGTBI desde actitudes de respeto y no discriminación..
- Campañas de información que denuncien comportamientos LGTBIfóbicos y promuevan comportamientos y actitudes de respeto e igualdad.
- La completa supresión, en la documentación oficial, de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier orientación sexual.
- No inclusión de ningún tipo de publicidad o anuncio de comunicación en aquellos medios que no respetan los derechos del conjunto LGTB.
- Convocatoria específica de líneas de ayuda a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo de los derechos del colectivo LGTB.
- Dotar las bibliotecas públicas con fondos bibliográficos relacionados con la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad desde actitudes de respeto y no discriminación.
- Campaña de educación y sensibilidad en el Cuerpo de Policía para evitar acosos, especialmente hacia las personas transexuales que se dediquen a la prostitución.
- Promoción de iniciativas de investigación científica (como cátedras) sobre la realidad LGTBI desde todas las perspectivas: la sociología, la antropología, la historia, la salud, la psicología social... incentivando la colaboración de las universidades y otras instituciones científicas.
- Creación de unas normas básicas para todos los medios de comunicación tanto de titularidad pública como privada que fomenten el respeto a la diversidad y la sensibilización para luchar contra la LGTBIfobia.

NUESTRA SALUD TAMBIÉN IMPORTA

- Compromiso efectivo de las administraciones sanitarias con la atención a la salud de las personas LGTBI, y especialmente con relación a nuestra salud sexual, poniendo en marcha acciones informativas y formativas destinadas al personal sanitario sobre la salud LGTBI y contemplando esos conocimientos en su formación inicial y permanente y facilitando un trato igualitario, digno y respetuoso de las personas LGTBI en los entornos sanitarios.
- Impulso de campañas de diagnóstico precoz en los colectivos más vulnerables como son el HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y los transexuales.
- Facilitar en los centros sanitarios la posibilidad de que se lleve a cabo la congelación de óvulos y esperma antes de iniciar los procesos de hormonación por parte de las personas transexuales.
- Modificación de la Ley de Reproducción Asistida para permitir la cesión de óvulos en el seno de los matrimonios entre dos mujeres.
- Revisión de los protocolos de atención a personas transexuales de la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género (UTIG) del Hospital Carlos Haya de Málaga.
- Creación de nuevas Unidades de Transexualidad e Identidad de Género (UTIG) para aumentar la cobertura en el territorio andaluz facilitando así el acceso.

IGUALDAD EN EL TRABAJO

- Impulso de la formación específica para los agentes sociales (empresarios/as y sindicatos) sobre la realidad y promoción de la igualdad del colectivo LGTBI en el ámbito laboral, así como incorporación de la mirada LGTBI de manera explícita en su política, planes y convenios.
- Formación y concienciación de las y los responsables de la inspección laboral en la realidad LGTBI para controlar y garantizar la no discriminación por orientación sexual o identidad de género en los centros de trabajo.

VISIBILIDAD LESBICA

- Puesta en marcha de campañas públicas de sensibilización social que ofrezcan referentes para el empoderamiento de las mujeres lesbianas y su visibilización en el ámbito público.
- Formación del personal sanitario, principalmente del área de ginecología, sobre las prácticas sexuales entre mujeres y sus riesgos, para poder incluirlas en sus protocolos de acción.
- Inclusión en las políticas de igualdad de género de acciones dirigidas específicamente a las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales.
- Realización de estudios específicos para conocer y enfrentar la incidencia de la infección del VPH y del VIH/Sida en el colectivo de las mujeres lesbianas.
- Fomento del uso del condón femenino a través de campañas de sensibilización para la prevención de ITS en mujeres lesbianas.

DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO SIN EDAD NI LÍMITES

- Realización de programas de promoción de la autoestima y el autorreconocimiento de las y los adolescentes LGTBI, creación y/o apoyo a servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGTBI y de espacios seguros y abiertos para la socialización.
- Fomento del asociacionismo juvenil LGTBI, con el objetivo de favorecer la participación y el empoderamiento de la juventud LGTBI en la sociedad.
- En los casos de expulsión del hogar familiar las administraciones deberán facilitar la ayuda necesaria: psicológica, orientación jurídica, pisos de acogida, becas de estudio o pensiones de manutención.
- Formación del personal de residencias y geriátricos sobre diversidad sexual y de género, con especial atención a la lucha contra la LGTBIfobia.
- Promoción y formación de voluntariado para asistir a personas LGTBI mayores y/o con diversidad funcional.
- Fomento de acciones de sensibilización de la población anciana sobre diversidad sexual y de género y VIH/Sida.
- Apoyo institucional a experiencias de autogestión de centros residenciales para personas mayores LGTBI o seropositivas.
- Impulso de una política de libre disfrute de la sexualidad en los centros residenciales para personas mayores, sea cual sea su orientación sexual o identidad de género

PROPUESTAS SOBRE INFANCIA

EL PACTO ANDALUZ POR LA INFANCIA COMO REFERENTE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Las políticas de Infancia en nuestra Comunidad se sustentan en la Constitución de 1978, en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007 y se regulan por la Ley 1/1998, de 20 de Abril, de los Derechos y la Atención al Menor.

Además de este marco jurídico, el desarrollo de las políticas públicas respecto a la infancia y a las familias en nuestra Comunidad Autónoma tiene un punto de referencia fundamental: el Pacto Andaluz por la Infancia, promovido por UNICEF y el Defensor del Menor de Andalucía, y firmado en 2010 por las principales fuerzas políticas andaluzas, entre las que se incluye IULV-CA.

La finalidad de dicho Pacto no era otra que “incluir a la infancia entre las prioridades de la agenda política y social a nivel local y a nivel autonómico porque:

- El desarrollo de la salud de la infancia, de su educación y de su participación activa es crucial para el futuro de cualquier sociedad.
- Su dependencia y su estado de desarrollo les hace particularmente vulnerables, por lo que son más sensibles que los adultos a las condiciones bajo las que viven, tales como la pobreza, la infravivienda o la contaminación.
- Los niños y las niñas también son más sensibles a las acciones u omisiones de los gobiernos que cualquier otro grupo.”

IULV-CA, como firmante del Pacto, entiende que su contenido sigue plenamente vigente y asume los principios que en él se establecen para el diseño, ejecución y evaluación de los programas de acción social orientados a la infancia:

- Reducir o mitigar los riesgos sociales y económicos que afectan directamente a la vida de niños y niñas.
- Invertir en políticas de prevención reductoras de riesgos.
- Intervenir tan pronto como sea posible cuando los menores están en riesgo, a fin de evitar pérdidas o daños irreversibles.
- Mitigar los efectos de crisis, exclusión y pobreza sobre los niños y las niñas, reconociendo que las familias necesitan apoyo para que se garantice la igualdad de oportunidades mediante:
 - ▶ Provisiones especiales para llegar a la infancia especialmente vulnerable y excluida, incluidos los niños y niñas sin cuidado parental, los que están marginados dentro de sus familias o comunidades debido a su género, discapacidad, etnia, u otros factores.
 - ▶ Considerar los mecanismos dentro de la dinámica del hogar y el alcance que éstos tienen sobre los niños y niñas, con especial atención al equilibrio de poder entre hombres y mujeres dentro del hogar y en la comunidad en general.
 - ▶ Incluir la voz y la opinión de niños y niñas, sus cuidadores y los jóvenes en la comprensión y el diseño de sistemas y programas de prevención y protección social.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL II PLAN INTEGRAL DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA

La aprobación de la Ley 1/1998, de 20 de Abril, de los Derechos y la Atención al Menor trajo consigo la elaboración, aprobación y desarrollo del Plan Integral de Atención a la Infancia de Andalucía (2003-2007). Sin embargo, cuatro años después no se conoce la evaluación pública

de dicho plan ni se ha aprobado por la Junta de Andalucía la formulación de uno nuevo que responda a la realidad de la infancia andaluza en el contexto de crisis que estamos viviendo.

Por ello, IULV-CA hace suyo el acuerdo del Pacto Andaluz por la Infancia y propone la urgente elaboración y la puesta en funcionamiento del II Plan Integral de la Infancia en Andalucía, como instrumento fundamental para garantizar que la infancia andaluza goce de todos los derechos y libertades que tiene reconocidos. Máxime, en momentos en los que están cuestionados por las consecuencias de la crisis socioeconómica.

Con dicho Plan Integral se pretende priorizar, coordinar y racionalizar las intervenciones de las distintas administraciones públicas, lideradas por la administración andaluza; el impulso a los sistemas de prevención, protección y promoción de los menores andaluces y la promover la participación activa de ellos mismos en todas sus fases.

PLAN ANDALUZ CONTRA LA POBREZA INFANTIL Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

En el II Plan Integral de la Infancia en Andalucía se debe incluir, siguiendo la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de 2010, un Plan Andaluz contra la pobreza infantil y la exclusión social.

Dicho Plan específico tendría un solo objetivo fundamental: reducir significativamente la cifra de cerca de 600.000 niños/as que viven en Andalucía en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

Para alcanzar ese objetivo, dicho Plan habría de plantear, entre otros, los siguientes objetivos específicos, planteados por UNICEF España:

- Revisar el modelo social de apoyo a las familias y a los niños, dando un nuevo enfoque a los sistemas generales de servicios, prestaciones, transferencias públicas, impuestos y desgravaciones fiscales a las familias, de manera que proporcionen una protección mayor y que tengan un impacto en la reducción real de la pobreza infantil.
- Establecer un paquete mínimo de beneficios para la infancia común en todas las administraciones públicas, que garantice la coherencia, la coordinación y la eficacia del sistema de ayudas a los niños y a su familia.
- Avanzar hacia la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y de calidad, extendiendo la red pública de centros de Educación Infantil y favoreciendo la escolarización de los hijos de familias con ambos progenitores desempleados.
- Favorecer especialmente el empleo de las personas con hijos menores a su cargo, mediante políticas activas de empleo y de conciliación de la vida laboral y familiar, con especial atención a familias con ambos progenitores desempleados.
- Incrementar el énfasis en la protección social de los colectivos de infancia más vulnerables: niños migrantes, gitanos, niños en instituciones, niños con discapacidad, y niños en familiares numerosas y monoparentales con bajos niveles de renta y empleo.

En cualquier caso, la eficacia del Plan Andaluz contra la pobreza infantil y la exclusión social estará supeditada a dos condiciones fundamentales:

- Que defina objetivos precisos y cuantificables, indicadores claros, un apoyo económico suficiente y detallado, así como los plazos previstos para su cumplimiento.
- Que plantee una acción coordinada, complementaria y eficaz de todas las administraciones públicas.

PROPUESTAS SOBRE JUVENTUD

RAZONES PARA LA REBELDÍA DE LA JUVENTUD

La realidad en la que vive hoy la juventud andaluza es compleja y los problemas a los que nos enfrentamos día a día abarcan desde la precariedad laboral a la falta de acceso a una vivienda digna. Como denominador común, las políticas neoliberales que aplican tanto el PP como el PSOE tienen como base la mercantilización de la vida, la temporalidad laboral o la privatización de los derechos y los servicios.

Para IULV-CA hablar de políticas de juventud es hablar de transversalidad. No podemos hablar de sus problemas sin pensar en la educación, en las posibilidades de acceso a un empleo digno, o en propuestas encaminadas a la participación más directa en la toma de decisiones. Además tenemos que sumar una nueva realidad de emigración de la juventud en los últimos años, cuestión que tenemos muy en cuenta en nuestro programa.

Si analizamos los datos de paro juvenil encontramos que el **55% de las y los jóvenes** que residimos en Andalucía **estamos en situación de desempleo**, frente a la media española del 43,6%, como siempre muy por encima de los valores del resto del estado. Si ampliamos estos datos al paro femenino juvenil, la cifra no es menos preocupante, ya que cerca de un 52% de las mujeres menores de 25 años se encuentra en situación de desempleo en nuestra Comunidad.

Respecto a las condiciones laborales, la inestabilidad en el empleo es mayor cuanto más joven se es. **Entre los menores de 19 años cerca del 80% de los contratos son temporales**, superando el 30% para los jóvenes de entre 30 y 34 años.

Vivimos en un sistema que necesita jóvenes precarios, con bajas condiciones laborales y sueldos bajos, que se adapten a horarios siempre cambiantes y explotadores y que, a su vez, tengan que hipotecarse para poder desarrollarse. Sus consecuencias son evidentes; **nos han condenado a toda una generación a vivir peor que la anterior.**

Pero no sólo es en el mercado laboral donde se evidencia como este sistema obvia y condena a la juventud, sino también en el educativo. La serie de reformas de educación que vienen dándose y que han culminado con **la implantación del Plan Bolonia y la Estrategia 2015**, nos muestran como los mercados se han apropiado de las universidades andaluzas, elitizándolas y despojándolas del carácter humanístico que estas poseían. Esto obedece a una simple razón, los mercados no necesitan tanta mano de obra cualificada.

Desde 2008 cerca del **30% de las y los jóvenes andaluces entre 16 y 29 años emancipados, han tenido que volver a casa de sus padres** al no ser capaces de subsistir de manera independiente. No hemos vuelto por gusto, hemos vuelto porque no tenemos donde ir.

La falta de alternativas públicas para solucionar los problemas generados en torno al **ocio juvenil**, enfocado desde lo privado, además del impulso de medidas represivas como la actual **“Ley Antibotellón”**; la baja participación de la juventud en temas sociales; la, hasta el momento, imparable privatización de espacios públicos para fines sociales, han hecho de Andalucía una Comunidad de tercera, donde los intereses de los poderosos están por encima de los derechos y las conquistas sociales que generaciones anteriores lograron y que hoy se les niega a las y los jóvenes de nuestra tierra.

Vivimos en una democracia falsa, en la que el PSOE **ha regalado la soberanía del pueblo andaluz a los poderosos**, al latifundista, a los grandes empresarios y multinacionales, y en definitiva a los grandes capitales que gobiernan la economía de nuestro país.

Es necesario llenar las urnas de rebeldía, enfrentándonos al sistema para darle la vuelta. Los jóvenes andaluces no tenemos nada que perder y sin embargo mucho por ganar. Por eso, hemos de gritar que aunque seamos jóvenes sin casa, ni trabajo, somos jóvenes sin miedo.

EMPLEO

La principal cuestión a solventar para IULV-CA en la próxima legislatura es la del empleo. Las tasas de paro entre la población trabajadora menor de 30 años es alarmante.

Una vez demostrada que la vía de los recortes sociales y laborales no conlleva la mejora de la situación en que se encuentra la juventud andaluza, tenemos que trabajar para que uno de los sectores de la sociedad más afectados por el sistema y las políticas neoliberales de los gobiernos del PSOE y PP no tengan toda una vida laboral de paro y precariedad.

Nuestra principal apuesta es la creación digno y con derechos. Para ello:

- Derogación del Plan de Formación y Aprendizaje puesto en marcha por el actual gobierno autonómico, a favor de un Plan de estabilidad laboral juvenil.
- Plan de empleo juvenil que potencie el trabajo estable y digno encaminado a desarrollar cuestiones como las energías renovables o las nuevas tecnologías.
- Oposición a las ETT's y a toda forma de precarización del trabajo.
- Mejoras en las convocatorias de prácticas en cuanto a la seguridad social y obligación a la contratación tras el periodo de las mismas, creando la concertación de un sistema en prácticas desde lo público.
- Fomento del desarrollo de las Escuelas Taller en los municipios, encaminándolo a la futura creación de empresas públicas.
- Fomento del empleo para personas recién tituladas y personal cualificado en las empresas que mantengan convenios de colaboración con las distintas Administraciones Públicas dependientes de la Junta.
- Creación de una Red de Gabinetes de Asesoría legal laboral para jóvenes en las delegaciones de empleo dependientes de la Junta de Andalucía.
- Creación de un Observatorio de empleo juvenil que analice la situación laboral de la juventud, y trabaje en la construcción de propuestas para mejorarla.
- Derogación del Estatuto del becario.
- Creación del sello de Calidad Empresarial destinado a empresas que garanticen la calidad laboral y el respeto al trabajo digno y de calidad como principio fundamental de la política interna de la empresa.
- Creación de un Sello Joven que potencie y visualice a las empresas que apuestan por la contratación de jóvenes trabajadores/as, al margen de la precariedad y temporalidad laboral.
- Garantizar que las Universidades y los Centros de Formación Profesional fomenten el desarrollo del empleo joven en base a su oferta educativa.

VIVIENDA

Una manera real de cambiar nuestra sociedad es empezar por reconocer realmente los derechos que poseemos como ciudadanía. La vivienda es una necesidad, un derecho básico de las personas, no un mecanismo de especulación.

Por ello desde IULV-CA planteamos la necesidad de una política de vivienda pública al servicio de la ciudadanía que se concreta en las siguientes propuestas:

- Destinar un 15% del parque público municipal de viviendas a jóvenes entre 18 y 35 años.

- Dotación de suelo público de la Administración para la creación de parques de vivienda pública en alquiler destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años.
- Fomento de las cooperativas de jóvenes, para la creación de nuevos parques de viviendas públicas, en los municipios donde atendiendo exclusivamente al crecimiento demográfico del lugar y las necesidades de la ciudadanía sea necesario, trabajando bajo convenio con la administración pública.
- Crear la figura de Aval Público para que los/as jóvenes puedan conseguir financiación necesaria para el acceso a una vivienda. La Junta será avalista ante las entidades financieras, en tanto se crea la Banca Pública andaluza.

DEMOCRACIA

Las y los jóvenes nos hemos cansado de vivir en una falsa democracia tutelada, que recuerda al despotismo ilustrado, ya que determinados dirigentes políticos consideran que pueden gobernar sin nosotras/os.

No existen excusas para continuar dejando al margen a la ciudadanía de sus decisiones. Ya no se admiten discursos ni acciones que permitan a los representantes votar contra aquello para lo que han sido votados.

Desde Izquierda Unida exigimos una Democracia Real y una mayor implicación de la sociedad en la toma de decisiones que nos afectan a todos/as. Para conseguirlo desde IULV-CA proponemos.

- Reformulación del Consejo de la Juventud de Andalucía, para establecer una mayor independencia y autonomía entre este órgano de participación y los poderes políticos institucionales.
- Descentralización de los servicios y las actividades del Instituto Andaluz de la Juventud a los municipios de menos de 100.000 habitantes y a las diferentes comarcas andaluzas.
- Fomento del asociacionismo y reconocimiento de la participación de la juventud no organizada.

EDUCACIÓN

Ante los actuales ataques a la educación pública como son la privatización y la mercantilización, nos encontramos en la actualidad con un sistema educativo con riesgo de elitización y precarización de la enseñanza.

Para IULV-CA creemos que la concepción de la enseñanza ha de estar fundamentada en la educación pública, de calidad, gratuita, democrática, participativa, laica, feminista, multicultural, conectada con la historia y la cultura de nuestra Comunidad, respetuosa e inclusiva.

A la luz de los constantes ataques a la educación pública por parte del sistema capitalista imperante, desarrollamos las siguientes propuestas:

- Aumento de las becas, con criterios de renta, a todos los niveles.
- Poner en marcha mecanismos para la creación de empleo a partir de las prácticas remuneradas y posterior contratación para evitar la emigración de la juventud.
- Creación de programas sociales que combata el absentismo escolar.
- Creación de una asignatura sexual y sanitaria.
- Fomento del uso del lenguaje no sexista y no discriminatorio en los Centros de Enseñanza.

- Creación de una Oficina Joven de inserción laboral, enfocada al estudiante de Ciclos Formativos y Formación Profesional.
- Apertura de las instalaciones de los centros de estudio a todo el mundo, para su uso social.
- Reforma de la actual Ley Andaluza de Universidades (LAU) y revisión del sistema de titulaciones del Plan Bolonia en las Universidades Andaluzas, evitando su supeditación a empresas privadas. Paralizar la Estrategia 2015.

OCIO ALTERNATIVO

En IULV-CA consideramos que el problema del ocio no se soluciona con la penalización de las formas que la juventud tenemos para emplear nuestro tiempo libre. Consideramos fundamental que las alternativas a fenómenos como el botellón tiene que venir de la mano del diálogo de todos los agentes afectados y deben construirse desde las inquietudes de las y los jóvenes.

Por eso creemos en un ocio para crear y no sólo para consumir y para ello proponemos:

- Oposición desde la Junta a toda ordenanza cívica con carácter represivo.
- Derogación de la actual “Ley Antibotellón” consensuando un Pacto Andaluz por el Ocio Alternativo, en el que se encuentren todos los sectores y agentes afectados.
- Dotación al tejido asociativo juvenil la capacidad, los medios y los recursos necesarios para desarrollar cualquier tipo de actividad con fines culturales y de ocio alternativo, poniendo a disposición de las asociaciones y colectivos juveniles los recursos de los que dispone el Instituto Andaluz de la Juventud.
- Instar a los Ayuntamientos a modificar sus normativas para la abrir los Centros Cívicos a actividades lúdicas y festivas, con fines culturales.
- Crear una Mesa de Participación integrada por colectivos juveniles formales y no formales para el desarrollo y la elaboración de propuestas para el Ocio Joven, el cual se llevará a cabo por el Instituto Andaluz de la Juventud.
- Acuerdo entre las distintas Administraciones públicas para la apertura de las Casas de la Juventud para el ocio nocturno gestionado por los colectivos juveniles del municipio.

CULTURA

Desde IULV-CA creemos en la cultura libre y al alcance de toda la ciudadanía, la elitización de la misma a consecuencia de las políticas clasistas llevas a cabo por el gobierno de la Junta de Andalucía ha provocado que la juventud sea marginada en los distintos espacios culturales. Por todo ello proponemos:

- Se creará un Festival itinerante de Jóvenes Artistas andaluces, el cual velará por la promoción de artistas jóvenes de distintos sectores y especialidades dentro del mundo del arte y la cultura.
- Creación del Instituto Público para jóvenes artistas.
- Potenciación de jóvenes artistas locales, dándole protagonismo en las actividades que se desarrolla por parte de la Junta de Andalucía, así como en las obras artísticas que se llevan a cabo en lugares públicos de las ciudades.
- Reimpulsar las prestaciones y aumentar las ofertas del Carné Joven, prestando una mayor atención al acceso de las ofertas culturales, deportivas y de ocio.
- Creación de una productora pública gestionada por Plataformas que promuevan jóvenes artistas.
- Circuitos culturales accesibles para la juventud en torno a las Casas de la Juventud.

PROPUESTAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Afortunadamente las personas mayores cada vez tienen una mayor esperanza de vida de vida, produciéndose el fenómeno que los expertos denominan “4ª edad”, este fenómeno, unido a la incorporación de las mujeres al mercado laboral acrecienta el nivel de necesidades asistenciales para nuestros mayores.

Con la situación actual de crisis económica, la situación de la gran mayoría de las personas mayores ha empeorado notablemente, sufriendo de forma directa las consecuencias más feroces de los recortes sociales, observando la precarización de sus condiciones de vida y aumentando las bolsas de pobreza entre este colectivo, sin olvidar el fenómeno de la feminización de la pobreza, que es acuciado en estos grupos de edad

Desde IU consideramos que se deben realizar políticas para las personas mayores que tengan en cuenta que este colectivo es heterogéneo, sobre todo en relación con el estado de salud, encontrándonos personas que tienen un completo nivel de autonomía y otras cuyas patologías les hacen ser completamente dependientes de terceras personas. Así, se deben impulsar políticas dirigidas al envejecimiento activo, la prevención de la dependencia, la protección de sus derechos y el logro de una vida plena.

En Andalucía, el número de Centros y Servicios han crecido considerablemente, y a pesar de ello, por los datos con que contamos este número sigue siendo notablemente insuficiente si lo comparamos con el nivel de demandantes existentes.

Desde IULV-CA instaremos y recordaremos al Gobierno Central y Andaluz que:

- Las pensiones más bajas de todo el Estado se encuentran en las Comunidades de Extremadura y Andalucía.
- Los pensionistas y mayores de IULV-CA siempre han reivindicado que las pensiones más bajas se equiparen al Sueldo Mínimo Interprofesional (S.M.I.) y muy especialmente pedirle o plantearle al gobierno andaluz más Residencias para Mayores en situación de dependencia, así como recursos de apoyo a los mayores con poca familia o con dificultades para atenderlos.
- La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social hablaba de una serie de Residencias que se abrieran a nivel de toda Andalucía; en la recién acabada legislatura. Las pocas que se han construido han sido iniciativa privada, en concierto, y la realidad es que esta modalidad está causando numerosos problemas que afectan a los mayores, por tanto optamos por Residencias públicas de mayores en situación de dependencia y en exclusión social. Además el número de plazas que la Junta oferta es claramente insuficiente para atender a los mayores que lo han solicitado.

Nuestra respuesta ante los derechos y necesidades que plantea este colectivo, debe estar guiada por los siguientes criterios generales:

- Provisión pública de los servicios que garanticen el bienestar social de la población, y en particular de aquella que se encuentra más necesitada.
- Protagonismo social, participación, voluntariado, etcétera de las personas mayores validas, que son la mayoría, siendo las instituciones instancias de promoción y articulación de ello.
- Garantía de unas pensiones dignas y suficientes para el desarrollo de una vida activa socialmente y satisfactoria. Esto, exigiendo una vez más que las pensiones mínimas se equiparen al SMI y una subida de este.
- Garantía del derecho a la atención de la dependencia, mediante la prestación de servicios complementarios en caso que la actual ley de dependencia no cubra la demanda y necesidad de los ciudadanía andaluza en materia socio sanitaria, y concretamente nos referimos a los

servicios de teleasistencia para la dependencia leve; para la dependencia moderada: teleasistencia, ayuda a domicilio, viviendas tuteladas y centros de día; para la dependencia severa: centros de día y residencias asistidas; y para la dependencia total: residencias asistidas, así como prestaciones económicas complementarias a las establecidas en la actual regulación legal.

Por ello, desde IULV-CA actuaremos para que se cubran la mayor parte de las carencias en materia de Atención Psicológica, Social y en relación con la prestación de los servicios y programa que tienen como destinatarios a las personas mayores y con tal fin proponemos:

- El cumplimiento de la Ley de Dependencia, tanto en relación con la atención a las personas con grado I como la puesta en marcha y ampliación de los servicios y prestaciones contemplados y la revisión de las aportaciones.
- La promulgación de normativa que amplíe lo establecido en la Ley de mayores de Andalucía en lo referente a personas mayores en riesgo social.
- Unificar los criterios de ingreso en las residencias públicas a fin de priorizar el acceso a quienes estén en situaciones de mayor urgencia y necesidad
- La mejora en la detección y atención de personas mayores que sufren maltrato.
- Reclamar que los centros de salud de cada distrito o pueblo estén adecuados para que los mayores no se tengan que desplazar de un sitio a otro, facilitándoles a estos su mayor comodidad.
- Incluir en todos los Centros de Salud programas específicos de carácter preventivo dirigidos a personas mayores.
- Programar en todos los Centros de Salud exámenes preventivos y campañas de vacunación destinadas a este colectivo.
- Constituir una Unidad Geriátrica adscrita a cada Centro de Salud o atención primaria. Este servicio no tendrá en ningún caso un sentido marginador y se integrara con el equipo de atención primaria y centralizara las actuaciones preventivas y epidemiológicas que hemos apuntado, así como las actuaciones y tratamientos específicos que se vayan diseñando.
- Implantar servicios de atención médica y enfermería en el domicilio de las personas ancianas necesitadas de estas intervenciones, dando prioridad a los núcleos rurales que carezcan de centros ambulatorios.
- Garantizar la adecuada atención especializada a las personas mayores ingresadas en los hospitales y residencias asistidas.
- Asignar ayudas económicas a las personas mayores discapacitadas, así como adaptar sus viviendas a sus necesidades.
- Facultar a los consultorios médicos para habilitar una unidad de podólogo para atender a los mayores.
- Gestión de los Centros de Día por el gobierno de la Comunidad Autónoma.
- Adaptar las piscinas públicas y centros deportivos a las necesidades de los mayores y a los/as discapacitados/as, con personal cualificado para este fin.
- Ampliación de los servicios y prestaciones que oferta la tarjeta 65.
- Apoyo el asociacionismo y la participación activa en lo servicios destinados a la tercera edad.

PROPUESTAS SOBRE COMUNIDAD GITANA

- Programa específico de apoyo y refuerzo educativo en Primaria y especialmente en Secundaria Obligatoria, crear un plan específico dirigidos a la población infantil gitana para su incorporación al sistema educativo a la edad de 3 años y la realización de campañas educativas sobre la realidad y reconocimiento de la cultura gitana, con la finalidad de acercar más a la Sociedad a la cultura e identidad gitana, evitando así los factores negativos que conlleva el desconocimiento.

En todos estos planes debe hacerse especial hincapié en el seguimiento y apoyo de las niñas gitanas para que no abandonen su proceso educativo.

- Programa de ayudas y becas para la continuidad de estudios medios y superiores, que específicamente, fomenten y estimulen el acceso a la Formación Profesional, el Bachillerato y la Universidad.
- Programas específicos de formación e inserción laboral, basados en itinerarios individualizados de acceso al empleo por cuenta ajena y al autoempleo, teniendo una especial consideración hacia la incorporación de la mujer gitana a la formación y al empleo.
- Impulsar los Programas de Formación y Empleo, especialmente los Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, así como a las Empresas de Inserción, ya que favorecen el éxito en la inserción laboral, al desarrollar una formación en entornos productivos reales.
- Programa de apoyo a la normalización, desarrollo y regularización del Comercio Ambulante, para asegurar el mantenimiento del medio de vida de muchas familias gitanas, pero también para regular, sostener y mejorar la calidad de este tipo de actividad comercial.
- Programa de erradicación del chabolismo y la rehabilitación de infraviviendas y entornos urbanos degradados, que contemple plazos e inversiones concretas y realistas, así como medidas de acompañamiento social. Es necesario aprovechar la oportunidad que brinda la reciente modificación del Artículo 7 del Reglamento del FEDER, que permite ahora cofinanciar este tipo de intervenciones.
- Apoyo para el desarrollo y aprobación de la Ley integral para la Igualdad de Trato y la no discriminación, como instrumento de promoción de la convivencia y de lucha contra la discriminación.
- Contemplar planes específicos de salud dirigidos aquellos núcleos donde existe una alta población gitana en riesgo de exclusión incidiendo en la planificación familiar de las mujeres gitanas, así como campañas de concienciación para llevar una buena calidad de vida en coordinación con los centros de salud.
- Un papel más activo del Consejo Audiovisual de Andalucía, para que incida en la ruptura de prejuicios y estereotipos que existe en la actualidad sobre las minorías étnicas y especialmente con la comunidad gitana.
- Reivindicar desde Andalucía medidas que impulsen y refuercen el actual Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, impulsando su reconocimiento público e institucional, y asignándole una dotación presupuestaria suficiente para desarrollar todo su potencial.
- Promover el buen funcionamiento de los órganos de participación e interlocución de las organizaciones sociales gitanas, a través de la Secretaria Gitana de la Junta de Andalucía, así como reforzar la promoción de la cultura gitana a través de las labores del Centro Socio Cultural del Gitano Andaluz y el Instituto Andaluz del Flamenco.
- Desarrollo de medidas e intervenciones para la inclusión social de las personas gitanas llegadas del Este de Europa que, en colaboración con los ayuntamientos, mancomunidades y

diputaciones trabajen por la normalización socioeducativa y la inserción laboral de esta población.

PROPUESTAS SOBRE PERSONAS MIGRANTES

El modelo español es un modelo de inmigración laboral, por ello la exclusión laboral es el gran eje de la política de inmigración. Ni los cupos, ni el régimen general de inmigración han sido eficaces para propiciar una inserción laboral legal. La legislación ha sido repetidamente reformada y en cada reforma se han rebajado los derechos y acrecentado los deberes de los migrantes.

La incidencia de los extranjeros en las tareas no cualificadas es 3 veces superior a la de los españoles y el desempleo de los migrantes dobla al nativo. En general, los inmigrantes ocupan los peldaños más bajos de la escala ocupacional. Desempeñan los trabajos menos calificados y más temporales: servicios personales, construcción, hostelería y restauración, comercio al por menor y agricultura. Aúpan productivamente a los españoles de clase media y en particular a las mujeres, que acceden así a trabajos más calificados y mejor remunerados, explotando a otras mujeres como cuidadoras.

Lo más relevante es el aumento de la irregularidad de las trabajadoras extranjeras, con un doble riesgo de exclusión: trabajar sometidas a un régimen «especial» y la carga de su monomarentalidad. Redunda en la invisibilidad de estas mujeres la alta concentración como empleadas de hogar en régimen interno y la informalidad de su régimen laboral.

Sin embargo, y a pesar de la realidad social, económica y laboral que hemos descrito son los siguientes factores los que impiden a los y las migrantes ser ciudadanos en igualdad y con plenos derechos:

- **ASILO:** se olvidan los derechos fundamentales reconocidos en la Legislación Internacional y en la Declaración de Derechos Humanos
- **EL TRABAJADOR/A MIGRANTE:** acceso al trabajo como herramienta fundamental para la integración, evitando dependencias que roban la dignidad a los trabajadores.
- **LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:** la plena integración de las distintas identidades culturales, colectivos y pertenencias identitarias de nuestra sociedad, desde el reconocimiento de la riqueza que aporta la diversidad es hoy una falacia.

El tratamiento de las migraciones se encuentra normalmente desenfocado, se analiza fundamentalmente solo desde políticas de control de fronteras, de gestión de relaciones laborales y de intereses económicos y relaciones internacionales. Una propuesta de gestión de las migraciones humanas de izquierdas, deberíamos centrarla en los aspectos sociales, humanos, de esta realidad y en consecuencia desarrollar políticas para:

- La participación comunitaria
- La persona migrante debe ser considerada por encima y antes que la función laboral
- Reconocimiento de la situación de asilo / refugio político de las personas provenientes de países en conflicto bélico o con situaciones de dictadura política y la ampliación jurídica de las causas que se reconocen como asilo, refugio y trata de personas.
- Reagrupación familiar: eliminación de los condicionantes económicos que impone la actual Ley de Extranjería y Modificación de la Directiva de Reagrupación Familiar, para que haga realmente efectivo el ejercicio de este derecho, en vez de obstaculizarlo
- La denuncia de los convenios de expulsión; ya que a menudo conllevan violaciones de los derechos, ruptura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave desarraigo de las personas migrantes

En las Comunidades Autónomas (CC.AA.) existen competencias que afectan el día a día de la inmigración (vivienda, educación, salud, etc.) y que hemos desarrollado a lo largo de todo el programa político con propuestas transversales. Sin embargo, está claro que desde las CC.AA. debemos tratar y actuar en los temas claves, aunque sean de competencia estatal. La Junta de Andalucía debe favorecer directamente:

- Protección de la persona y su derecho a la migración por encima de su situación administrativa.
- Extender los derechos de Ciudadanía a los residentes no comunitarios
- Eliminación de la actual política de presión policial contra las personas en situación administrativa irregular
- Configuración de un organismo independiente que califique la situación de los países de origen,
- Agilizar los trámites para la gestión que case oferta y demanda laboral, como único requisito para la obtención de permisos de trabajo
- Garantizar la igualdad de derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes y aplicación la misma legislación laboral independientemente de la nacionalidad del trabajador (dumping laboral/ empresas deslocalización)
- Planes de educación social que evite la exclusión social con poolíticas de gestión de la diversidad desde la interculturalidad.
- La aplicación de la Convención Internacional sobre Derechos de las personas migrantes y sus familias, de 1990.
- Homologar los títulos educativos de los inmigrantes y sus capacidades para desarrollar labores más calificadas y distintas para mejorar su integración laboral.
- El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
- Garantía en la defensa y control judicial de las expulsiones o retornos, así como la prohibición de las expulsiones colectivas.
- Normas para el tratamiento de los Menores Extranjeros no acompañados que respeten la Convención Internacional de los Derechos del Niño
- Medidas contra la trata de seres humanos que protejan y no penalicen a las víctimas.

PROPUESTAS SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROPUESTAS GENERALES

En materia de educación.

- Atención temprana: Desde las administraciones públicas se deben adoptar las medidas para garantizar la atención temprana a los niños con cualquier tipo de discapacidad y sus familias, desde un enfoque preventivo y globalizador. La Atención Temprana debe ser reconocida como un derecho para todas las personas con discapacidad y estar legislada. Las Comunidades Autónomas deben desarrollar los procesos de organización y gestión de los recursos dedicados a la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y la atención de todas las situaciones de discapacidad, trastornos del desarrollo o situaciones de riesgo en la población infantil de 0 a 6 años de edad.

- **Inclusión educativa:** Cumplimiento del precepto, que se recoge en la actual legislación educativa, sobre que el modelo educativo de atención a personas con discapacidad debe ser inclusivo y caracterizarse por la escolarización en centros ordinarios de este alumnado. La inclusión educativa es un modelo de apoyo centrado en la escuela y en el entorno. Es la escuela quien debe adaptarse al alumno (y no a la inversa) y proporcionarle los recursos necesarios (tanto humanos como materiales) que posibiliten su plena inclusión educativa y social.
- **Igualdad de trato y oportunidades, equidad, calidad e inclusión:** establecer fórmulas que garanticen la prestación de los apoyos e intervención que precisen las personas con discapacidad en el ámbito educativo (adaptaciones, recursos didácticos, ayudas, etc.)
- **Accesibilidad digital:** El futuro escolar pasa por la digitalización de las aulas y las administraciones públicas deben proporcionar al alumnado con discapacidad, material y equipos accesibles. Así mismo, deben ser accesibles los contenidos curriculares y los maestros de aula deben tener formación para la generación de recursos didácticos accesibles.
- **Diagnóstico de necesidades de formación de los distintos grupos en demanda de empleo,** a fin de ajustar a la realidad las políticas formativas de la Consejería de Empleo a través de su Servicio Público, con particular atención a las necesidades específicas de los colectivos de discapacitados.
- **Utilización de formadores con experiencia en realización de cursos destinados a distintos colectivos de discapacitados** en aquellas acciones formativas que se organice desde la Consejería de Empleo.
- **Fomento de la formación a distancia a nivel autonómico,** a través de los soportes específicos diseñados al efecto, haciendo difusión de cursos online accesibles para discapacitados por parte de instituciones públicas.

En materia de formación y empleo.

- **Capacitación profesional e inserción laboral de las personas con discapacidad:** mejorar la formación permanente de adultos y aumentar las oportunidades profesionales tras la escolarización obligatoria, a través del establecimiento de diversos conciertos y convenios entre los distintos sectores formativos y empresariales, firmando acuerdos y leyes de protección hacia el empleo y mejorando la comunicación.
- **Diagnóstico de necesidades de formación de los distintos grupos en demanda de empleo,** a fin de ajustar a la realidad las políticas formativas de la Consejería de Empleo a través de su Servicio Público en Andalucía, con particular atención a las necesidades específicas de los colectivos de discapacitados.
- **Utilización de formadores con experiencia en realización de cursos destinados a distintos colectivos de discapacitados** en aquellas acciones formativas que se organice desde la Consejería de Empleo
- **Cuotas de reserva de puesto de trabajo:** Garantizar el cumplimiento, por parte de las administraciones locales y autonómicas, de las cuotas de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad establecidas en la legislación vigente, o sus medidas alternativas, mediante un mayor control y seguimiento, favoreciendo las adaptaciones necesarias en los puestos de trabajo a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
- **Integración laboral en empresas proveedoras de servicios públicos:** Promover medidas específicas de apoyo al empleo de personas con discapacidad en los concursos de contratación de bienes y/o servicios de las administraciones públicas.
- **Acciones específicas en orientación e intermediación laboral:** Impulsar el desarrollo en los servicios de orientación e intermediación laboral de las entidades dependientes de estas

administraciones, de líneas de acción específicas para la integración laboral de las personas con discapacidad visual. En este sentido, la Consejería de Empleo deberá proporcionar un adecuado asesoramiento a discapacitados sobre aspectos formales a tener en cuenta en un proceso de búsqueda de empleo, así como las distintas fuentes disponibles para realizar dicha búsqueda: páginas web, portales de empleo, asociaciones, etc.

- Desarrollar nuevas formas innovadoras de acceso e inclusión laboral, especialmente en áreas como las nuevas tecnologías de la información o el teletrabajo, también aplicadas para facilitar procesos de reinserción de profesionales que han tenido una discapacidad sobrevenida.
- Promoción y patrocinio de encuentros empresariales sobre Responsabilidad Social en materia de solidaridad con la discapacidad, para el intercambio de experiencias y la transmisión de resultados en este sentido, tanto a nivel de rentabilidad económica como social.
- Creación de un “Distintivo de inclusión de la discapacidad” destinado a entidades y empresas que destaquen por sus acciones solidarias y de integración laboral de estos colectivos.

En materia de cultura.

- Cine y teatro accesibles: Promover la adaptación de las salas teatrales de titularidad pública y las salas cinematográficas para que puedan ofrecer representaciones teatrales y exhibir películas con audiodescripción.
- Accesibilidad a la TDT: aplicar en los canales de televisión autonómica, porcentajes superiores a los recogidos en la Ley General de Comunicación Audiovisual que establece las horas semanales de programación con audiodescripción, lengua de signos y subtitulación para los canales de titularidad pública.
- Participación en eventos públicos: Establecer soportes de acceso a la información y a la participación en las fiestas locales y acontecimientos públicos significativos (programas, accesos, entradas, acompañamientos, etc.).
- Acceso a la cultura: Crear sistemas de accesibilidad a los programas y campañas públicas de divulgación y creación artística y cultural (semanas de cine, festivales de teatro y música, exposiciones, jornadas, etc.) tanto en su disfrute como en la participación de iniciativas creativas de las personas con discapacidad.
- Creación del día de los museos para discapacitados, en los que se permita “tocar” obras escultóricas, instalaciones, etc.
- Formación de profesionales: Formación a los profesionales de las administraciones locales y autonómicas que intervienen en el diseño, gestión, realización, información y soporte de las actividades culturales, recreativas, deportivas y de ocio sobre las características y sistemas de accesibilidad de las personas con discapacidad.

Para el fomento del deporte.

- Integración deportiva: Incrementar la práctica deportiva adaptada en las instalaciones públicas, así como apoyar a las distintas Federaciones de Deportes de personas con discapacidad.
- Fomentar la práctica del deporte de personas con discapacidad para facilitar su integración.

En materia de accesibilidad.

- Aplicación efectiva de las normas UNE sobre accesibilidad: Impulso de la aplicación, en los espacios públicos y concertados, de los preceptos regulados en las normas UNE publicadas recientemente: UNE17001-1:2007 accesibilidad al entorno, UNE 17001-2:2007 sobre

sistema de gestión de la accesibilidad y UNE 17002:2009 sobre requisitos de accesibilidad para la rotulación.

- Accesibilidad de los transportes públicos: Impulsar las medidas de accesibilidad en los transportes públicos reguladas en la legislación correspondiente.
- Seguir impulsando, con los ayuntamientos, la eliminación del mayor número de barreras arquitectónicas.
- Estacionamientos reservados en el área de trabajo durante la jornada laboral para trabajadores con movilidad reducida, así como gratuidad en las adaptaciones de aquellos trabajadores discapacitados que precisen el vehículo para su trabajo.
- Información accesible: Garantizar que los sistemas de información al ciudadano, así como de realización de trámites con las administraciones públicas se implanten siguiendo criterios de accesibilidad universal y diseño para todos (incluyendo las páginas web y los servicios disponibles a través de ellas, puntos de información electrónica, etc.).
- Control de la accesibilidad de páginas web públicas: Realización y publicación de informes anuales sobre la accesibilidad plena de las páginas web de las administraciones públicas, e incorporación de cláusulas específicas en los concursos de prestación de servicios para que las web de los proveedores cumplan los niveles de accesibilidad requeridos.

En materia de nuevas tecnologías.

- Para culminar el desarrollo de la Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, debería desarrollarse y publicarse el Real Decreto que regule el acceso y utilización por parte de las personas con discapacidad de los bienes y servicios a disposición del público, en el que se establezcan medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades.
- En este sentido, debería regularse la accesibilidad al etiquetado de productos para su identificación, así como a los dispositivos que ofrecen productos o servicios al público: compra de entradas, billetes, bebidas, etc.
- Deberían establecerse las bases para que cualquier dispositivo electrónico disponga de características de accesibilidad que permita ser utilizado por cualquier persona (dispositivos de cuidado personal, control médico de uso doméstico: tensiómetros, glucómetros, termómetros, electrodomésticos, etc.).

Además, deberían establecerse ayudas públicas para fomentar la innovación en este sentido. Es decir: la aplicación de las posibilidades que hoy en día ofrece la tecnología para hacer accesible cualquier producto o servicio, al objeto de destinarlas a los bienes y servicios disponibles en el mercado.

- En la actualidad existen diversas subvenciones orientadas al ámbito de la investigación, si bien sería necesario extender estas ayudas hacia los bienes y servicios de carácter más doméstico, subvencionando asimismo la implementación de mejoras de accesibilidad en productos y servicios a las empresas que los lleven a cabo.

En materia de autonomía personal.

- Consolidación y desarrollo del Consejo Asesor de personas con discapacidad.
- Incrementar en un 50 % el número de personas atendidas a través de los servicios sociales y de dependencia.
- Consolidar el desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia.

En materia sanitaria.

- Reestructurar todo el catálogo de material ortoprotésico de los sistemas públicos de salud, considerando las prótesis oculares dentro del catálogo y facilitarlas gratuitamente, así como incluir tanto sillas de ruedas como material ortoprotésico acordes a la situación del solicitante en lo referente a que si trabaja, se le facilite el material mas acorde para que pueda desempeñar su trabajo bien sea material ortoprotésico, silla de ruedas, etc.
- Adaptar, tanto en centros de salud como en hospitales públicos, la información que se facilita a los usuarios acorde a su discapacidad.
- Impulsar la creación en el INSS de una unidad específica en los EVIS para valorar todas las situaciones tanto de control de incapacidad temporal como de valoración de incapacidades de todos los trabajadores con minusvalía previa, de cara a asegurar una mayor especialización y sensibilidad en estas situaciones.
- Aumentar las ayudas a las empresas para favorecer la contratación de personas con discapacidad.

Otras propuestas.

- Seguimiento de la LIONDAU: realización y publicación de informes anuales sobre el cumplimiento de los diferentes mandatos de la LIONDAU en cada ámbito competencial, amparados bajo el artículo 141.1 de la Constitución.
- Desarrollo de acciones positivas de cara a los discapacitados por medio de la creación de una Agencia para la Discapacidad en el ámbito Andaluz, como la ya existente desde 2007, Agencia Asturiana para la Discapacidad, dependiente de la Consejería de Bienestar Social.
- Desarrollo de políticas de inclusión específicas para colectivos en que conviven varios motivos potenciales de discriminación: mujer-discapacitada; inmigrante-discapacitado; parado-discapacitado; etc.
- Acciones publicitarias por parte de los órganos de la administración del estado y autonómicos sobre sus políticas de inclusión y solidaridad con la discapacidad, para dar ejemplo a empresas y particulares.
- La discapacidad en los medios de comunicación: cobertura informativa de la discapacidad de una forma normalizada e integradora en los medios de comunicación que dependan de las Administraciones Públicas, incorporando personas con discapacidad en sus plantillas como un elemento más de normalización y proximidad.
- Colaborar desde Andalucía a la promoción y divulgación del modelo ONCE a nivel internacional, a través de cauces institucionales de carácter estatal, exportando la imagen de esta organización como ejemplo de integración de la discapacidad a todos los niveles: educativo, laboral, cultural, etc.

PROPUESTAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

La Administración debe garantizar el acceso de las personas con discapacidad a todos los servicios y espacios públicos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos (atención a la infancia, sanidad, educación, empleo, etc.). Se deben establecer medidas contra la discriminación de género en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el derecho a la maternidad/paternidad y a gozar de una sexualidad plena y libre.

Se hace necesario planificar unas ciudades accesibles para todos, en la que no se marquen y acentúen las diferencias entre las personas que tienen alguna discapacidad y las que no la tienen. Una ciudad accesible para todos supone un reto no solo para conseguir la igualdad entre todos los ciudadanos sin resaltar las diferencias por discapacidad, sino dar respuesta a las necesidades sociales existentes en una sociedad plural

- Denunciar, en colaboración con las Asociaciones de personas discapacitadas, aquellas situaciones en las que las instituciones públicas incumplen la Ley para la Promoción de la Accesibilidad, y consecuentemente, eliminar las barreras arquitectónicas existentes y planificar el diseño urbano y social de manera que sea accesible para todas y todos.
- Creación de un porcentaje de reserva de viviendas adaptadas, facilitando su acceso físico a las necesidades individuales de cada discapacidad, mediante ayudas económicas, alquileres en función del nivel económico real de las personas adjudicatarias, etcétera, con la difusión de la información oportuna al colectivo de personas interesadas sobre cualquier novedad que se produzca en este campo.
- Defender la implantación efectiva de transporte accesible, basándonos en la propia Ley para la Promoción de la Accesibilidad y promoviendo la adaptación gradual (Plan Concertado con Asociaciones) de líneas, así como la puesta en práctica del programa bonotaxi como medio efectivo del puerta a puerta, actualizando las cuantías económicas a las tarifas actuales y adjudicando las cantidades según la situación socioeconómica particular de cada persona (actividad: actividades formativas, laborales o sociales, movilidad, grado de autonomía, ingresos,...)
- Garantizar la comunicación como vehículo de formación social, lo que implica ofrecer una atención especial a la información sobre discapacidades. Consideramos, en este sentido, que los medios públicos deben adoptar medidas tendentes a promover la participación permanente del Colectivo de Personas con Discapacidad en su programación (traducción para quienes padecen sordera, emisión con subtítulos, etcétera). Además, por su poder educativo, deben cuidar la terminología utilizada, de manera que sea integradora y normalizadora, así como contar con la presencia visible de personas con discapacidad en su plantilla.
- Línea de subvención para universitarios y universitarias que requieren un transporte especial para acudir a clase.
- Legislar a favor de establecer para el colectivo de personas con discapacidad un porcentaje de reserva de pisos adaptados, así como elaborar propuestas referidas a desarrollar apartamentos tutelados en algunas promociones.
- Elaborar los programas de adaptación del turismo como elemento básico de intercambio, estableciendo como condición indispensable para su contratación o subvención la accesibilidad en todo tipo de transporte (museos, naturaleza...)
- Realizar campañas de formación en accesibilidad para todos los agentes implicados en la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes y en las nuevas construcciones y adquisiciones de medios de transporte.

PROPUESTAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

- Formación de las personas con discapacidad visual: Promover la participación de alumnos con discapacidad visual en los cursos de formación para el empleo, organizados por las agencias u organismos públicos de empleo vinculados a estas administraciones, facilitando la adaptación de los materiales y puestos de formación que puedan requerirse en cada caso.

PROPUESTAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

- Compromiso de los poderes públicos de Andalucía para que se dicten las disposiciones que resulten necesarias para el DESARROLLO NORMATIVO Y EJECUCIÓN de lo previsto en la Ley 11/2011 de regulación del uso de la Lengua de Signos Española (LSE).
- Elaborar y aprobar el reglamento que apruebe las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de las barreras en la comunicación en Andalucía, antes del plazo de tres años establecido en la Ley.

- Creación y dotación del Centro de Normalización Lingüística, cuya finalidad es investigar, fomentar y difundir la lengua de signos española y velar por el buen uso de la misma.
- Reconocimiento de la figura del “Co-Tutor/a” maestro/a que trabaja dentro del aula el curriculum ordinario, utilizando como lengua vehicular la Lengua de Signos Española para el alumnado con discapacidad auditiva que opte libremente por la LSE, en una escuela inclusiva.
- Incorporación de la figura de los/as Intérpretes de Lengua de Signos Española en la plantilla de trabajo de la Junta de Andalucía.
- Creación de una aplicación presupuestaria en la Junta de Andalucía y dotación económica de la misma, que centralice la financiación de los Intérpretes de LSE.
- Ampliación del Servicio de Teleinterpretación para personas sordas existente actualmente e implantación del mismo en las Administraciones Públicas Andaluzas, para hacer efectiva la accesibilidad de las personas sordas a los bienes y servicios de la Administración Pública Andaluza y de otros ámbitos de la vida.

PROPUESTAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Empleo.

Como principal motor económico e integrador, es necesaria una apuesta política que consolide e impulse el empleo en nuestro sector. Tanto en la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral, como de los profesionales que desempeñan su labor en el movimiento asociativo FEAPS en Andalucía (más de 8.200 profesionales).

Salud.

El Servicio público de Salud debe garantizar un mayor conocimiento de la realidad de las personas con discapacidad intelectual, una mejor formación de los profesionales de la salud y más facilidades de acceso a determinados especialistas y servicios, así como la gestión de listas de espera. Debe prestarse especial atención a la atención temprana y desarrollar coherentemente la recién aprobada ley de salud pública que incluye la atención temprana dentro del catálogo de prestaciones sanitarias. Toda inversión en atención temprana previene situaciones futuras de dependencia. Respecto a la salud mental, debe impulsarse la atención ya que 1 de cada 3 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tendrá asociados este tipo de trastornos en algún momento de su vida.

Educación.

Revisión de los conciertos educativos actuales con la finalidad de reordenar la red de centros. Debido a la especificidad de los Centros de Educación Especial deberían convertirse en centros de recursos dentro del sistema educativo pasando a ser considerados como un recurso más que ofrece, atiende y da respuesta a la diversidad, sin alejarnos de los principios de normalización, integración e inclusión por la que apuesta el actual sistema educativo.

Puesta en marcha, desarrollo y evaluación del Plan Global de reordenación, modernización y calidad de los centros específicos de Educación Especial. (INFORME DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ sobre CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 01/12/2010)

Garantizar que todas las opciones educativas promueven la inclusión social.

Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

Garantizar la correcta aplicación de la Ley, priorizando el acceso a los servicios especializados sobre las prestaciones económicas. De este modo, además de garantizar los niveles de empleo actuales se fomenta la autonomía personal, se participa activamente en la sociedad y, por ende, se genera riqueza.

Plena ciudadanía.

Es necesario establecer medidas que impulsen:

La plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, la igualdad de oportunidades, su participación, su pertenencia y el ejercicio de sus derechos mediante la autonomía personal y la inclusión en la comunidad, la discriminación de género, la atención a las familias, el acceso a la cultura y al ocio, la promoción de la vida independiente, la efectiva eliminación de barreras potenciando la accesibilidad cognitiva, etc.

PROPUESTAS SOBRE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

Las políticas públicas respecto a las personas con enfermedad mental deben estar orientadas por la defensa de sus plenos derechos en todos los ámbitos y en la mejora de su calidad de vida y de sus familiares. En este sentido, IULV-CA reconoce la labor que las asociaciones andaluzas de familiares y de personas con enfermedad vienen desarrollando para la consecución de ambos objetivos, valora positivamente los avances conseguidos.

Por ello, IULV-CA se compromete a con ellas a continuar desarrollando, desde las administraciones públicas andaluzas, las políticas transversales y las inversiones necesarias para garantizar una atención asistencial y de promoción y prevención adecuadas, manteniendo la red de atención a las personas con enfermedad mental y sus familiares. Las políticas de austeridad y de ajuste, que nosotros rechazamos, no pueden ser el argumento para que el desmantelamiento de los servicios de atención a los colectivos más vulnerables.

Más concretamente, IULV-CA se compromete

- MARCO NORMATIVO.
 - ▶ Trasponer, en un periodo de 5 años, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas adaptando toda la normativa andaluza a la misma.
- ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
 - ▶ Mantener una Red pública de atención y reforzar los dispositivos asistenciales y de promoción y prevención de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de
 - ▶ Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), garantizando la continuidad de los servicios prestados por las asociaciones miembros de FEAFES-Andalucía.
- ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
 - ▶ Implantar en toda Andalucía los Tratamientos Asertivos Comunitarios (Intensivos en Comunidad).
 - ▶ Aumentar el número de centros de Comunidades Terapéuticas garantizando la continuidad de cuidados.
 - ▶ Mejorar el ambiente terapéutico en las Unidades de Hospitalización y abrirlas a la familia y allegados. Así como la atención y asesoramiento a las familias, sobre todo en la primera toma de contacto con la enfermedad.
- COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
 - ▶ Atención integral a personas con enfermedad mental y adicción a tóxicos y personas sin hogar

- ▶ Implantación del PAIEM en todos los centros penitenciarios de Andalucía, garantizando la asistencia de los especialistas de salud mental a los internos. A su vez, dotar de un servicio de orientación en el ámbito jurídico para evitar la entrada en prisión y promover la salida progresiva a la comunidad mediante medidas alternativas.
- INFANCIA Y ADOLESCENCIA
 - ▶ Realizar una atención integral a la infancia y adolescencia que sufre un problema de salud mental mejorando la coordinación entre las consejerías competentes.
- SENSIBILIZACIÓN Y LUCHA CONTRA EL ESTIGMA EN SALUD MENTAL
 - ▶ Promover acciones de sensibilización y concienciación social en salud mental, así como medidas de prevención.
- FORTALECIMIENTO DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)
 - ▶ Fortalecer la FAISEM como elemento instrumental de la Junta de Andalucía para el desarrollo de políticas sociales dirigidas a personas con trastornos mentales graves (TMG). Para ello, proponemos:
 - ▶ Adecuación a la Ley 1/2011, de reordenación del sector público andaluz.
 - ▶ Reconocimiento y cualificación profesional de como monitor del personal actualmente no cualificados
 - ▶ Equiparación laboral, profesional y salarial al personal de la Junta de Andalucía, del sector socio-sanitario, que desempeña tareas y asume responsabilidades de índole semejante.
 - ▶ La incorporación del movimiento asociativo como Patronos de FAISEM.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES

La comercialización de sustancias ilegales es una fuente inagotable de beneficios económicos para individuos, empresas y Gobiernos que en general permanecen en la oscuridad. La prohibición de sustancias en función de su capacidad de perjudicar la salud, esconde beneficios ingentes solo comparables al tráfico de armas y la prostitución.

Los convenios internacionales que prohíben la comercialización legal de las mismas no han resuelto “el problema”. No han conseguido acabar con las drogas; al contrario, su consumo cada vez es mayor tanto en Europa como en Estados Unidos. Las guerras preventivas “contra la droga” arruinan los cultivos de subsistencia de poblaciones indígenas latinoamericanas y persiguen a pequeños productores. Mientras tanto, grandes traficantes esconden sus capitales en sistemas financieros opacos. Posibilita, además, mercados ilegales que en su escala más ínfima llenan las cárceles de personas toxicómanas, personas que padecen enfermos mentales, inmigrantes y minorías étnicas marginalizadas.

El fenómeno de las drogodependencias es cambiante e impone la necesidad de adecuarse a esos cambios y hacerlo de la forma más eficaz posible porque entre sus efectos sociales nos encontramos con:

- El deterioro del Estado del Bienestar y su paulatina sustitución por valores individualistas, promocionados por los medios de comunicación, se relaciona directamente con el éxito económico, social y el consumo masivo
- Se crean, por otra parte, tensiones sociales que desencadenan procesos insolidarios en la sociedad y la aparición de nuevas formas de pobreza, que se suman a las ya existentes

- La mayoría de los efectos más graves para la salud y el estatus social del drogodependiente dependen de las circunstancias en las que se producen los consumos de drogas ilegales en regímenes prohibicionistas: calidad de las sustancias, condiciones higiénicas en las que se produce el consumo, precio elevado de las drogas que introduce a una parte de consumidores en mercados ilegales e induce a otras conductas delictivas con el mismo fin.
- El aislamiento social en el que se encuentran es un efecto de la estigmatización de la que han sido objeto y el circuito vital de estas personas está entre la cárcel y la calle o pudiendo acceder a los derechos básicos de ciudadanía.

Combinar las libertades personales y dar respuestas a los conflictos sociales y socio personales en este tema debe ser el eje vertebrador de la atención a la problemática de drogodependencias. De ahí que desde una política progresista debamos:

- Promover la prevención, basada en los conocimientos científicos actuales, la adecuación de la red asistencial a las nuevas necesidades, la inserción y apoyo y la aplicación de las leyes que limitan el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y la publicidad de sustancias legales e ilegales.
- Establecer como prioritarios los ámbitos de prevención en la escuela, la familia, el ocio, el trabajo, los barrios deprimidos y las cárceles. Con estrategias transversales en: educación para la salud como proceso participativo de transformación social; la reducción de riesgos y daños a través de la cercanía y la aceptación de la persona usuaria, adaptándose a sus necesidades; se promoviendo así la responsabilidad y la incorporación social y la mejora de su salud.

Desde esta óptica IULV CA llevará a cabo acciones coordinadas con la administración local y autonómica tales como:

- Información y sensibilización a través de medios de comunicación de masas
- Educación en valores y habilidades para la vida. Elaboración y difusión de materiales informativos.
- Coordinación e impulso de Planes Municipales de Prevención de Drogodependencias, estableciendo las bases, incentivos y recursos para la existencia de un compromiso político técnico en este tema, así como para la implicación del tejido social en dichos planes.
- Proporcionar la financiación necesaria para la continuidad de las actuaciones programadas en los Planes Autonómicos y Locales, así como para la apertura y continua formación de los técnicos que intervengan en el campo de la prevención.
- Información, orientación y formación de jóvenes, voluntariado y profesionales de clubs, asociaciones de tiempo libre, culturales y deportivas.
- Asesoramiento a menores con problemas y a sus familias.
- Formación de los equipos docentes para la prevención y manejo de los consumos.
- Formación y asesoramiento al profesorado para la detección precoz y manejo de jóvenes de alto riesgo para consumos problemáticos de drogas.
- Formación de profesionales sociales, educadoras y educadores de familia y técnicos y técnicas en la materia. Información individualizada, formación y asesoramiento basado en la evidencia científica.
- Mediación centro – familia. Asesoramiento y formación a las familias con hijas y/o hijos con problemas de conducta y/o consumos incipientes e intervención psico-educativas para familias con hijas y/o hijos de alto riesgo. Supervisados por profesionales en terapia familiar.

- Establecer mapas de zonas de riesgo como instrumento para priorizar y coordinar acciones.
- Control de tráfico de drogas y consumo de sustancias en medio público.
- Coordinación y cooperación entre servicios de drogodependencias, sociales y socio-educativos.
- Entrenamiento en habilidades para adolescentes con problemas de conducta o consumos de drogas.
- Proyectos de participación ciudadana para la reducción de daños comunitarios derivados del uso de alcohol en medio festivo, (plan de prevención del “Botellón”).
- Actividades de información sobre sustancias y sus efectos, (programas testados de sustancias, de determinación de alcoholemia).
- Intervención de reducción de riesgos y daños: intercambio de jeringuillas, y dispensación de metadona, y heroína en quienes fracasan, formación en educación para la salud, prevención del SIDA, espacios de consumo de menos riesgo.
- Programa de acogida diurna y nocturna para personas toxicómanas.
- Programas de tratamiento ambulatorio y residencial a toxicómanas alcohólicas y no alcohólicas adaptado a las nuevas necesidades.
- Programas de inserción sociolaboral y formación ocupacional para personas con toxicomanías.
- Priorizar a las mujeres toxicómanas que ejercen la prostitución en los programas de mantenimiento con opiáceos.
- Consolidación y mejora de los recursos asistenciales ambulatorios, hospitalarios y comunidades terapéuticas tanto públicos, como concertados.
- Coordinación entre los recursos sociales y sanitarios. Desarrollo de protocolos.
- Seguimiento de casos. Unificación de objetivos y metodologías de actuación a través de procesos de evaluación y mejora continua.
- Desarrollar la coordinación entre los recursos de prevención asistencia e inserción especialmente en inmigrantes, minorías étnicas y mujeres.
- Consolidar y desarrollar programas socio-sanitarios en coordinación con centros de reducción de riesgos y daños y pisos de acogida.
- Programas de formación y empleo tanto normalizados como específicos para
- personas con problemas de drogodependencias.
- Sensibilizar a los poderes judiciales y administrativos para que faciliten la incorporación social de las personas drogodependientes.
- Represión del tráfico de drogas a gran escala, blanqueo de dinero.
- Protección de menores para evitar que tengan a su alcance drogas legales o ilegales, y mucho menos que sean objeto de intereses económicos implicados en la venta de sustancias.
- Prohibición y cumplimiento estricto de la normativa sobre publicidad y promoción del consumo de drogas legales e ilegales

- Las propuestas de IULV CA dirigidas al cambio de la situación legal pasan por:
 - ▶ Dispensación terapéutica de heroína para drogodependientes que han fracasado en otros programas.
 - ▶ Dispensación terapéutica de cannabis para pacientes que lo necesiten en el Sistema Murciano de Salud.
 - ▶ Despenalización del consumo público, compartido y el cultivo y tenencia para consumo propio de cannabis

CULTURA Y COMUNICACIÓN LIBRES

CULTURA EN LIBERTAD Y DIVERSIDAD

La cultura es, para Izquierda Unida, no sólo un bien de consumo, sino sobre todo un instrumento de desarrollo personal y de participación y un elemento fundamental de transformación de la sociedad. Consideramos fundamental promover enérgicamente la creación, así como la difusión del conocimiento y de la cultura para que lleguen al conjunto de la ciudadanía y cumplan así su labor emancipadora. Una sociedad crítica como fundamento de la calidad democrática. El rico patrimonio cultural andaluz es, asimismo, un factor de desarrollo económico que adecuadamente gestionado es fuente de empleo, riqueza y bienestar para los territorios de nuestra comunidad.

En muchas ocasiones las políticas culturales de las Administraciones autonómicas han estado encaminadas a la promoción de productos de ocio cuya mayoría han estado desviados hacia la iniciativa privada. El resultado de todo eso es, en muchas ocasiones, un dirigismo cultural que promueve actividades elitistas y uniformes, con planteamientos abstractos y programas teóricos, y llegando pocos de ellos a ser una realidad factible y válida.

La administración andaluza no ha presentado políticas culturales verdaderamente democráticas, abiertas, participativas y sostenibles, si no que ha incidido de manera sistemática en las siguientes insuficiencias;

- La búsqueda de la rentabilidad política y económica, como factores principales de la promoción cultural.
- No se fomenta la diversidad de manifestaciones e iniciativas culturales, de grupos (espontáneos y naturales) o colectivos alternativos, por lo tanto hay un vacío en el asociacionismo cultural,
- Existe duplicidad institucional a la hora de poner en marcha iniciativas culturales
- Hay un claro desconocimiento de las potencialidades del patrimonio cultural andaluz, que lleva a sobredimensionar algunos aspectos de la cultura y a ignorar otros.
- Los creadores se encuentran atezados entre el dictado del mercado como asignador de valor y el servilismo institucional.
- La escasa financiación de los ayuntamientos y los recortes públicos afectan ya a las programaciones culturales mientras se impiden iniciativas autogestionadas.

- El insuficiente esfuerzo del gobierno de la Junta para facilitar el acceso a la cultura a las clases populares y trabajadoras.

Desde IULV CA basamos nuestra política cultural en:

- Participación de la ciudadanía en la decisión y gestión, tanto en la producción como en el goce y disponibilidad de los bienes culturales.
- Fomentar el acceso a la cultura de las clases populares y trabajadoras
- Intervenir y actuar a favor de la industria cultural pública.
- Impulsar políticas de puesta en valor del patrimonio cultural andaluz y su aprovechamiento económico sostenible.
- Favorecer el desarrollo personal a través de la cultura.
- Potenciar el desarrollo sostenible de los territorios a través de políticas culturales.
- Promover la cultura entendida como servicio público
- Fomento del asociacionismo y de las iniciativas culturales autogestionadas o ligadas a la economía social.
- Contribuir al reconocimiento, en términos prácticos, de los trabajadores de la cultura y del proceso creativo
- Defender la cultura propia del pueblo trabajador andaluz, su memoria frente a los mitos y los tópicos
- Hacer absolutamente transparente la gestión cultural de la Junta de Andalucía.

Con los objetivos políticos anteriores desarrollaremos las siguientes propuestas:

- Apoyo a los programas vinculados a los reconocimientos de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
- Fomento de las industrias culturales como fuente de empleo y riqueza.
- Plan Integral de recuperación, conservación y difusión de nuestro Patrimonio Artístico y documental.
- Concertación con entidades públicas y privadas de un sistema de becas para apoyar la formación y promoción de jóvenes creadores en todos los campos.
- Impulso del papel dinamizador de la filmoteca andaluza en el plano del apoyo a la producción y distribución de las creaciones andaluzas.
- Defensa del Flamenco y su cultura con un Plan Estratégico que contemple medidas como la recuperación de los festivales, el apoyo al conjunto de los sectores profesionales o el fomento del papel de las peñas flamencas.
- Creación de un catálogo público y de libre acceso de servicios culturales.
- Incremento de la financiación local destinada a políticas culturales
- Compromiso decidido con la música a través, entre otras, de las siguientes medidas: fomentar la creación de coros, bandas, agrupaciones folklóricas, agrupaciones de cámara, y orquestas en Conservatorios y Centros de Enseñanza, dar mayor difusión de la actividad del Centro Andaluz de Flamenco y de las orquestas andaluzas. Apoyo a grupos musicales no profesionales
- Una política decidida, continuada e integral de fomento de la lectura y la escritura.
- Inserción de las Bibliotecas en la vida cultural activa de las ciudades y provincias.

- Articulación de una Red Andaluza de Museos provinciales y comarcales.
- Desarrollo de una política escénica descentralizada

POR UNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y DEMOCRÁTICOS

En la actualidad los medios de comunicación públicos están sufriendo un fuerte ataque por parte de operadores y medios privados, grandes corporaciones y grupos de presión mediática que pretenden monopolizar el negocio de la información y el entretenimiento. A esto se unen los intereses partidistas y la falta de apuesta de los gobiernos central y autonómico por unos medios de comunicación públicos, plurales, independientes y democráticos.

Hemos de resaltar el papel que los medios y operadores privados juegan en el ataque a los medios públicos y en consecuencia contra los estratos menos favorecidos de la sociedad -la clase trabajadora- pues estos medios actúan favoreciendo a los poderes financieros con los que se hallan endeudados, entre otros muchos actores económicos responsables de la actual crisis sistémica.

Tras la implantación de la TDT nos encontramos con la proliferación de multitud de canales que, sin embargo, no ofrecen una oferta cultural, de entretenimiento o informativa variada y objetiva. La concentración en manos de grandes empresas privadas de comunicación, que responden a intereses políticos y económicos opuestos al interés general y que poseen diferentes cadenas de TV, radio o cabeceras de prensa, ponen en entredicho el derecho a la información y a la cultura de la ciudadanía andaluza.

Estas circunstancias quedan concretadas en

- Falta de pluralidad en los medios de comunicación públicos y privados.
- Nos encontramos en un momento de **concentración en manos de grandes empresas de comunicación** que responden a intereses políticos y económicos opuestos al interés general
- Falta de iniciativa pública.
- Sector al servicio de intereses privados.

Frente a esto IULV-CA apuesta por fortalecer desde los medios de comunicación social, para garantizar este servicio público esencial y el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de la diversidad andaluza. La apuesta por los medios públicos garantiza la vertebración territorial y social de Andalucía y el impulso de un sector industrial que genera riqueza económica, social y cultural y apuesta por:

- Democratizar los medios de comunicación.
- Información plural para una ciudadanía libre.
- Desarrollo de leyes que protejan los medios públicos y comunitarios como expresión de la diversidad social y territorial andaluza
- Apostar por el desarrollo de una industria audiovisual público
- Garantizar el acceso universal a las telecomunicaciones.
- Desarrollar y garantizar el derecho de acceso a medios de comunicación. Acceso igualitario de colectivos y territorios.
- Apuesta por una Radio y Televisión Andaluza 100% pública. Apostar por una red de medios públicos y comunitarios

El impulso de los objetivos anteriores se determina en las siguientes propuestas:

- Desarrollo de la normativa legal para garantizar el derecho de acceso a los medios públicos de colectivos, organizaciones políticas, sindicales y sociales, recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía.
- Eliminar la censura en las redacciones. Democratizar los medios de comunicación y garantizar el libre ejercicio y la libertad de conciencia de sus trabajadoras/es.
- Obligar y vigilar el cumplimiento de operadores y empresas de comunicación, públicas y privadas, de unos parámetros mínimos de calidad en los contenidos, que difundan valores de convivencia, protejan a la infancia, no fomenten ningún tipo de discriminación y respeten los derechos laborales de sus plantillas.
- Fortalecer el Consejo Audiovisual. Dotarlo de medios y capacidad interventora para otorgar o quitar licencias en el espacio radioeléctrico.
- Desarrollo de leyes que protejan los medios públicos y comunitarios como expresión de la diversidad social y territorial andaluza.
- Garantizar la titularidad pública de la RTVA, Canal Sur Radio y Canal Sur TV. Dotarla de una financiación pública y estable que garantice el presente y futuro del servicio público. Elevar la producción propia y exigir cláusulas de garantía social a las empresas que subcontrate.
- Promover los pilares de una red comunitaria que se desarrollase localmente, e impulsada desde unas instituciones a través de subvenciones pero garantizando siempre su independencia.

POR UN NUEVO MODELO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y POR LA LIBRE DISTRIBUCIÓN DE LA CULTURA

Democratizar la comunicación y la cultura para cambiar profundamente el modelo vigente de propiedad intelectual, es nuestro objetivo, pues el actual, modelo concebido, en un principio, para proteger el trabajo del creador individual, se ha convertido principalmente en un instrumento de maximalización del beneficio de grandes empresas de carácter multinacional y dificulta el acceso al conocimiento.

Vivimos en una época en la que los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han democratizado y amplificado el acceso a la información y a la cultura. En algunos aspectos, también han democratizado el acceso a los medios de producción, provocando que en muchas profesiones (especialmente en los mundos editorial, audiovisual y musical) el trabajador, creador o artista tenga a su disposición medios a los que antes solo tenían acceso grandes empresarios.

Por otra parte, este avance ha hecho que entre en crisis irreversible el modelo de industria clásico en muchos campos. Estos se basaban en la necesidad de un soporte físico para transmitir obras e ideas, así como la necesidad de crear una red de distribución para que esos llegaran al consumidor/ciudadano. Fue bonito mientras duró. Se ha acabado. Internet ha convertido este modelo en obsoleto. Básicamente, se ha eliminado a los intermediarios (editores y distribuidores) y se está facilitando el contacto directo entre el creador y el consumidor de su obra. No obstante, sigue existiendo las siguientes deficiencias en este terreno:

- Modelo de recaudación de derechos mediante entidades de gestión privadas
- Exclusividad de las empresas privadas de telecomunicaciones para proporcionar acceso a internet

Desde IULV CA creemos que es básico desde la política intervenir en:

- Apoyar y fomentar el movimiento de Conocimiento Libre, empezando por la utilización de Software libre por el conjunto de la administración autonómica .
- Reversión de los derechos de autor a una entidad de carácter público, centrada en la defensa de los derechos de los trabajadores de la cultura, con políticas participativas, ecuanímes y transparentes
- Reconocimiento de las alternativas al “copyright” tradicional, como las licencias Creative Commons, dejando en manos del autor la cantidad de derechos sobre los que quiere licenciar su obra, así como la capacidad del autor de renunciar a estos derechos.

UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DEMOCRÁTICA, SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA

Para Izquierda Unida, la información no es un negocio, sino un derecho. La democratización de los medios de comunicación es una de las condiciones imprescindibles para una auténtica democracia participativa. Izquierda Unida propone un programa de gobierno en comunicación orientado a la modernización, plena democratización y al desarrollo social y autónomo de la ciudadanía en materia de comunicación y derechos culturales

La realidad actual viene definida por las siguientes limitaciones:

- Los medios de comunicación no se dirigen a la transmisión de información veraz y plural sino que son una herramienta para otros propósitos: la victoria electoral de turno, la rentabilidad de otros productos asociados al mismo grupo multimedia, cuando no intereses absolutamente espurios como la especulación urbana o mercantil.
- Hay numerosos sectores de la población andaluza que no se sienten representados por los medios de comunicación, prueba de ello es la programación segmentada y sectorizada de la RTVA, que se dirige a un público muy determinado.
- Persisten escasos niveles de sindicación y defensa de los derechos laborales del periodista.
- Existe una excesiva municipalización del hecho informativo, ejemplo de ello es que ni un solo diario que vertebralmente informa a toda la comunidad andaluza.

Frente a la mercantilización de la información y del conocimiento y frente a la visión neoliberal del uso de la Informática y de las Telecomunicaciones que deja en manos del mercado el crecimiento y la expansión de su difusión y a una visión dirigista del progreso basada únicamente la acción unilateral de las Administraciones Públicas, en IULV-CA establecemos:

- Potenciar políticas relativas a medios de comunicación transparentes y que visibilicen las diferentes sensibilidades ideológicas y sociales.
- Eliminar el control político y empresarial de los medios de comunicación públicos.
- Promover la participación ciudadana en los medios de comunicación.
- Fomentar el conocimiento de la realidad de los distintos territorios de Andalucía y potenciar la identidad andaluza a través de los medios de comunicación.
- Desarrollar políticas que impulsen el interés de las ciudadanas y ciudadanos andaluces hacia una toma de postura crítica a través de la información.
- Vertebrar el territorio andaluz a través del conocimiento de sus diferentes realidades.

Andalucía,
CON MÁS FUERZA



Rebélate!



iuandalucia.org
#conmasfuerza